



Radiografía de un Golpe de Estado

Otra vez la Democracia en Peligro

Pablo Ramos Sánchez

Prohibida su venta



Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social

Biblioteca Laboral N° 41

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

Título: Radiografía de un Golpe de Estado
Otra vez la Democracia en Peligro

Autor: Pablo Ramos Sánchez

1era. Edición: Puerta del Sol - Octubre 1983

2da. Edición: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Diciembre 2016

D.L. x-x-xxx-xx

Distribución Gratuita
La Paz - Bolivia



Radiografía de un Golpe de Estado

Otra vez la Democracia en Peligro

Pablo Ramos Sánchez

ÍNDICE

PRÓLOGO	7
PRESENTACIÓN	17
PRÓLOGO A LA 3ra. EDICIÓN	19
ANTECEDENTES DEL GOLPE DE ESTADO DEL 17 DE JULIO DE 1980	37
I. Antecedentes inmediatos: El régimen fascista de Banzer.....	38
II. Antecedentes inmediatos.....	45
LA MECÁNICA DEL GOLPE	70
I. Los preparativos.....	70
II. El terrorismo.....	75
III. La psicosis del golpe.....	79
IV. Los paramilitares.....	85
V. Las bases de sustentación social y política.....	93
VI. El papel del imperialismo y de los países veci- nos.....	104
TIPIFICACIÓN DEL GOLPE	115
I. Carácter fascista	115
II. Represión de la clase obrera.....	125
III. Contenido económico.....	140

IV. Los intentos de institucionalidad y sus perspectivas.....	156
V. Palabras finales.....	170
SEGUNDA PARTE.....	173
LO QUE PASÓ DESPUÉS.....	175
I. Los últimos días del régimen.....	175
II. Los gobiernos transitorios.....	186
III. La UDP en el gobierno.....	198
IV. Otra vez la democracia en peligro.....	207

PRÓLOGO

Pablo Ramos Sánchez, revolucionario e intelectual boliviano. Ha dedicado su vida al servicio de nuestro pueblo, a la investigación y a la enseñanza. Producto de esa actividad, el autor fue perseguido por la dictadura del general Luis García Meza, habiendo tenido que salir al exilio, donde se publicaron dos ediciones de este libro (en México y Ecuador) y ya después, en 1983, se realizó una nueva edición.

Radiografía de un golpe de Estado es un texto que en lo específico se refiere al golpe de Estado militar del 17 de julio de 1980, sus antecedentes y sus consecuencias; pero en lo genérico, realiza un análisis del contexto previo al golpe militar en lo que significó para Bolivia los 15 a 17 años anteriores padecidos bajo dictaduras militares o ante el peligro inminente de su implementación, de tal forma que observa el temor de la población hacia 1983 a un nuevo golpe de Estado.

Siempre será necesario establecer el orden de batalla en los golpes de Estado vividos en nuestro país. De un lado están: la Embajada Norteamericana, las empresas transnacionales, los empresarios privados bolivianos, los partidos políticos y grupos de presión dependientes orgánica e ideológicamente de los anteriores; por otra parte está la inmensa y aplastante mayoría nacional, con obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, ar-

tistas, etc., sus partidos políticos, los sindicatos liderizados por la Central Obrera Boliviana.

Los golpes de Estado, anteriores a la revolución nacional del 9 de abril de 1952, fueron consecuencia de la división del planeta entre dos modos de producción económicos y políticos, es decir entre el socialismo y el capitalismo. Debido a esa bipolaridad, nacida después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que se denominó Guerra Fría, los Estados Unidos de Norteamérica realizaron operaciones abiertas o encubiertas, convencionales o especiales, en distintos países del mundo con la finalidad de controlarlos económica, política y militarmente. Para Norteamérica, Bolivia fue un problema complejo después que se produjo la revolución nacional del 52. En principio se pensó que se trataba de una revolución socialista por la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, entre otras conquistas del pueblo. En cuanto a su política internacional, el Movimiento Nacionalista Revolucionario mantuvo una posición ondulante, entre un apoyo abierto a los norteamericanos y de cuando en cuando uniéndose a los países no alineados (con las dos súper potencias). Internamente, el movimientismo se subordinó a los dictados de la Embajada Norteamericana. Para la indicada embajada, el problema radicaba en cómo hacer entender en Washington que en Bolivia no se había producido una revolución socialista, sino una revolución democrática burguesa, pero que debido

a las contradicciones internas bolivianas en cualquier momento podría producirse la insurrección de masas obreras y campesinas que definan al país como comunista; por lo que consideraban que había que apoyar a los gobiernos del MNR (Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo). Desde 1953, la embajada en acuerdo con Paz Estenssoro procedió a reorganizar a las Fuerzas Armadas con el Programa de Ayuda Militar (PAM), FFAA que fueron barridas del país en la insurrección de abril del 52. Luego del triunfo de la revolución cubana en 1959, Norteamérica desarrolla la Doctrina de la Seguridad Nacional, mediante la cual establece que las FFAA latinoamericanas ya no se enfrentarían entre ellas en guerras entre países vecinos, por tanto, el nuevo enemigo para ellas era el enemigo interno: el comunista, el sindicalista, el nacionalista; enemigo era todo aquel que no esté de acuerdo con el capitalismo y con la hegemonía norteamericana. Las FFAA debían buscar, identificar y exterminar al enemigo interno, motivo por el cual las promociones de cadetes de los institutos militares latinoamericanos fueron enviadas a la Escuela de las Américas en Panamá o en Carolina del Norte a entrenarse bajo estricta vigilancia de las fuerzas militares yanquis. De tal manera que esos ejércitos nacionales latinoamericanos en realidad se convirtieron en tropas mercenarias al servicio de los intereses norteamericanos. En el caso boliviano, la embajada veía el peligro revolucionario en el movimiento sindical di-

rigido por Lechín y no así en la capacidad operativa de las distintas tendencias comunistas nacionales (stalinistas, maoístas, trotskistas o castristas). Motivo por el cual se decidieron a afectar a la columna vertebral de la COB, a los mineros, en el entendido de que disminuyendo la capacidad de movilización y acción de los mineros de la COMIBOL, se paralizaba el poder de los trabajadores bolivianos en su conjunto, lo que Zavaleta Mercado define como lo nacional popular, en cuanto al enfrentamiento entre los intereses de la Patria con los del imperialismo norteamericano, en última instancia entre los mineros y las FFAA.

Finalmente, después de doce años de gobiernos del MNR, el 4 de noviembre de 1964, el general René Barrientos Ortuño, vicepresidente constitucional, y el general Alfredo Ovando Candia, Comandante de las FFAA perpetraron un golpe de Estado con apoyo de la institución armada y de los partidos políticos de izquierda y derecha. La caída del régimen de Paz Estenssoro y el MNR, no supuso una mejora para los trabajadores o para la población en general. En realidad, el país vivió su primera experiencia bajo sanguinaria dictadura militar; la Embajada Norteamericana gozaba de alegría al igual que las transnacionales y los empresarios privados nacionales. Había llegado la hora de “poner en su lugar” a los trabajadores y a los indios. Pero además, la dictadura Barrientos – Ovando inició actos abiertos de hostigamiento que culminaron en el genocidio, con

masacres en las ciudades de La Paz y Oruro y en los distritos mineros; sin contar la detención, tortura y asesinato de líderes sindicales. Así, la embajada estuvo en condiciones inmejorables de manejar a sus marionetas militares para enfrentar la guerrilla del Che Guevara en Ñancahuazú o la del ELN en Teoponte.

La muerte de Barrientos el 28 de abril de 1969 y la caída de Ovando el 7 de octubre de 1970 fueron momentos importantes para los trabajadores que pudieron reorganizarse y pasar a la contraofensiva en ese proceso de recuperación de la independencia de la Patria. Parte de aquello fue la asunción al gobierno del general Juan José Torres Gonzales en medio de una imponente movilización de trabajadores, luego de la huelga general de la COB que derrotó al golpe militar pro norteamericano. El gobierno izquierdista y progresista de Torres convivió con la Asamblea del Pueblo organizada por la COB y los partidos políticos de izquierda como un soviet o una escuela de aprendizaje comunista según se viera por los trotskistas o stalinistas. Tanto el proyecto revolucionario del gobierno como el de la Asamblea del Pueblo terminaron frustrados ante el golpe militar del coronel Hugo Bánzer Suárez, FFAA, MNR, FSB, embajada norteamericana, grupos católicos fanáticos y empresarios privados.

Esta cruel dictadura se extendió a lo largo de siete años, se derrumbó a partir de la huelga de hambre de

las cuatro mujeres mineras en diciembre de 1977, que se masificó con miles de huelguistas, ocasionando que el dictador declare la amnistía general e irrestricta para el retorno de cientos de exiliados y perseguidos, así como convoque a elecciones generales. El candidato de la dictadura fue el general Juan Pereda Asbún (temible ministro de Gobierno), pero fue derrotado por el frente Unidad Democrática y Popular (Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora), a pesar de lo cual en los días posteriores se fraguó un fraude electoral tan escandaloso que Bánzer tuvo que anular las elecciones, lo que a su vez generó otro golpe de estado el 21 julio de 1978 que llevó a la presidencia a Juan Pereda Asbún. Ante la grave situación económica y el desborde social de los trabajadores, se produjo un nuevo golpe de Estado encabezado por el general Luis Padilla Arancibia el 24 de noviembre de 1978, quien convocó nuevamente a elecciones generales para principios de 1979. Realizadas las elecciones volvió a ganar la UDP, empero al no haber obtenido la mitad más uno de los votos, ni la mayoría de senadores y diputados, la elección en el H. Congreso Nacional se trabó. Finalmente, los tres partidos mayoritarios (UDP - Siles Zuazo, MNR - Paz Estenssoro y ADN - Bánzer Suárez) definieron elegir a un presidente interino, habiendo recaído la designación en Wálter Guevara Arce (otro líder histórico del MNR que fundó una organización disidente en otro tiempo) que fungía como presidente de la Cámara de Senadores.

Falto de apoyo de los tres partidos mayoritarios, con problemas económicos y sociales, el gobierno interino sufrió otro golpe de Estado militar liderado por el general Alberto Natusch Busch acompañado de algunas personalidades civiles del MNR (Guillermo Bedregal Gutiérrez, José Fellman Velarde, Abel Ayoroa Argandoña, Edil Sandóval Morón, etc.) el 1 de noviembre de 1979. Sin el respaldo de los partidos políticos que supuestamente estaban conjurados y luego de una heroica resistencia popular comandada por la COB, el 16 de noviembre Natusch huyó del país. El H. Congreso Nacional volvió a sesionar y esta vez eligió a Lidia Gueyler Tejada (MNR) que en ese momento era presidenta de la Cámara de Diputados. La presidenta padeció el mismo problema que su antecesor, ya que ningún partido político la apoyó y tuvo que organizar un gabinete independiente.

Para aquel momento la crisis económica mundial hacía escarnio en Bolivia. Durante el periodo dictatorial de Bánzer, el país fue endeudado por miles de millones de dólares, resultando que a fines de la década del setenta era imposible cumplir con los plazos del servicio de la deuda externa. Para peor, cada grupo militar golpista que abandonaba Palacio de Gobierno, previamente asaltaba las bóvedas del Banco Central de Bolivia, saqueando los escasos recursos económicos que allí se acumulaban.

Es en esas circunstancias en que se produjo el sangui-
nario golpe militar del general Luis García Meza Teja-
da, sólo comparable con el de Bánzer, por los miles de
muertos, heridos, detenidos, torturados, desaparecidos,
confinados, exiliados, mutilados o con aplicación de
ley de fuga, etc., además de la terrible corrupción y el
enriquecimiento por el manejo directo del narcotráfico.

Los trabajadores de Bolivia han sufrido en carne propia
todos estos golpes militares apoyados por civiles y sus
organizaciones, así como por la Embajada Norteamer-
icana o por países como Brasil y Argentina dentro del
marco del Plan u Operación Cóndor, las transnacionales
y el empresariado privado boliviano. Ha costado mucho
al pueblo boliviano recuperar la democracia y las ga-
rantías constitucionales. Si algún balance corresponde
realizar, es que después de cualquier gobierno popular
y antiimperialista, lo que se viene es la dictadura mili-
tar o el neoliberalismo. La conciencia revolucionaria de
los trabajadores ha madurado lo suficiente como para
comprender la importancia de la defensa de las coyun-
turas democráticas, de los procesos democráticos y hoy
en día del Proceso de Cambio. Ningún trabajador del
campo o la ciudad quiere volver a vivir estas terribles
experiencias traumáticas y negativas. Es nuestro deber
u obligación defender la independencia, la integridad, la
dignidad y la soberanía de nuestra Patria.

Acerca de este golpe de Estado trata el libro del Lic. Pablo Ramos Sánchez.

Nos enorgullecemos de presentar un segundo libro de este importante escritor boliviano; anteriormente, la Biblioteca Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social publicó la obra “El neoliberalismo en acción”.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

Diciembre de 2016

PRESENTACIÓN

Estas líneas tienen el carácter de opiniones personales que se formulan con el propósito de contribuir a una reflexión colectiva sobre los problemas actuales de Bolivia. No son resultado de una discusión previa; se realizan con la intención de propiciar un intercambio de ideas que, de sostenerse, podría resultar muy provechoso para todos los que estamos comprometidos con la causa del pueblo. Representan un criterio individual, que no compromete a grupo alguno, pero que se ajusta al marco de responsabilidad que un militante revolucionario debe observar en cualquier circunstancia.

Como todos los trabajos de este tipo, sufre la influencia de la experiencia personal del autor y está condicionado por el acceso a la información de los hechos. El que escribe desde lejos está en desventaja porque no tiene a mano la riqueza de elementos que la realidad es capaz de poner ante la mirada acuciosa del investigador; pero tiene la ventaja de observar los perfiles del conjunto, las grandes líneas y tendencia que a veces, no es posible aprehender estando inmerso en la realidad que se estudia.

P.R.S.

PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN

Las dos primeras ediciones de este trabajo salieron a luz fuera del país, en México y el Ecuador. Circularon entre compatriotas que residen en el extranjero y entre los que, a raíz de los acontecimientos políticos, recorrían el camino del exilio. Manos amigas lo hicieron circular, poligrafiado en Bolivia. En esta edición se añade al texto original que se reproduce sin cambios un capítulo referente a los acontecimientos posteriores al mes de mayo de 1981 en que el trabajo fue escrito. La incorporación de este capítulo adicional permite actualizar el análisis y tiene interés directo para comprender los dos años de tragedia que vivió Bolivia desde el 17 de julio de 1980.

El trabajo se refiere a hechos del pasado pero fue escrito mirando hacia el porvenir. La historia es importante cuando enseña el camino del futuro. Por eso, se reproduce sin cambios en texto original. Si bien lo esencial consiste en la interpretación de los hechos a partir del conocimiento directo de gran parte de los mismos este trabajo refleja también la imagen que sobre el país se formó el autor desde la distancia. Las fuentes que se manejaron consistieron en publicaciones de agencias noticiosas internacionales, recortes de prensa llegados desde el interior del país, revistas especializadas y documentos que circularon en el extranjero. En muchos aspectos se conoce más a Bolivia en el exterior que dentro del propio país.

Las páginas están impregnadas por la angustia de un boliviano que sufre los problemas de su pueblo. Por eso son un testimonio y una denuncia. Los que somos testigos de esta época no podemos escribir con la frialdad y el desapasionamiento de los que, colocándose al margen, ven deslizarse la historia ante sus ojos. La interpretación de los problemas del presente no sólo debe servir para que los hombres del futuro comprendan su pasado, sino para que los hombres de hoy se den cuenta de la necesidad de construir una mejor sociedad para los hombres del futuro.

Son, pues, páginas de lucha, escritas con angustia, pero que encierran una confianza absoluta en las inmensas reservas morales del pueblo boliviano.

En Bolivia, el que piensa y escribe debe estar consciente de que corre ciertos riesgos. Para no afrontarlos, muchos prefieren guardar silencio o ignorar los problemas, como si no existieran. El escapismo intelectual y el silencio obligado están provocando la progresiva frustración de importantes grupos de intelectuales bolivianos.

Otros tienen que emigrar hacia países donde existe libertad de pensamiento y expresión y allí realizan los aportes que no podrían llevar a cabo en su propia Patria. Ésta es una de las causas explicativas de la escasa producción intelectual en Bolivia. Hace muy poco tiempo, un Coronel de Ejército, que fungía como Ministro del

Interior en el Gobierno del General Vildoso, manifestó en declaraciones a la prensa que “la intelectualidad boliviana es perezosa”. En labios de un Coronel boliviano estas palabras suenan tan sarcásticas como las del verdugo que pregunta a su víctima: “¿de qué te quejas?”.

Como se sabe, todos los fenómenos de la sociedad tienen sus causas; es decir, no ocurren por azar. Así, el país de hoy es producto de su historia. De ahí que lo importante es comprender por qué Bolivia ha caído en una situación tan crítica y adquirir conciencia de cómo puede salir de ella. Pero, no se trata de que el conocimiento de la realidad, por sí mismo, nos permitirá superarla. Es imprescindible un esfuerzo gigantesco que los hombres individualmente no pueden realizar, pero sí los pueblos. Sólo la lucha social nos permitirá transformar Bolivia y sacarla de su postración actual. Esta es una lucha titánica porque sus enemigos son realmente poderosos. El imperialismo y sus aliados locales no cederán tranquila y silenciosamente sus puestos de dominio desde los que succionen el trabajo y la sangre de los bolivianos.

La historia de Bolivia de los últimos 18 años se caracteriza por el predominio militar sobre la sociedad civil. Los militares han manejado el gobierno durante casi dos décadas, tiempo suficiente para dejar huellas profundas en el acontecer nacional. Son, por tanto, los responsables inmediatos de lo que hoy ocurre. Si bien

es cierto que los verdaderos usufructuarios del poder son el imperialismo y las clases dominantes que se agazapan tras los militares para explotar a las clases subalternas, no cabe duda que el pueblo identifica a los uniformados como los responsables directos, ya que ellos aparecieron durante estos 18 años en el comando del Estado y en la conducción de la política económica.

Una cuestión importante para el estudio y el debate consiste en el enfoque sobre la relación específica entre los militares y las clases dominantes en Bolivia. Los aspectos de la cuestión se refieren a si, en el contexto actual, son las clases dominantes las que, deliberada y racionalmente, utilizan a los militares como instrumentos para la realización de sus fines de clase, o si los militares bolivianos disponen de un grado de independencia relativa tan elevado que pueden actuar según criterios propios y escapar del control de aquéllas. En otras palabras, el tema es el de la mediación militar en la realización de los intereses de las clases dominantes. En tiempos de la oligarquía minera (Patiño, Hoshchild y Aramayo) no existe ninguna duda sobre quién decidía el accionar fundamental de los militares y del Estado. En esos tiempos, los generales tenían que buscar el apoyo de los magnates mineros; la realización de subordinación era clara y el centro de poder era indiscutible. Empero, parece ser que ahora son los empresarios privados quienes tienen que tocar las puertas de los cuarteles y hacer la venia ante los generales.

Para muchos esta cuestión no necesita debatirse, pues la teoría proporciona explicaciones claras. Ella dice que los militares constituyen una capa social que está al servicio de las clases que detentan el poder económico; son el sostén armado de un orden social que da a unos la capacidad de subordinar y explotar a otros. En los países donde las clases dominantes han alcanzado un alto grado de madurez y son capaces de conducir la sociedad conforme a sus propósitos, dichas conclusiones teóricas tienen plena vigencia. Pero, desde 1952 ellas no pueden aplicarse mecánicamente en Bolivia.

En este, trabajo se plantea la hipótesis de que en nuestro país las clases dominantes actuales, si bien influyen sobre los militares, no son capaces de establecer un sólido control sobre las Fuerzas Armadas y están imposibilitadas para utilizarlos, deliberada y racionalmente, como un instrumento al servicio, exclusivo de sus intereses. Esto quiere decir que las clases dominantes no pueden por sí solas liderizar orgánicamente el proceso social y político boliviano, debido a lo cual tienen que subordinarse al imperialismo y se ven en la necesidad de marchar en la retaguardia de sus aparatos armados. Por eso el gran enfrentamiento político directo se da entre la clase obrera y los militares, detrás de los cuales están agazapadas las clases dominantes. En otros términos, las clases dominantes carecen de poder suficiente para manejar a los militares y tienen que escudarse en éstos, desempeñando el papel de azuzador y aleccionador,

pero sin poseer en sus manos el control y la decisión, ni determinar coherentemente su comportamiento.

Esta hipótesis no debe ser interpretada en el sentido de una total independencia de los militares. En última instancia la acción de éstos en el gobierno responde a los intereses fundamentales de las clases dominantes, aún en el caso de que ellas sean incapaces de consolidar hegemonías duraderas sobre el conjunto de la sociedad. La misión fundamental de los militares es sostener el sistema y ella se traduce en las funciones específicas de resguardar el orden, mantener la paz interna, defender las instituciones vigentes y proteger las fronteras. Así se establece la relación general y abstracta entre la función de los militares y los intereses de las clases dominantes.

Empero, ése no es el punto en discusión, sino que éste se refiere a la relación concreta y actual entre los militares y las clases que fungen como dominantes en la realidad boliviana posterior a 1952. Se trata, pues, del carácter específico de la mediación militar y la autonomía relativa de los militares en Bolivia.

Aquí también corresponde plantear otros temas para la discusión. Los más importantes son: ¿Hasta qué punto puede hablarse de que Bolivia es un país con sistema? ¿El papel real de los militares ha contribuido a fortalecer o a debilitar el sistema? Si bien estos temas no se

tocan explícitamente en este trabajo, se apuntan algunas hipótesis y se formulan ciertas conclusiones que sin duda motivarán la reflexión y el comentario crítico de muchos lectores. La cuestión de hasta qué punto puede considerarse a Bolivia como un país con sistema; es decir, si ha logrado estructurar y consolidar un sistema, no se refiere solamente a si se han consolidado o no las relaciones capitalistas de producción o si éstas son las dominantes en la estructura de la sociedad boliviana. A esta altura de las investigaciones sobre la realidad boliviana no puede quedar dudas de que Bolivia es un país capitalista. Pero, países capitalistas son también Inglaterra, Estados Unidos, Argentina o Haití.

Por eso el tema va más allá de la discusión referida al predominio de las relaciones capitalistas de producción y tiene que abarcar aspectos vinculados con toda la gama de relaciones sociales y elementos de la superestructura. En términos capitalistas, puede decirse que un país con sistema es aquel que ha logrado consolidar un conjunto de ideas, conductas e instituciones, que corresponden plenamente a las relaciones capitalistas de producción. En rigor, es un país en el que se da una total correspondencia entre la superestructura y la base económica.

Al respecto, una de las líneas de análisis que se sigue en el trabajo se refiere a que la burguesía boliviana es la menos interesada en la institucionalidad burguesa.

El permanente ajeteo de sus distintas fracciones por quebrar la institucionalidad, alentando golpes y contra-golpes, es una patética demostración de este hecho. El mejor testigo es el Gral. García Meza, quien fue muy taxativo al declarar (agosto de 1982) que “asumió la Presidencia de la República a pedido de la empresa privada, la banca, los transportistas y otros sectores”. Esto avala la conclusión que se formula sobre la extemporaneidad de la democracia burguesa en Bolivia, puesto que la clase que debería mostrar interés fundamental en ella es la que más se empeña en obstaculizarla y destruirla.

En general, las actitudes y comportamientos de las clases dominantes reflejan que no existe una plena y total correspondencia entre la superestructura y las relaciones capitalistas de producción. Así, los empresarios privados, en su mayoría actúan preferentemente guiados por criterios precapitalistas para lograr ganancias fáciles y rápidas, a base de la influencia política, la ventaja ilegítima, la acción fraudulenta, la especulación, la depredación y el saqueo de los recursos naturales, en lugar de basarlas en la racionalización de sus actividades y en los aumentos en la eficiencia y en la productividad; son pues, empresarios con mentalidad precapitalista y ello se traduce en su incapacidad para comandar el proceso económico y social boliviano.

Consideraciones pericidas podrían efectuarse en relación con muchos otros aspectos importantes de la supe-

reestructura, tanto en lo concerniente al Estado como a los partidos burgueses, las ideas políticas, la organización jurídica y otros elementos. Lo más significativo se revela en el frecuente cambio de Constitución Política del Estado, por cada grupo militar que asalta el poder. Se ha vuelto una costumbre, desde Bánzer para acá, poner en vigencia la Constitución “sólo en aquellos aspectos que no contradigan la acción del gobierno”. Actitudes como éstas representan un retroceso de varios siglos en el derecho y la institucionalidad burgueses.

Se trata, efectivamente, de un país capitalista en el que se da un proceso muy lento tanto en la disolución de las relaciones precapitalistas como en la instauración de las relaciones capitalistas (dependientes, deformadas y sometidas a limitaciones). La formación de las clases fundamentales del sistema se vio influida por dos grandes fenómenos contradictorios: la dominación imperialista y la Revolución Nacional, a pesar de los cuales no se eliminaron las supervivencias precapitalistas. Así se hicieron presentes, por un lado, las distorsiones provocadas por la dominación extranjera en cuanto a las pautas de vida y de consumo, sistema de valores, expresiones culturales y demás aspectos; y, por otro, los nuevos elementos que el movimiento revolucionario introdujo en la superestructura, pero sin que hubieran podido resolver el problema de su inadecuación con respecto a la base.

De esta forma, la cuestión de hasta qué punto Bolivia es un país con sistema plantea la necesidad de establecer con rigor y precisión las características principales que presenta en la actualidad la formación social boliviana. Empero, como el presente trabajo tiene límites muy definidos este tema sólo es tocado tangencialmente en él.

En cuanto a si la participación de los militares en el ejercicio del poder contribuyó o no a fortalecer el sistema, aquí se plantean conclusiones mucho más definidas. Se sostiene que la acción de los gobiernos militares, especialmente en el campo económico, contribuyó a desencadenar y profundizar la crisis, reforzando los factores estructurales que la generan. Ésta es una de las proposiciones centrales: los regímenes fascistas que asaltaron el poder en los últimos años hicieron más difíciles las condiciones de funcionamiento del propio sistema capitalista en Bolivia, acentuando sus contradicciones y llevándolo a situaciones muy próximas a su desintegración. La profunda crisis actual es el testimonio más patético de esta conclusión.

En esta misma temática sale a luz la paradoja entre los resultados totalmente contrarios a la nación y los postulados de “reconstrucción nacional”, “salvación nacional” o “desarrollo nacional” que reiteradamente se han utilizado para justificar la conculcación de la soberanía popular. La nación boliviana ha sido la víctima más afectada por la acción de los gobiernos “naciona-

listas”. La nación sufrió derrota tras derrota en los diferentes planos y es indudable que hoy se encuentra en una situación más difícil que hace diez años. La nación ha sufrido una incalculable pérdida de potencialidad, debido a la dilapidación de sus recursos naturales, al deterioro de sus recursos humanos y a la hipoteca de sus principales fuentes de riqueza por el endeudamiento externo. En suma, se ha perdido gran parte de la soberanía nacional.

Estos regímenes han sido enemigos declarados de la nación trabajadora. Si se tiene en cuenta que las grandes mayorías nacionales —constituidas por obreros, campesinos, empleados, estudiantes y otros sectores de las capas medias— constituyen la esencia de la bolivianidad, la conclusión inevitable es que tales regímenes estuvieron en contra de Bolivia. Esta conclusión se afianza al comprobar que por obra de estos gobiernos, nuestro país es ahora más dependiente y está más sometido al control y las decisiones foráneas.

Asimismo, no se debe olvidar que la juventud boliviana ha soportado enormes perjuicios. Si se contabilizan todos los períodos de interrupción violenta y paralización obligada en las actividades universitarias, se llega a totalizar más de tres años de pérdida neta para la juventud boliviana, en el corto lapso de una década. Si a esto se añade el desquiciamiento y desorganización de los planes de estudio y programas, se concluye que una de las

mayores víctimas de estos regímenes ha sido la juventud que no tiene recursos para salir del país a continuar sus estudios en otras universidades. ¿Cuál es la razón de todo esto? Aquí tenemos otro tema para una investigación seria y fundamentada a fin de determinar las causas del atropello sistemático contra aquellos que son, sin lirismos ni falsas alabanzas, la esperanza de la Patria.

Pero, hay otro campo que también justifica una preocupación especial por parte de los estudiosos de la realidad nacional. Se trata de las actitudes contra la cultura. La persecución de los intelectuales (escritores, periodistas, profesores, artistas, etc.) ha constituido una tarea permanente de estos regímenes. Sin embargo, eso no es todo, ni siquiera lo más importante. Los peores atentados se produjeron durante los asaltos a las universidades, con la destrucción y saqueo de bibliotecas, laboratorios, imprentas y centros de publicaciones. Es preciso estudiar el porqué de tanto ensañamiento contra la cultura.

No puede quedar fuera de esta línea de preocupaciones, el problema de la crónica inestabilidad de la sociedad boliviana. No consiste solamente en la inestabilidad política que se patentiza en la larga cadena de golpes de Estado que ensombrecen nuestra historia; sino que abarca todas las dimensiones de la dinámica social. Las explicaciones últimas residen en las características del desarrollo capitalista dependiente, que no ha llegado a

proyectar sus relaciones de producción sobre toda la economía sino sobre una parte de ella solamente. Las raíces de inestabilidad se vinculan con la acción de la ley del desarrollo desigual económico y político en el conjunto del sistema capitalista y en el funcionamiento interno de la sociedad boliviana. De ahí debe partir el análisis de la inestabilidad.

Son, pues, totalmente falsas las teorías que sitúan las causas de este fenómeno en la raza, la psicología social, los factores geográficos o en motivaciones de la conducta individual. Si se busca una explicación científica tiene que penetrarse en el estudio detallado de la estructura económica, las formas superestructurales y las relaciones de dependencia y subordinación en que se encuentra la sociedad boliviana. Por eso, la identificación y análisis minucioso de las diferentes contradicciones y procesos dialécticos que presiden el desarrollo de nuestro país conducirán lógicamente a una explicación cabal de las causas finales de la inestabilidad.

Sobre este aspecto, el trabajo que aquí se publica trata de mostrar las causas generales de la inestabilidad política, tomando como referencia el golpe del 17 de julio de 1980. Sin embargo, son evidentes sus insuficiencias en cuanto a una penetración más profunda en las causas específicas, de la inestabilidad política boliviana. Esta tarea es un reto para los investigadores nacionales, pues ya es tiempo de trascender las premisas

generales y avanzar en su comprobación empírica, siguiendo los hilos capaces de conducir hasta el meollo de las motivaciones concretas y particulares de los diferentes golpes, asonadas, cuartelazos, levantamientos, rebeliones, motines, alzamientos e insurrecciones que con tanta frecuencia alteran la vida nacional. Trabajos en este sentido enriquecerán no sólo el conocimiento sobre nuestra realidad socio-histórica, sino también la propia teoría política.

Como se ve, los intelectuales bolivianos tienen grandes tareas por delante. Los próximos años tendrán que ser de intensa actividad. El desafío es mayor dadas las difíciles condiciones en que se trabaja en nuestro país. Por otra parte, éste tiene que ser un esfuerzo colectivo, en el que participen los intelectuales de todas las especialidades. Sin embargo, es de destacar el enorme aporte que deberán ofrecer los sociólogos, particularmente. Ellos tendrán que dar respuesta a cuestiones de gran importancia para el conocimiento de nuestra realidad. Cabe aclarar que ésta no es una asignación gratuita de tareas y obligaciones.

En efecto, es mucho -casi todo- lo que nos queda por conocer y escribir sobre las leyes que rigen el comportamiento de las clases, fracciones, capas y grupos que constituyen la sociedad boliviana. Nuestra realidad es inmensamente rica en experiencias, pero es sumamente escasa en el conocimiento sistemático de las mismas. La

praxis del movimiento social boliviano cubre todas las perspectivas y se ha constituido en una fuente inagotable de nuevos métodos, de nuevas tácticas y estrategias y, en general, de nuevas formas de abordar y superar los problemas, por difíciles que sean. Frente a la enorme importancia adquirida por la praxis, se destaca la endeblez del esfuerzo teórico. El desbalance es descomunal. Este mismo fenómeno amerita una investigación profunda.

Sin embargo, hacer estas anotaciones no quiere decir que estemos de acuerdo, ni remotamente, con las aseveraciones del Coronel-Ministro, mencionado en un párrafo anterior. Los grupos militares que controlaron el poder en los últimos once años (con excepción de los que acompañaron al Gral. David Padilla) han demostrado una fobia especial contra los sociólogos y la sociología. Así, la facultad más afectada por los que conculcaron la autonomía universitaria fue justamente al Facultad de Sociología, que recibió el furioso embate de quienes parecían guiados por una idea fija de erradicar la sociología y evitar a toda costa la formación de sociólogos. La muerte, a balazos, del sacerdote Mauricio Lefebre, decano de esa facultad, el día sábado 21 de agosto de 1971, significa mucho más que una mera casualidad. Las causas de esta actitud son claras, pero también exigen una sistematización teórica.

Son muchos los campos en que el trabajo de los sociólogos resultará fructífero; pero pocos tienen tanta

urgencia como el de la Sociología Militar en Bolivia. No quiere decir esto que se desconozca la importancia del estudio del movimiento obrero o de las clases y fracciones dominantes; más, lo que se recalca es la necesidad de que gran parte del esfuerzo inmediato se concentre en el estudio de los factores determinantes y de las leyes sociológicas que rigen el comportamiento de los militares en nuestro país. Éste debe ser un estudio serio, riguroso, sin prejuicios, sustentado en sólidas bases científicas y que utilice con precisión todas las reglas del método sociológico.

El campo de conocimientos de la Sociología Militar ha recibido valiosos aportes en diversos países latinoamericanos, especialmente a cargo de militares que una vez concluida su carrera, llevaron a cabo una reflexión sobre los principios y pautas que rigen la conducta de los hombres de uniforme. Muchos de esos trabajos demuestran gran lucidez en el enfoque específico del tema y aprovechan todo el material que ofrece la propia experiencia vivida en los cuarteles. Se trata, sin duda, de contribuciones importantes para el conocimiento de las motivaciones, actitudes, comportamientos, ideas dominantes, formas de vida, relaciones con el resto de la sociedad y otros aspectos referidos a esa capa social. Pero, lo que se necesita es un conocimiento elaborado a partir del accionar concreto de las Fuerzas Armadas bolivianas. Ese conocimiento era de gran utilidad para comprender el papel que desempeñaron en la historia reciente de Boli-

via y el que, para bien o para mal, desempeñarán en el futuro del país.

En fin, hay tantas cosas por hacer, que simplemente para mencionarlas no bastan las páginas de un prólogo, sino que se necesitaría todo un libro. Si bien su iniciación puede estar a cargo de un grupo -aunque sea pequeño- de trabajadores intelectuales, su culminación exigirá, sin embargo, el compromiso de grandes contingentes y quizá de generaciones enteras. Afortunadamente el país ha ingresado a una etapa en que es posible pensar, investigar y expresar los conocimientos en un ambiente que pocas veces se respira en nuestra patria. Tenemos que darnos prisa para recuperar el tiempo perdido y cumplir, simultáneamente, las tareas de hoy.

Como se anota en la Presentación, este trabajo ha sido escrito con el propósito de motivar una discusión sobre el pasado reciente de Bolivia. Empero, ésta parece ser una pretensión que no se ajusta a las exigencias de la dinámica de nuestro país. Con todo, si al menos se logra abrir las puertas a la reflexión, se cubrirá con creces dicho propósito.

Al dedicar este libro a los mineros de Caracoles, el autor quiere testimoniar su profundo respeto y su admiración por la clase trabajadora del subsuelo, cuyo esfuerzo y sacrificio forman la base en que se sostiene la economía boliviana. En los días posteriores al golpe

del 17 de julio de 1980, los mineros de Caracoles, en el último bastión de la resistencia, se constituyeron en el paradigma del valor de la clase obrera boliviana.

Sus mártires son nuestros mártires.

Pablo Ramos Sánchez

La Paz, 19 de julio 1983

ANTECEDENTES DEL GOLPE DE ESTADO DEL 17 DE JULIO DE 1980

Los límites de este análisis son bastante definidos; pues, se orienta a explicar, o a intentar una explicación del Golpe de Estado del 17 de julio de 1980, que puso punto final al proceso de apertura democrática iniciado a partir de enero de 1978, mes en el cual culminó con éxito la huelga de hambre declarada por cuatro mujeres mineras y que se propagó vigorosamente por todos los sectores sociales más representativos.¹

Si bien este Golpe de Estado se inscribe como parte de toda la historia de inestabilidad política que tipificó a Bolivia, es muy útil desentrañar su propio significado, y poner en evidencia sus determinantes mediatos e inmediatos. Al hacerlo, no se desconoce el hecho de que la inestabilidad política boliviana tiene sus raíces estructuralmente vinculadas con el desarrollo del sistema capitalista, cuyas relaciones de producción y distribución comenzaron a establecerse en el país, de manera desigual, hace más de un siglo. Más aún, se tiene en cuenta como punto de partida, para cualquier explicación finalista de los golpes de estado, la situación de país capitalista dependiente, con profundos desequili-

¹ La huelga de hambre iniciada por las cuatro mujeres mineras constituye una singular página de la historia de las luchas sociales del pueblo boliviano. Pero es de anotar que ese acto fue una expresión de todo un movimiento popular en ascenso; por eso encontró eco en todos los sectores. Fue la chispa; pero ya la pradera estaba lista para el incendio.

brios internos y sometidos, en lo esencial, a los vaivenes de la economía mundial.

Las raíces últimas están, pues, en el tipo de desarrollo capitalista y en las peculiaridades específicas que fue asumiendo su devenir histórico. Se ubican en el contexto de características tan salientes como la extrema debilidad del proceso de acumulación de capital, la ausencia de un verdadero Estado Nacional (que aparece no sólo como tarea inconclusa, sino también inviable en el acontecer capitalista dependiente), el parasitismo de la burguesía que es todo menos nacional, y en fin, los desajustes básicos de una sociedad que no llegó a consolidarse a plenitud como formación capitalista.

Sin embargo, para llevar a cabo un análisis en ese nivel de abstracción se requiere un tipo de trabajo distinto del que aquí se pretende. En todo caso, debe ser considerado como el telón de fondo sobre el que se inscribe todo el accionar de la coyuntura y que proporciona los parámetros básicos para la interpretación de estos fenómenos.

I

ANTECEDENTES MEDIATOS EL RÉGIMEN FASCISTA DE BÁNZER

Es cierto que todas las etapas de la historia de un país están emparentadas. Con mayor razón si están muy cercanas en el tiempo. Pero, lo que importa es descubrir

cómo ciertos acontecimientos influyen de manera directa o indirecta sobre otros.

En términos de la realidad interna, los determinantes mediatos se sitúan en la experiencia fascista que vivió el país durante los siete años que duró el régimen del Gral. Bánzer.² Esa experiencia dejó profunda huella, por las características especiales que adoptó el uso del poder en Bolivia y por las consecuencias que aparejó en las distintas dimensiones de la dinámica económica, social y política.

En términos de la realidad internacional, tales determinantes se refieren al proceso de fascistización que diversos países latinoamericanos están viviendo desde mediados de la década de los años 60. Las causas finales del fascismo en América Latina se relacionan con las circunstancias específicas de la acumulación de capital, que a esta altura del acontecer histórico de los países del área exige formas políticas distintas de la democracia representativa y las dictaduras militares tradicionales. El fascismo se impuso para asegurar la supervivencia y la reproducción del sistema capitalista, que enfrentaba peligros de quiebra insalvable.

El experimento fascista del período 1971—1978 tuvo

² En realidad, el análisis de los antecedentes mediatos debería ir más lejos, situándose no sólo en la restauración propiciada por el Gral. Barrientos en 1964, sino en la misma frustración de la revolución democrática de 1952. Pero, por circunstancias específicas que atañen a todo el Cono Sur de América Latina —instauración de regímenes fascistas— adquiere más fuerza el análisis a partir del experimento del Gral. Bánzer.

el propósito de encaminar a Bolivia por un sendero capitalista. Se propuso crear las condiciones para un rápido crecimiento económico motorizado por la iniciativa privada en servicio directo de la cual estuvieron todos los mecanismos del Estado. A costa de la economía estatal y popular se pretendió promover un gigantesco proceso de acumulación de capital que no llegó, sin embargo, a autosustentarse.

Apoyado en distintos factores —tales como la explotación irracional de los recursos naturales (dilapidación de las reservas petroleras, mineras y forestales), la expansión inflacionaria del crédito bancario al sector empresarial privado, el uso desenfrenado del gasto público, la depresión sistemática de los salarios, y, sobre todo, el irracional endeudamiento externo— el régimen fascista pudo mostrar, transitoriamente ciertos éxitos económicos que a pesar de todo, no guardan relación con el enorme costo que sufrió el país.

Es un hecho comprobado por la práctica que el fascismo no pudo consolidarse en Bolivia debido a que es históricamente inviable.³ Esta incapacidad deriva a su vez de las limitaciones del propio capitalismo para adquirir formas autónomas y dinámicas en el contexto peculiar de la realidad boliviana. Basta una rápida mirada retrospectiva para demostrarlo.

3 Una explicación detallada de este tema se encuentra en el libro “Siete Años de Economía Boliviana”, 3ra. edición Ediciones Puerta del Sol - nov. 1982.

En efecto, antes de 1952 el nivel más alto de desarrollo capitalista fue alcanzado con la actividad minera; pero la fracción burguesa conformada sobre esa base se extranjerizó y fue incapaz de generalizar el ámbito de las relaciones capitalistas de producción al conjunto de la sociedad. De esta manera, no se consolidó el mercado interno, permaneciendo el trabajo campesino bajo modalidades de servidumbre. Al mismo tiempo, en las áreas urbanas la mayor fuente de ocupación provenía de actividades artesanales.

La revolución democrática de 1952 no llegó a completar las tareas nacionales, cayendo rápidamente bajo el control del imperialismo. La gigantesca movilización producida en 1952 fue diluyéndose y tal proceso se esterilizó finalmente sin desarrollar a plenitud sus potencialidades. Entre las grandes tareas inconclusas o frustradas se incluye la integración nacional, la diversificación económica, la industrialización, la construcción del Estado nacional, la consolidación del mercado interno y la creación y consolidación de centros autónomos de decisión. La superación de las trabas de tipo feudal no fue complementada con la creación de las bases suficientes para un desarrollo capitalista relativamente autónomo o, por lo menos, con mayor grado de autonomía.

La llamada Revolución Restauradora⁴ de noviembre

⁴ El golpe de Estado del 4 de noviembre de 1964, jefaturizado por el Gral. René Barrientos Ortuño, fue denominado por sus gestores “Revolución Restituidora”, pero al poco tiempo se olvidaron de ese título, ya que los

de 1964 no restauró las condiciones previas a 1952 ni afianzó las bases para un mayor avance capitalista. No pudo volver atrás en materia de reforma agraria, ni en cuanto a la nacionalización de las minas o a la presencia del Estado en la economía, a través de la empresa pública. En términos del desarrollo capitalista, este acontecimiento sólo significó un mayor empantanamiento, puesto que, por una parte, debilitó las fuerzas que con mucho costo fueron acumulándose desde 1952 y, por otra, fue incapaz de crear nuevas bases de sustentación. Las medidas adoptadas en favor de la burguesía, tales como Ley de Inversiones, protección arancelaria, rebaja de regalías mineras, depresión salarial y persecución de los sindicatos obreros, no tuvieron éxito para elevar la inversión privada, pero debilitaron más la economía fiscal y popular.

El intento más serio fue el iniciado en agosto de 1971, bajo moldes fascistas. Este régimen no fue una dictadura militar al estilo tradicional de las dictaduras bolivianas; formó parte de un esquema continental de fascistización y puso todos los engranajes del Estado al servicio del capital. Fue un régimen ferozmente represivo de la clase obrera y se sustentó en el terror sistemático, aplicado como política de gobierno. Usó gran-

exoligarcas y exterratenientes, llegaron a intentarlo como una promesa para su restauración en el poder y la restitución de las tierras. Para desvirtuar en opinión y calmar el ánimo popular. Barrientos indujo a los campesinos a suscribir el "Pacto Militar- Campesino", a cambio de la garantía de irreversibilidad de la Retorna Agraria.

des cantidades de recursos, en magnitudes que ningún régimen anterior había dispuesto en toda la historia de Bolivia, pero en su mayor parte se dilapidaron sin obtener una respuesta favorable de la iniciativa privada. Al final, sólo quedaron los pasivos; es decir, las deudas junto con los socavones cada vez más vacíos, tanto en los yacimientos mineros como en los petroleros.

El esfuerzo resultó evidentemente vano, pues no aparecieron las fuerzas sociales y económicas que pudieran llevar adelante el desarrollo capitalista. El sacrificio de la economía fiscal y de la economía popular, se convirtió en un aporte unilateral de carácter forzoso, pero no dio origen al crecimiento capitalista autosostenido. Así, la acumulación originaria de capital en Bolivia es un proceso profundamente deformado, ya que la burguesía se resiste a transformar en capital productivo las grandes masas de recursos que llegan a sus manos, por medios políticos principalmente, y que las distrae y dilapida en consumo suntuario, fugaz al exterior y otros destinos alejados de la esfera productiva.

La conclusión de que el camino capitalista independiente está vedado para Bolivia, no es una deducción sin fundamento. No es éste el lugar para detallar las argumentaciones al respecto, pero existen suficientes trabajos teóricos para sustentarla. Las fuerzas que pueden generar una dinámica capitalista autónoma no existen, ni pueden existir, en Bolivia. Ni siquiera es posible pensar

en lo que podría llamarse una industrialización subordinada que alcance un aceptable grado de intensidad.

Ahí están las causas del fracaso del fascismo. No son simplemente factores coyunturales los que determinaron su frustración histórica. Se trata de una incapacidad estructural.

Sin embargo, el fascismo resultó indudablemente atractivo y de gran beneficio para los grupos dominantes en Bolivia. El uso irrestricto del poder estatal, sin limitación legal o moral de ningún tipo, ofrece innegables posibilidades de enriquecimiento. Es una forma política que permite la explotación sin freno de la fuerza de trabajo y facilita la transferencia del valor creado en la esfera de la empresa pública, hacia manos privadas.

Por lo demás, un régimen de este tipo utiliza los mecanismos de la corrupción como uno de los pilares centrales de la estructura de poder y como una de las condiciones para su permanencia y reproducción.

En 1978, el fascismo sufrió una derrota política que lo obligó a retirarse del gobierno, pero no fue aplastado. Mantenía intactos sus aparatos de violencia y conservaba todos sus cuadros políticos, militares y paramilitares.

Las fuerzas fascistas estaban fuera del gobierno, pero no estaban al margen del poder. Más aún, conservaban un control sobre puntos esenciales de las Fuerzas Ar-

madras, a partir de los cuales iniciaron la recaptura del poder total.

La recaptura siguió un largo proceso, que se inició con el gigantesco fraude electoral de 1978, pasó por la desestabilización del régimen democrático instalado en 1979, continuó por golpes de mano para el ascenso de oficiales fascistas hacia posiciones de mando dentro de las Fuerzas Armadas (aún a riesgo de la unidad de su institución), siguió por el terrorismo bestial desencadenado en las ciudades bolivianas y culminó con el sangriento Golpe de Estado del 17 de julio de 1980 y la instauración de una de las dictaduras más siniestras de la historia de Bolivia.

II

ANTECEDENTES INMEDIATOS

a) **La crisis de la democracia**

En un plano mucho más concreto y próximo se ubican las causas en los acontecimientos de años recientes, en que Bolivia vivió un fugaz período democrático que no logró encontrar una salida duradera. A la caída del régimen fascista se inició una fase de transición hacia la democracia, constituida por el gobierno del General David Padilla, durante el cual, es de destacar, no existieron presos políticos, no se reprimió al movimiento popular y, en fin, no se conculcaron los derechos ciuda-

danos. Fue un período fugaz que permitió al país vivir un clima de libertades que resultaba algo así como un nuevo amanecer después de la larga noche del fascismo.

Pero debe recalcar que los fascistas no dejaron el poder voluntariamente. Ese hecho fue producto de la resistencia popular que se acentuó a fines de 1977 y comienzos de 1978, junto con el papel cada vez más destacado que asumían sectores militares crecientes que se mostraban disconformes con la función represiva del pueblo que se estaba haciendo desempeñar a la institución armada, colocada por Banzer y sus acólitos, como instrumento al servicio de minorías extranjerizadas que utilizaban el poder en beneficio personal y de grupo. Contribuyó, además, la nueva coyuntura internacional representada por el ascenso de los demócratas al gobierno de Estados Unidos, quienes levantaron la bandera de la defensa de los derechos humanos.

También influyó el rol de la socialdemocracia europea que asumió posiciones de primera línea frente a las dictaduras fascistas y fascizantes de América Latina.

Sin embargo, la retirada de los fascistas tenía un carácter parcial. No fue una derrota que descoyuntara totalmente sus fuerzas la que los llevó a este retiro parcial. Lo cierto es que ya no podían sostenerse en el poder debido al desgaste, a las contradicciones internas, a la desorganización de sus fuerzas y, sobre todo, a que

carecían ya de respuestas a la resistencia popular y a la crisis económica resultante de la aplicación de sus esquemas de política económica. Los fascistas se replegaron para reaglutinar sus fuerzas e iniciar un nuevo asalto al poder.

Como prueba evidente de todo esto debe mencionarse que ninguno de los fascistas salió al exilio, ni fue sometido a detención. Incluso los más crueles torturadores del régimen circulaban libremente (y con garantías) por las calles de las distintas ciudades de Bolivia, asumiendo actitudes despreciativas y amenazadoras con respecto al pueblo boliviano. Los defraudadores al Fisco y malversadores de fondos no fueron procesados, ni menos devolvieron los recursos públicos. Incluso el Juicio de Responsabilidades⁵ iniciado en el Parlamento contra el régimen de Bánzer, por delitos contra la economía fiscal, no llegó a concluir, y por poco la prensa derechista no hace aparecer al defraudador como si fuera acreedor del Estado.

Bajo la cobertura de la prensa derechista, los fascistas lograron conservar gran parte del monopolio que tenían en el acceso a los medios de difusión, en situación parecida a la que durante su paso por el gobierno lograron

⁵ El Juicio de Responsabilidades constituyó una de las actividades más importantes del Parlamento Boliviano en su gestión legislativa de 1979. Acaparó gran parte del tiempo y las energías de los parlamentarios, pero fue diluyéndose y desviándose, desde las acusaciones centrales hacia temas intrascendentes, lo que facilitó a los abogados del Gral. Bánzer aferrarse a estos últimos y desviar la atención de los temas centrales.

por medio de la censura de prensa. Por lo demás, la censura de prensa en Bolivia afecta exclusivamente a la prensa independiente⁶ y a la de los sectores populares, pues la prensa derechista goza de la más absoluta libertad. De esta forma los fascistas continuaron, durante la transición y el período democrático, siendo los únicos con acceso irrestricto, a los medios de comunicación de masas.

Esto les permitió estar siempre a la ofensiva, deformando los hechos, socavando la democracia y encubriendo sus acciones agresivas.

De otro lado, el proceso democrático se desarrolló desde un principio dentro de un conjunto de contradicciones, de difícil solución y que entorpecían su desenvolvimiento. Para comenzar, tuvo que enfrentarse a una crisis económica de magnitudes desconocidas en la historia del país, la que fue consecuencia directa de la política económica del fascismo. Las dimensiones de la crisis eran suficientes por sí solas para esterilizar cualquier obra de gobierno.

El verdadero significado de la crisis económica se con-

⁶ Es difícil hablar de prensa independiente en Bolivia. Así. "EL DIARIO" controlado por intereses que forman lo esencial del fascismo; "ÚLTIMA HORA" pertenece a la minería mediana; "PRESENCIA" es propiedad de la Iglesia Católica y es el único periódico que permite una cobertura más amplia de la información en Bolivia. Los periódicos verdaderamente independientes son de muy corta vida. Por ejemplo, el semanario "AQUI" fue clausurado por la dictadura fascista en julio de 1980.

centra en el hecho de que afecta esencialmente la estructura productiva o sea que se trata de una crisis de producción que repercute sobre todas las demás esferas. En lo inmediato se traduce en una distribución del ingreso cada vez más desigual y da origen a tensiones sociales que sólo pueden ser acalladas por medio de la violencia. Asimismo, altera el proceso de la circulación, manifestándose en presiones inflacionarias cada vez más agudas y en deformaciones en la estructura de los precios relativos.

Después de los siete años de dictadura fascista en que las ansias populares fueron contenidas por medio de la represión, explosionaron de pronto en busca de realizaciones. Los desequilibrios sociales y regionales se habían profundizado durante aquel régimen y, al abrirse el proceso democrático, aparecieron a la luz en forma de necesidades sociales insatisfechas que exigían una rápida y eficaz atención estatal.

Es de hacer notar también que los grupos fascistas desplazados del gobierno usaban todos sus mecanismos, especialmente la prensa oral y escrita, y su influencia sobre determinados sectores de las capas medias, grupos regionales y fracciones burguesas, para agudizar las tensiones sociales y regionales. La prensa derechista magnificaba extraordinariamente los problemas dando la impresión de que el país vivía una crisis desembozada, para la que no existía ninguna respuesta de parte

del gobierno. De esta forma, los verdaderos culpables del caos económico pretendían hacer aparecer a los gobernantes actuales como los responsables de la misma. Trataban de hacer resaltar el contraste entre un pasado de “orden, paz y trabajo”,⁷ bajo el fascismo y el presente de “caos, ineficiencia e intranquilidad” que se vivía bajo la democracia.

Por lo demás, los gobiernos democráticos (de Guevara y Gueiler) no formularon planteamientos coherentes para enfrentar la crisis. Es evidente que tales gobiernos llegaron a constituirse sin que sus propios protagonistas tuvieran conciencia de esa posibilidad; por ello no podían tener respuestas previamente elaboradas. Eran gobiernos improvisados que no llegaron a contar con bases mínimas en lo político y social, que les facilitara una capacidad de maniobra frente a la vertiginosa sucesión de acontecimientos.

Fueron gobiernos surgidos no de la voluntad popular directa, sino del compromiso parlamentario frente a la imposibilidad de designar un gobierno constitucional, respetando la mayoría relativa lograda por la UDP en las elecciones de 1979. Por su origen, debieron haberse constituido como gobiernos del Parlamento y dirigir el país a partir de un acuerdo de las principales fuerzas

⁷ El lema de “orden, paz y trabajo” fue utilizado por el Gral. Bánzer para justificar durante siete años la violenta represión que desató contra la clase obrera y los sectores populares. Este lema forma parte del lenguaje común de las dictaduras fascistas de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

democráticas del Parlamento, en procura de dar solidez y consistencia al proceso democrático. Pero, como esto no ocurrió, tuvieron que desenvolverse en condiciones de fragilidad extraordinaria.

Así, el gobierno del Dr. Guevara desperdició sus escasos ochenta días en la estéril polémica referente a si para enfrentar la crisis se requería o no más de un año de gobierno. Entre tanto la situación seguía agravándose sin que se diseñaran las medidas mínimas para contener la crisis. El Ministerio de Finanzas perdió el control de la situación, al dictar aislada y unilateralmente la imposición del depósito previo del 500 por ciento sobre determinadas mercaderías importadas; de este debate salió tan maltrecho el Ministro de Finanzas que resultó inhabilitado para formular cualquier programa anticrisis.⁸

El gobierno de Lidia Gueiler fue mucho más frágil, especialmente debido a que no supo manejar adecuadamente el problema de la indisciplina militar, usando las legítimas facultades constitucionales. Surgido des-

⁸ El establecimiento, por Decreto Supremo, del depósito previo sobre las importaciones, se hizo no sólo de manera aislada, sino también incompleta, pues no detalló la lista de mercancías sujetas a esta medida. La burguesía comercial importadora, la prensa derechista y los grupos antidemocráticos aprovecharon la oportunidad para tomar la iniciativa y lanzarse a la ofensiva. El Ejecutivo y el Parlamento cayeron en la trampa y desperdiciaron valiosos días en discutir una medida de tan poca importancia para enfrentar la crisis. Al final, el Ministro de Finanzas perdió autoridad en materia de decisiones de política económica.

pués del golpe de noviembre, tuvo que enfrentarse de inmediato a los desarreglos económicos y financieros emergentes de esos acontecimientos. Empero, el carácter parcial y, en gran medida, impopular de su política económica, minó sus endeble bases de sustentación, hasta el punto de que tuvo que gobernar por inercia, a la espera de su reemplazo. La falta de autoridad y los tremendos desaciertos del gobierno de la Sra. Gueiler tuvieron influencia directa en los sangrientos hechos que enlutaron al país a partir del 17 de julio de 1980.

b) El golpe de noviembre de 1979

El golpe de Estado del 1ro. de noviembre de 1979, liderado por el Cnel. Alberto Natusch Busch, constituye uno de los antecedentes de mayor influencia en el nuevo Golpe de julio de 1980. En primer lugar significó la ruptura del proceso de transición logrado a partir de los compromisos parlamentarios de agosto de 1979. La caída de Guevara rompía un esquema difícilmente hilvanado, sin que su reemplazo por la Sra. Gueiler lograr restaurarlo. El Golpe de Natusch desencadenó una profunda descomposición política que afectó a las principales fuerzas que tenían opciones reales para ejercer el poder.

Las componendas y compromisos que siguieron a las dubitaciones, actitudes contradictorias y desmentidos resultantes de la crisis política, debilitaron al Parlamen-

to, restándole autoridad moral y capacidad de manobra. En lugar de fortalecerse, el Poder Legislativo se debilitó, perdió prestigio ante la opinión pública y esterilizó gran parte de sus acciones en debates de escaso o ningún interés nacional. El desprestigio del Parlamento constituía un objetivo de gran importancia para las fuerzas fascistas, pues representaba el debilitamiento progresivo de la democracia en Bolivia. La ineficacia del mismo sería presentada por la prensa derechista no sólo como una expresión de la “mediocridad de los políticos” sino como una prueba de los “efectos nocivos y los enormes costos” de la democracia. La derecha realizó un esfuerzo sistemático para presentar a los políticos⁹ como responsables del estancamiento en el proceso institucional del país, y hasta como culpables de la crisis económica y social.

El golpe de noviembre aceleró la crisis económica llevándola a proporciones incontenibles. Los puntos más vulnerables se situaron en el campo monetario-financiero, especialmente en lo que se refiere a las reservas monetarias internacionales y el tipo de cambio. El Gobierno posterior tuvo que someterse a los esquemas estabilizadores del Fondo Monetario Internacional

⁹ Todos los regímenes fascistas del Cono Sur intentan justificar la presencia militar en el gobierno, señalando que los políticos son la causa de los desastres nacionales y que las FF.AA. deben tomar a su cargo la “reconstrucción nacional”, ocurre que la derecha ha perdido el campo tradicional de la política y tiene que refugiarse en el “espacio de emergencias representado por la institución armada. De ahí los intentos comunes por desprestigiar a los políticos y a la política.

y aprobó medidas de claro contenido antipopular. La devaluación monetaria y los reajustes de precios (no compensados con los bonos salariales) repercutieron negativamente sobre la economía popular. Como respuesta, la clase obrera y los campesinos llevaron a cabo movimientos sociales de grandes dimensiones que, sin embargo, resultaron estériles, ya que el gobierno no rectificó las medidas y tampoco las complementó con otras que atenuaran el contenido antipopular o distribuyeran más equitativamente el peso de las mismas, haciendo contribuir por lo menos en parte a los grupos económicamente poderosos (que por otro lado eran los verdaderos responsables de la crisis). Las organizaciones obreras, puestas a la defensiva, perdieron fuerza a estas acciones, a la par que los fascistas aceleraban y coordinaban la ofensiva.

En el interior de las Fuerzas Armadas, el golpe de noviembre significó el debilitamiento de los sectores democráticos, que perdieron posiciones frente a los grupos facistoides o declaradamente fascistas. No es ya un secreto que antes de noviembre de 1980 existían algunas corrientes francamente progresistas¹⁰ y otras

10 La existencia de sectores progresistas en las FF.AA. no es un fenómeno reciente. Basta recordar la corriente que sustentó el socialismo militar después de la Guerra del Chaco y que se manifestó a través de los gobiernos da David Toro y Germán Busch, que marcaron hitos en la historia de Bolivia. Más tarde RADEPA agrupó a los militares que actuaron junto con el mártir Gualberto Villarroel. En las décadas recientes se expresaron en los gobiernos de Alfredo Ovando y Juan José Torres. No es pues, extraño que hoy existan militares progresistas en las FF.AA., que enarbolan banderas que

institucionalistas o democratizadoras en el seno de las Fuerzas Armadas.

Incluso el propio Cnel. Natusch se inscribía entre aquellas corrientes que planteaban medidas de reforma que hubiesen significado pasos adelante en el devenir histórico boliviano. Era frecuente escuchar a militares que sostenían como una necesidad la cogestión obrera en COMIBOL y otras empresas públicas, la estatización de ciertas empresas de la Minería Mediana, la estatización de la banca, el monopolio del comercio exterior, la adopción de medidas defensivas de los recursos naturales y humanos, y de protección para las actividades internas. No se trataba solamente de los sectores militares que gobernaron con el Gral. David Padilla, sino de otros grupos que alcanzaron un alto nivel de conciencia nacional y democrática.

Pero el golpe de noviembre debilitó a todos esos sectores y con mayor razón a los militares que honestamente acompañaron al Coronel Natusch Busch. A la par, consolidó las posiciones de los militares mayormente comprometidos con el fascismo y favoreció la penetración del Banzerismo (léase fascismo) en sectores militares que antes se le oponían. Muchos altos jefes y oficiales fueron desplazados del mando de tropa y marginados de los puestos de decisión. De esta forma, los militares que hubieran podido representar una alternativa de res-

puesta a cualquier intento fascista fueron arrinconados en el seno de su institución y en lo sucesivo no fueron tomados en cuenta o fueron sometidos a estricta vigilancia. Así puede decirse que en el interior de las Fuerzas Armadas tuvieron lugar las repercusiones más trascendentes en términos de los futuros acontecimientos políticos de Bolivia.

La falta de firmeza del Gobierno de Lidia Gueiler favoreció el proceso de consolidación de los grupos fascistas. Se tiene conocimiento que altos jefes que asumieron posiciones institucionalistas fueron agredidos físicamente por oficiales subalternos, hechos que es severamente sancionado por el Código Penal Militar, pero que no se aplicó en estos casos. Los sucesivos golpes de mano del Gral. García Meza Tejada (primo de la Sra. Gueiler Tejada) contra dos comandantes de Ejército, los Generales Villarroel y Rocha Patiño, sucesivamente, fueron claros actos de indisciplina que, al no ser sancionados, abrieron la puerta para los acontecimientos posteriores.

Así, los responsables políticos del golpe de noviembre tienen una enorme deuda con la historia de Bolivia¹¹

11 Quienes aparecieron como principales responsables políticos del Golpe, insistieron en varias oportunidades en que este hecho no se habría producido si no contaban con la autorización expresa del Dr. Víctor Paz Estenssoro. El teórico más importante del grupo, Guillermo Bedregal, explicó en un artículo publicado en "EL DIARIO", cuáles fueron las razones que adujo el Dr. Paz para autorizar la intervención de militantes del MNR - H en el desencadenamiento del golpe contra Wálter Guevara, fundador del MNR. A su vez,

pues tales hechos se emparentaron, en línea directa, con los trágicos sucesos del mes de julio de 1980.

c) El triunfo electoral de la UDP

El reiterado triunfo electoral de la Unidad Democrática y Popular forma parte también de los antecedentes del golpe. En general, puede decirse que el proceso electoral de 1980 tuvo un significado profundamente adverso para los sectores fascistas, y para la derecha en su conjunto.¹² Pues, en estas elecciones el pueblo boliviano ratificó su decisión de marchar no sólo por senderos democráticos, sino dentro de un esquema de transformaciones que sentara bases firmes para crear condiciones de vida mejores para las grandes mayorías. Los resultados electorales mostraron sin lugar a dudas, por tercera vez consecutiva, la voluntad de cambios de las mayorías nacionales, y pusieron en evidencia su repudio total al fascismo y a quienes lo acompañaron.¹³

los militares calificaron de “diabólica” la actitud del Dr. Paz Estenssoro.

12 Los resultados de las elecciones de 1980 aparecen en su exacta dimensión cuando se tiene en cuenta de manera conjunta, el inobjetable triunfo de la UDP y el extraordinario ascenso de la votación del PS-1, pese al papel desorientador y dispersionista que desempañaron ciertas candidaturas menores y el lenguaje izquierdizante empleado por los candidatos del MNR-H, especialmente por Ñuflo Chávez Ortiz, intelectual cuya formación marxista es ampliamente reconocida en diversas universidades del exterior.

13 Una de las causas fundamentales de la derrota electoral del Dr. Paz Estenssoro derivó de su participación en el régimen del Gral. Banzer, desde agosto de 1971 hasta que éste lo expulsó del gobierno y del país en 1974. La derrota es el precio que el Dr. Paz pagó por este error histórico, y es una lección de que el pueblo boliviano no perdona a quienes lo traicionan.

El amplio triunfo de la UDP constituía la mayor amenaza para la restauración del fascismo. Era lógico esperar que una vez constituido el gobierno constitucional presidido por el Dr. Siles Zuazo, serían reorganizados los altos mandos militares de acuerdo con las facultades constitucionales del Capitán General de las Fuerzas Armadas de la Nación. Por otra parte, un gobierno constitucional hubiera significado el retorno a las normas disciplinarias que son esenciales en todo tipo de organización armada que respeta la ley y el orden interno. De esa forma, todo acto de desacato y prepotencia por parte de miembros de las FF.AA. hubiera encontrado su respectiva sanción, dentro del marco de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. El significado del establecimiento de un gobierno constitucional se refería, entonces, a una interrupción obligada de los proyectos golpistas.

Pero con seguridad no es ésta la principal razón del golpe, ni el principal efecto del triunfo electoral de la UDP. El pueblo boliviano votó por un programa concreto de reivindicaciones sociales y explicitó una inclinación hacia posiciones políticas cada vez más claras. Rechazó los programas de la derecha representados en primer lugar, por Bánzer y luego por Paz Estenssoro. La inesperada alta votación que alcanzó el PS-1, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, constituyó un toque de atención que sacudió profundamente a toda la derecha boliviana. La burguesía se veía amenazada por el programa

de reivindicaciones que para el corto plazo planteaba la UDP; ¹⁴ es decir, tendría que verse obligada al reajuste de salarios, a cumplir las leyes sociales y respetar los derechos sindicales. Pero también se sintió a largo plazo amenazada por los planteamientos socialistas hacia los cuales las mayorías populares mostraron gran receptividad. Estos hechos aceleraron los planes para frenar ahora, antes de que sea tarde, el avance del pueblo boliviano.

En todo caso, el ascenso de la UDP al gobierno hubiese significado una profunda modificación del cuadro político del país, favoreciendo el desarrollo de la conciencia nacional y revolucionaria de las grandes masas y abriendo ancho cauce para el fortalecimiento organizativo de los sindicatos obreros, campesinos, profesionales y, especialmente, de los partidos de izquierda. El fortalecimiento del movimiento popular hubiera repercutido vigorosamente en el seno de las FF.AA., consolidando a los sectores progresistas y debilitando las corrientes fascistas y reaccionarias. En resumen, el poder burgués se hubiera visto amenazado.

14 En realidad la Unidad Democrática y Popular (UDP) no llegó a estructurar un programa económico en el que coincidieran todas las fuerzas participantes. Sin embargo, los partidos y organizaciones contaban con sus proposiciones específicas sobre el particular. Además los discursos de los candidatos enfatizaban en reivindicaciones, a partir de los cuales puede inferirse el programa de realizaciones que la UDP llevaría a cabo desde el gobierno.

d) La correlación de fuerzas internas

Los resultados de las elecciones demostraron cuáles eran las tendencias principales por las que se orientaban las mayorías del país, especialmente debido a que se trataba de un veredicto reiterado en tres oportunidades (1978, 1979 y 1980); de modo que era visible un viraje político hacia posiciones más avanzadas. La significación mayúscula de estos tres eventos electorales consiste en que la izquierda revolucionaria adquirió una proyección de masas; es decir, trascendió los reducidos núcleos intelectuales o activistas para alcanzar proporciones masivas. Se quebró el tabú anticomunista y dejaron de tener eco los esloganes propagandísticos que la derecha usó durante largo tiempo.

La inferencia inmediata de todo esto se refiere a que las masas populares en Bolivia experimentaron grandes avances en el plano de la conciencia, y a que los viejos mecanismos de manipulación que usaba la burguesía resultaron obsoletos. La derrota electoral de la derecha adquiere su verdadera dimensión cuando se tiene en cuenta que significó el fin de los dirigentes políticos de mayor proyección de los últimos treinta años. El ocaso político de Paz Estenssoro representó para la burguesía una de las mayores pérdidas, pues aquél constituía una de sus reservas más importantes y ofrecía, a su favor, el programa más coherente para la política económica gubernamental, dentro de un proceso democrático.

La burguesía estaba, pues, en la necesidad de rebasar el marco de la democracia, ya que una forma de gobierno de ese tipo no aparecía como la más adecuada a sus intereses.¹⁵ De esta forma se puso a la ofensiva y utilizó todos los mecanismos a su alcance para crear las condiciones capaces de frenar el proceso democrático. Aunque también es preciso anotar que algunos sectores burgueses, reducidos por cierto, se empeñaron por contemporizar con un eventual gobierno de la UDP e iniciaron los contactos en el nivel político correspondiente; pero, lo sustantivo de la burguesía se encaminó aceleradamente hacia la quiebra institucional.

Para su ofensiva, la burguesía se apoyó principalmente en los sectores militares fascistas y en los bastiones políticos del Banzerismo. Contaba, desde muchos años antes con el control sobre grupos militares con mando de tropa, lo que le permitía puntos de apoyo para llevar a cabo sus propósitos políticos. Utilizó, asimismo todo el peso de la prensa derechista, la que llegó a niveles de agresividad característicos de situaciones de aguda tensión social. Los periódicos “HOY” y “EL DIARIO”, de La Paz, y otros del interior, utilizaban lenguajes de abierto carácter subversivo y en determinado sentido, terrorista.

15 Sobre la extemporaneidad de la democracia burguesa en Bolivia puede encontrarse un planteamiento más detallado en “La democracia boliviana sus defensores y sus enemigos” (Edit. Juventud, La Paz-Bolivia, nov. 1979). En esta etapa, el principal enemigo de la democracia, en cualquiera de sus formas, es la burguesía; y su principal defensor es la clase obrera, pero ésta no tiene sus intereses vitales ligados a ella, sino que su propósito final es la superación de todo el orden burgués y todas sus formas de estado.

Dicha prensa desempeñó una función importantísima en las tareas de reclutamiento y nuclearización indispensable dentro de la preparación del Golpe de Estado.

Pero el terrorismo no fue sólo verbal o insinuativo. Llegó a prácticas de inaudita crueldad y ensañamiento, cuyo paradigma está constituido por la muerte del sacerdote y periodista Luis Espinal, bajo tortura. Así, pues, el fascismo estaba en ofensiva abierta en las calles y tomando posiciones en los cuarteles, favorecido por audaces golpes de mano (en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía) sin que el poder constituido encontrara forma de respuesta adecuada para frenarlo.

El gobierno de la Sra. Gueiler no sólo estaba incapacitado para frenar la ofensiva fascista; sino que además carecía de planteamientos con respecto a la situación económica, social y política. Su práctica consistió en postergar “para después de agosto” el tratamiento de los problemas principales. Gobernaba, como ya se dijo, por inercia.

Entretanto, la clase obrera, los campesinos y demás sectores populares estaban en la defensiva. Las movilizaciones de noviembre y diciembre de 1979 habían enriquecido sus experiencias, pero también enseñaron al enemigo los puntos fuertes y los puntos débiles del movimiento popular. Estos sectores sólo podían recurrir a los medios democráticos y a los sistemas tradicionales

de defensa, consistentes en huelgas, manifestaciones de protesta, paros de advertencia, bloqueos de caminos y otras formas de lucha. En el plano organizativo el mayor avance estuvo constituido con la formación del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, que representó el intento nacional más vigoroso para contener a los fascistas.

Durante el período democrático se consolidaron los nexos entre la clase obrera, los campesinos y los sectores progresistas de las capas medias. Asimismo, se elevó el nivel de conciencia de clase de sectores más amplios de la clase obrera, lo que se tradujo en el fortalecimiento organizativo del movimiento obrero. Entretanto, la burguesía se mostraba cada vez más débil para la lucha democrática, atomizada en fracciones raquílicas y cediendo permanentemente terreno frente al avance político del movimiento popular.

Pero, la principal desventaja se encontraba, como siempre, en el plano militar. El movimiento popular carecía de apoyo sólido en sectores militares con mando de tropa, los que en su gran mayoría estaban ya bajo el control de los complotados. La balanza del poder de las armas estaba abrumadoramente a favor de los golpistas. En estas circunstancias poco podían pesar las razones, los principios morales, los argumentos lógicos, la opinión internacional; pues ya el tiempo de las palabras había pasado y sólo quedaba el tiempo de los hechos.

Al respecto, es importante anotar que poco sirvieron los esfuerzos del Embajador Norteamericano para postergar el golpe. En otros tiempos, sin duda que ningún golpe se hubiera realizado sin el “visto bueno” del Embajador de Estados Unidos y sin el “id con Dios” de la alta jerarquía eclesiástica.¹⁶ Pero, ahora, las circunstancias específicas imponían a los golpistas recorrer un camino aún en contra de la voluntad imperial y pese a la oposición de la Iglesia Católica.¹⁷

Los golpistas parecían estar vitalmente empeñados en un “ahora o nunca”.

Las características específicas del golpe del 17 de julio llevan a plantear muchos cuestionamientos cuyas respuestas trascienden el plano de las grandes interpretaciones históricas, para penetrar en los detalles, en ciertas

¹⁶ Siguiendo los lineamientos del Departamento de Estado, el Embajador Marvin Weisman, de Estados Unidos, sostuvo reiteradas reuniones con jefes militares para convencerlos sobre la necesidad de postergar el golpe de Estado. Por su parte, la Conferencia Episcopal hizo públicas, en varias oportunidades, sus actitudes de rechazo al Golpe de Estado. Esto no niega que otros organismos de poder en los Estados Unidos, y sectores internos de la Iglesia, estuvieron apoyando a los golpistas. Tales actitudes contradictorias fueron visibles antes y después del Golpe.

¹⁷ La oposición de la Iglesia desencadenó la ira de los golpistas. Por ejemplo, en relación con las pastorales emitidas por Monseñor Jorge Manrique, Arzobispo de La Paz, el Cnl. Arce Gómez, Ministro del Interior, declaró a la prensa: “No me llama la atención porque es un connotado agitador. No se tomó ninguna acción hasta ahora considerando su edad, pero todo tiene su límite”. (EL DIARIO, edición 20.048 de 16 de agosto de 1980). En esa misma edición, en la primera página se registran las declaraciones del Gral. García Meza, quien con respecto a Monseñor Manrique, dijo: “este cura también debe tener concomitancias con el comunismo”.

sinuosidades de la conducta humana, que el analista no puede dejar de tener en cuenta. ¿Cómo puede explicarse el apresuramiento y la ansiedad que pusieron en evidencia los golpistas? ¿Qué otros factores específicos influyeron en este golpe? ¿Qué tipo de ambiciones personales y de grupo informaban a sus principales actores?

e) **Factores personal y de grupo**

No se puede ignorar que en estos acontecimientos influyeron, además de los grandes condicionantes históricos, ciertos factores personales y de grupo.

Después de los hechos ocurridos a partir de noviembre, especialmente los hechos de sangre y teniendo en cuenta las declaraciones públicas, cargadas de amenazas, de los principales jefes militares que formaban el Alto Mando, era inevitable su desplazamiento por otros hombres uniformados que representarían una garantía de respeto a la soberanía popular. Esto tenía que ocurrir necesariamente poco después de la toma de posesión del nuevo Presidente de Bolivia, el 6 de agosto de 1980, debido a las previsiones establecidas en la Constitución Política del Estado. Esto significaba su paso al retiro de acuerdo con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y con esto, el fin de las ambiciones personales y del usufructo del poder, para muchos generales.

Concretamente, el Gral. García Meza Tejada estaba consciente de este hecho, pues su ascenso a la Coman-

dancia del Ejército se hizo por procedimientos irregulares. Ante esta eventualidad, tenían que unificarse en la acción todos aquellos para quienes era previsible su paso al retiro. Por eso el golpe tenía que realizarse antes de la toma de posesión del nuevo Jefe de Estado.

Por lo demás, un gobierno constitucional implica que los militares deben replegarse a su función castrense específica; o sea que deben alejarse de las arcas administrativas cuyo desempeño corresponde a funcionarios elegidos o designados por los poderes públicos legítimamente establecidos. De manera que, al volver a los cuarteles, los militares tendrían que conformarse con los ingresos correspondientes a su grado, perdiendo los ingresos adicionales derivados del ejercicio de cargos públicos.

Pero hay un elemento aún más trascendente que amerita una consideración especial. Los hechos y denuncias posteriores al golpe de Estado parecen confirmar que además de ese tipo de ambiciones “honestas” influyeron otros factores de tenebrosidad insospechada. Estas denuncias no se iniciaron en el país ni tuvieron inicialmente carácter político: se trata de denuncias policíacas formuladas en el seno de la Drug Enforcement Administration (DEA) y organismos para el Control del Tráfico de Drogas y Estupefacientes, dependientes del Senado de los Estados Unidos. De acuerdo con tales denuncias, la mafia internacional dedicada al tráfico de cocaína tuvo influencia determinante en el desencadenamiento del golpe de Estado.

A esta altura parece innegable la participación de altos personajes del régimen de García Meza en los negocios de la droga.¹⁸ Figuras de primer nivel en ese gobierno aparecen mencionadas como miembros importantes de bandas de traficantes internacionales. Entre ellos, figura el Crnl. Luis Arce Gómez, Ministro del Interior, encargado de la represión, quien fue uno de los artífices del Golpe de Estado y al mismo que se atribuye la organización de los grupos paramilitares que ejecutaron los principales hechos de sangre, como el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros dirigentes; este Crnl. es señalado reiteradamente en informes de cono-

18 Son innumerables los artículos y documentos publicados sobre la intervención directa de los dirigentes del golpe en el narcotráfico. Sin embargo, por la proyección internacional y las dimensiones históricas que adquirieron, dos testimonios aparecen como los más relevantes:

a) El programa “60 Minutos” de la Columbia Broadcasting System (CBS) de la televisión norteamericana, a base de informaciones estrictamente oficiales, detalla los nombres, circunstancias y operaciones en que aparecen complicados los gobernantes bolivianos. Este documento concluye señalando que “las mismas fuentes de Washington indican que el Coup d`Etat (golpe de Estado) de cocaína que llevó al Gral. García Meza al poder el pasado julio, fue financiado por dineros del tráfico de la cocaína y que el mismo presidente García Meza está implicado en el tráfico de la droga”. (EL DIA Internacional edición del domingo 5 de abril de 1981).

b) El documento titulado “Narcotráfico, origen y base de la dictadura boliviana”, preparado por Monique Leclaré y Francois Fallareau, publicado en cuatro ediciones sucesivas de “EXCELSIOR”, con desplegados a toda página. En él se cita con lujo de detalles las redes del tráfico de estupefacientes establecidas en Bolivia y sus vínculos estrechos con los gobernantes fascistas. En este documento histórico se especifica concretamente la participación de los generales Hugo Bánzer y Luis García Meza en el narcotráfico. Además, aparece la lista detallada de los principales dirigentes y enlaces en este criminal negocio.

cimiento público como uno de los principales cabecillas del tráfico internacional de cocaína.

Lo mismo ocurre con el Crnl. Ariel Coca Aguirre, Ministro de Educación, con destacada participación en el Golpe, en su función de Comandante del Colegio Militar de Aviación, en Santa Cruz de la Sierra. Según esos mismos informes, este coronel está vinculado a alguna de las ramas de la mafia internacional.

Si se tratara de denuncias referidas sólo a estos dos hombres, la participación de los narcotraficantes podría aparecer casual o aislada. Pero lo alarmante consiste en que tales informes oficiales incluyen innumerables referencias a militares y civiles que jugaron papeles decisivos en el golpe y desempeñan funciones de primera línea en el régimen. Tampoco se trata de simples referencias oficiosas, sino que son informes avalados por organismos dependientes del Senado Norteamericano. Un senador de ese país, hoy amenazado de muerte por la mafia, mencionó los nombres de los militares bolivianos que desempeñan funciones de gobierno y paralelamente son cabecillas en el tráfico de estupefacientes.¹⁹

La intervención de la mafia en la toma del poder per-

¹⁹ El senador demócrata por Arizona, Dennis de Concini, que pertenece a la subcomisión del Senado norteamericano que decide sobre la ayuda a los países extranjeros, cuenta ahora con protección policial permanente, después de haber sido amenazado de muerte por la mafia internacional, debido a sus informes sobre la complicidad del gobierno de García Meza y el Coronel Arce Gómez en el tráfico de la cocaína.

mite explicar la frialdad y la crueldad con que se cometieron los crímenes antes, durante y después del golpe. Éste es un ingrediente nuevo que hizo su ingreso en la política boliviana junto con el gobierno de García Meza. De esta forma se institucionalizó la participación de los delincuentes internacionales en la conducción de los destinos de Bolivia. Efectivamente, esa participación no podía ser gratuita. El control del principal país productor de la cocaína.

Abre posibilidades ilimitadas para los ilícitos negocios de los narcotraficantes. Ésta puede haber sido una de las principales causas explicativas del apresuramiento y la ansiedad con que actuaron los golpistas.

Éste es, al mismo tiempo, uno de los capítulos más tenebrosos de la historia de Bolivia, que ha estado signada por trágicos acontecimientos, pero nunca había sido sometida a narcotraficantes internacionales convertidos en “hombres de estado” que tienen a su merced la vida y la honra de todos los bolivianos. Su presencia en los niveles máximos de decisión hace muy difícil diferenciar a los militares que participaron por disciplina y aquellos que forman parte de la mafia. El uniforme que llevan es el mismo; y sólo las acciones de unos y otros permitirá diferenciarlos.

LA MECÁNICA DEL GOLPE DE ESTADO

I LOS PREPARATIVOS

Los hilos del golpe comenzaron a tenderse inmediatamente después de la instauración del gobierno de Lidia Gueiler. Sin embargo, es importante recalcar que la evolución política boliviana se caracteriza porque permanentemente están dadas las condiciones para el Golpe de Estado. Los bolivianos estamos acostumbrados a vivir cotidianamente la víspera del golpe. La inestabilidad no es de hoy, es antigua: es el mal incurable de una nación inconclusa y mutilada.

La ausencia de una burguesía nacional vigorosa, y la debilidad estructural de las distintas fracciones burguesas, hace que las Fuerzas Armadas, que forman parte de las capas medias, disfruten de un grado de autonomía bastante elevado y puedan en ese margen, formular sus propios objetivos. En razón de que las fracciones burguesas son incapaces de establecer sólidos bloques para controlar el poder, son los sectores internos de las Fuerzas Armadas, apoyados en tal o cual segmento burgués y con el respaldo de grupos civiles semiprofessionalizados en el manejo político, los que tienen que buscar permanentemente las opciones del poder. (Más

aún, son las Fuerzas Armadas el factor que unifica las diferentes fracciones burguesas).

Por lo general, tales grupos militares carecen de proyectos políticos coherentes que sobrepasen el estrecho horizonte del corto plazo. Por eso, una vez conquistado el poder tienen que esterilizarse en el enfrentamiento —a medias— de los problemas inmediatos, a pesar de que cada quien declara pomposamente que “gobernará” veinte años “ o que “permanecerá en el poder hasta consolidar una nueva Bolivia”.

En el juego coyuntural, las distintas fracciones burguesas tratan de lograr individualmente o a través de endebles coaliciones, sus propias alternativas, y para ello se apoyan en los sectores militares que, como ya se dijo, están permanentemente en procura de la conquista del poder. Una vez que alguna de esas fracciones logra sus propósitos, que se traducen en un golpe de Estado triunfante, se produce un reacomodo general dentro de las demás fracciones burguesas para obtener del nuevo gobierno las ventajas pertinentes (v.g. rebaja de regalías, disminución de aranceles, amnistías tributarias, ampliación de líneas de redescuento, créditos de rehabilitación, adjudicación de contratos para obras públicas, etc.).

Pero tal reacomodo da lugar a un equilibrio inestable, precario, en la estructura del poder. La ausencia de hegemonía entre las fracciones burguesas se entrelaza con

la carencia de sólidos moldes disciplinarios dentro de las Fuerzas Armadas. Con rapidez surgen las contradicciones, las disputas internas se agrandan, se reproduce el choque de intereses y las alianzas se desbaratan. En estas circunstancias, afloran con igual rapidez las condiciones para un nuevo Golpe de Estado. En el interín se fueron tejiendo los hilos de la conspiración, y otras fracciones de la burguesía (o a veces las mismas) ensayan su suerte con nuevas promociones de militares. Durante largo tiempo tales hilos tuvieron que pasar por el tamiz de la Embajada de Estados Unidos, ya sea a través de su Misión Militar o de los representantes de la CIA y del Departamento de Estado. Pero, las contradicciones internas de la sociedad norteamericana, que se patentizaron en la crisis del liderazgo en el plano interno y en la pérdida de posiciones a nivel mundial, hicieron —transitoriamente— menos relevantes su influencia en los acontecimientos políticos de Bolivia. Incluso, el papel de la Embajada Norteamericana llegó a tornarse contradictorio, tal como lo destaca la Embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Jane Kirkpatrick, quien en recientes declaraciones con respecto al golpe de García Meza dijo que “hace todavía cinco años Estados Unidos lo hubiese visto con agrado; hace diez años lo hubiese apoyado, y hace quince lo hubiese conducido; pero el gobierno de Cárter y la prensa norteamericana hicieron gestiones contra los nuevos dirigentes bolivianos”.²⁰

Esto quiere decir que se amplió el grado de autonomía relativa en que se desenvuelven los grupos militares y las fracciones burguesas. Indudablemente que el soporte de fondo para el juego político de esas fracciones y grupos, está constituido por el poder imperial. Los límites de la inestabilidad política, más que por los intereses fundamentales de las clases dominantes internas, están dados por las necesidades de supervivencia y reproducción del sistema capitalista en su conjunto, bajo el rol predominante de los Estados Unidos.

Retornando al tema de los preparativos del golpe del 17 de julio, se debe anotar que se fueron concretando a través de diversos hechos, entre los que se debe destacar los siguientes: 1) Los movimientos internos de las Fuerzas Armadas; es decir, los desplazamientos y nominaciones en los mandos siguió un proceso paulatino en favor de los hombres comprometidos con Arce Gómez y García Meza; 2) Las tareas de nuclearización de las fracciones de la burguesía estuvieron a cargo de la Confederación de Empresarios Privados que progresivamente fue endureciendo sus posiciones hasta llegar a actitudes abiertamente subversivas y 3) El paso fundamental se dio con el entronque de los militares golpistas con el banzerismo, que representó la fuerza política cohesionadora y el eslabón entre las fracciones burguesas y los grupos militares.

Parece ser que el paso decisivo para el golpe se dio entre los meses de febrero y marzo de 1980, cuando se establecieron los contactos y compromisos finales entre los grupos militares de García Meza y los bastiones políticos del banzerismo. Según se sabe, los artífices del ensamblamiento fueron los abogados Mario Rolón Anaya y Franz Ondarza Linares, ambos de absoluta confianza del Gral. Bánzer Suárez. A esta altura ya estaban consolidados los nexos entre Arce Gómez y el banzerismo y se constituían a ritmo acelerado los grupos paramilitares. No fue largo el camino que separaba a estos personajes, ni fue recorrido después del golpe.

Por esto, es completamente falso sostener que el banzerismo no representó una pieza clave del golpe, que hubiese estado, en un principio, al margen del nuevo gobierno. Lo cierto es que tuvo participación decisiva y eso explica que, inmediatamente después de constituido el nuevo régimen, los más conspicuos banzeristas tomaran a su cargo reparticiones tan importantes como el Banco Central, Corporación Boliviana de Fomento, Corporación Minera de Bolivia, las subsecretarías de mayor influencia en la política económica y diversas entidades descentralizadas. El banzerismo estuvo totalmente integrado antes, durante y después del golpe. En realidad, las únicas bases políticas del golpe estuvieron representadas por las que proporcionó el banzerismo y los grupos paramilitares que constituyen los resabios del falangismo.

II EL TERRORISMO

Una vez establecidos los hilos esenciales del golpe, el resto no constituyó más que el accionar operativo. Empero, no se trató de un cuartelazo al estilo boliviano clásico. Siguió procedimientos que vale la pena estudiar en detalle, aunque en este trabajo sólo pueda hacerse referencia a los aspectos generales. No fue un camino fácil, puesto que los principales actores tuvieron que atentar reiteradamente contra la disciplina militar, afectar los procedimientos normales de la vida castrense y resquebrajar el espíritu de cuerpo. Se vieron en la necesidad de poner a prueba la unidad interna de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el ya mencionado ascenso del Gral. García Meza a la Comandancia del Ejército siguió canales irregulares, puesto que se basó en un pronunciamiento de un grupo de oficiales que, a la manera que se estila en los sindicatos o asociaciones de carácter electivo, pidió el relevo del comandante en ejercicio para reemplazarlo por García Meza. Esto significó un enfrentamiento que alteró completamente la institucionalidad castrense.

Lo mismo ocurrió con el Comandante de la Fuerza Aérea que tuvo que ceder su lugar al Gral. Bernal, siguiendo procedimientos alejados del orden que debe caracterizar a toda institución armada. El círculo se ce-

rró cuando el comandante de la Policía Boliviana fue “derrocado” por medio de un golpe audaz de grupos confabulados.

Pero no son estos hechos los que caracterizan sustantivamente al golpe del 17 de julio. El signo está determinado por el terror desencadenado para amedrentar al pueblo, a los cuadros políticos y, sobre todo, a los propios componentes de las Fuerzas Armadas. Las acciones terroristas no dejaban lugar a dudas de los límites hasta donde podían llegar los aspirantes al poder. Demostraron claramente que estaban dispuestos a quitar la vida a todos los que pudieran representar obstáculos para sus intenciones. Pero no se trataba sólo de quitar la vida a los oponentes, sino de hacerlo de la peor manera, con todo el sufrimiento posible, a fin de que nadie se animara a correr ese riesgo. Se trató de un terrorismo frío, calculado, profesional.

Después del triunfo de los golpistas, quedaron al descubierto todas las acciones terroristas que los organismos de Seguridad del Estado, durante el gobierno de Lidia Gueiler, no pudieron desentrañar. Quedó a la vista, para testimonio de la historia, que los grupos paramilitares que ensangrentaron las calles, que asesinaron a Luis Espinal, que sabotearon el avión en que viajaban los candidatos de la U.D.P. (quienes perecieron horriblemente quemados), que lanzaron granadas de guerra contra las manifestaciones pacíficas de la U.D.P. y, en

fin, que diariamente ejecutaban atentados dinamiteros, obedecían a un solo mando. Se descubrió, igualmente, que se trataba de la misma mano que en 1970 y 1971 desató el terror que desestabilizó a los gobiernos de Ovando y Torres.

Como ya se dijo, no se trataba sólo de un terrorismo de estruendo; procuró alcanzar la máxima efectividad en su empeño de cegar vidas. La lista es muy larga para referir todos los nombres de quienes estuvieron a punto de perecer en atentados. Entre las víctimas fatales se cuenta ahora el escritor y político Marcelo Quiroga Santa Cruz, verdadero líder popular cuyo asesinato por sí sólo “justificó”, seguramente, todo el golpe de Estado.²¹ Los mismos grupos paramilitares son los responsables de los asesinatos de la plana mayor de los dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, en un atentado perpetrado en enero de 1981 y que contó con todas las garantías del poder.

Después del 17 de julio quedaron también en claro dos hechos de gran trascendencia: 1) El asesoramiento argentino, que hasta donde se sabe consistió primordialmente en las técnicas de tortura y amedrentamiento,

21 - Los restos mortales de Marcelo Quiroga no fueron entregados a sus familiares debido a que “el gobierno había anunciado a la prensa que no pudo dar con el paradero del cadáver del señor Marcelo Quiroga Santa Cruz”, respuesta del Coronel Luis Arce Gómez, Ministro del Interior, a la Cruz Roja Boliviana en fecha 2 de septiembre de 1980; publicada en EL CALLO ILUSTRADO, Suplemento Dominical do EL DIA, edición del 15 de marzo de 1981.

materias en las cuales los militares argentinos alcanzaron altas calificaciones hasta el punto de convertirlas en producto exportable; y 2) La participación de los grupos de la mafia del narcotráfico, cuyas bandas estuvieron comandadas por personas que, al parecer, obedecían las directrices de jefes militares en posiciones de mando.

El uso del terror se dio tanto en dimensiones masivas como en acciones de carácter selectivo. Por un lado se orientaba a amedrentar a las masas obreras, campesinas y de las capas medias, pues se había comprobado en noviembre del 79 que las movilizaciones populares alcanzaron grandes proporciones y fueron un factor de importancia que obligó al repliegue de los militares a los cuarteles: por tanto, había que demostrar al pueblo en su conjunto que en un nuevo intento, los golpistas saldrían a matar sin contemplaciones, lo que frenaría cualquier resistencia masiva. Las acciones selectivas se encaminaron a la eliminación física de los principales dirigentes políticos, cuya ausencia del escenario boliviano podía alterar todo el proceso y crear situaciones propicias para el golpe; tales fueron, por ejemplo los alentados contra los candidatos de la U.D.P.

Las acciones de terror traspasaron incluso los dinteles de la Casa Presidencial, cuando el propio Comandante del Regimiento Escolta, quiso penetrar a los aposentos privados de la Sra. Presidente de la República

con manifiestos propósitos agresivos. Se ha tratado de justificar este hecho señalando que dicho Coronel de Ejército actuó inconscientemente, perturbado por el alcohol. Pero la naturaleza de los hechos, la violencia demostrada en esos momentos cruciales y sobre todo, el comportamiento posterior parecen confirmar que fue algo más que el alcohol el elemento que alteró la conducta de este alto jefe militar. Con esto se buscaba herir la sensibilidad de una mujer que ejercía funciones decisorias para el conjunto de la Nación y crearle una sensación de total inseguridad.

El terror desencadenado en las calles perseguía también lograr una aceptación pasiva a un gobierno de mano dura. Es decir, amplios sectores intranquilizados por las explosiones, las amenazas y los asesinatos, estarían dispuestos a aceptar un gobierno dictatorial que garantice “la paz y el orden”, en lugar de persistir en un gobierno democrático incapaz de asegurar las condiciones mínimas de tranquilidad y sosiego. El terror crea incertidumbre y ansiedad en los sectores menos politizados, los que poco a poco comienzan a clamar para que tal situación concluya pronto.

III

LA PSICOSIS DEL GOLPE

Así se fue creando una atmósfera especial que se re-
troalimentaba constantemente con los rumores de todo

tipo sobre la situación política, especialmente sobre la inminencia de un golpe de Estado. En la fase anterior a las elecciones, las acciones se encaminaron a crear un escepticismo generalizado sobre la realización de aquel evento electoral. No hay duda que hicieron todo lo posible por impedir que el pueblo boliviano expresara por tercera vez su veredicto. Incluso, contra toda norma legal o disciplinaria, los altos mandos de las FF.AA. llegaron a proponer una postergación de las elecciones, fijadas para el 29 de junio de 1980, en atención a “que no estaban dadas las condiciones para una nueva consulta popular”.

Esta proposición era sin duda totalmente contradictoria con las propias actitudes de los altos dirigentes de las FF.AA., que en discursos públicos, cada vez más frecuentes, sostenían puntos de vista que daban a entender que ante la falta de autoridad, las FF.AA. deberían asumir sus propias decisiones. Es decir, por una parte se reconocía que el gobierno de la Sra. Gueiler era incapaz de enfrentar los problemas del país, y por otra, se proponía una prolongación de ese mismo gobierno, cuyo mandato concluía el 6 de agosto de 1980, de acuerdo con la resolución legislativa que le dio origen.

Aparecía evidente que si el Parlamento acogía el criterio de postergar las elecciones, creaba de inmediato las condiciones justificativas para el golpe de Estado. Sin embargo, la maniobra era demasiado burda para sorprender a nadie. En efecto, el Parlamento rechazó

esta proposición sin discutirla y aprovechó la oportunidad para recordar a los militares su función específica. Pero no fue ésta la única vez en que el Poder Legislativo tuvo que enfrentarse a los sectores golpistas de las FF.AA., ya que en diversas ocasiones los pronunciamientos de los altos mandos sobrepasaron el marco de sus atribuciones legítimas y motivaron la respuesta del Parlamento, frente al silencio del Poder Ejecutivo. Las frecuentes movilizaciones de los tanques de guerra por las calles de La Paz tenían el propósito de alterar las expectativas de la población y dar pábulo a especulaciones sobre la inminencia del golpe. Los propios movimientos de los jefes militares eran realizados de tal manera que pudieran despertar sospecha sobre sus motivaciones o propósitos. Lo importante, para ellos, era mantener latente la incertidumbre política y crear al mismo tiempo, la impresión de que los militares tomarían el poder en cualquier momento. De esta forma se buscaba la aceptación silenciosa del pueblo sobre, un pretendido “derecho al golpe de Estado”, que muchos militares parecen atribuirse a sí mismos.

En la víspera o durante la realización de cualquier acontecimiento importante se deslizaba el rumor de que en esos momentos o en las próximas horas se desencadenarían las acciones armadas para derribar al régimen. Los rumores eran acompañados de movimientos o actos internos en las FF.AA. (incluso declaraciones públicas) que usualmente hubiesen parecido normales, pero

que, en el ambiente de psicosis de Golpe que prevalecía, alteraban la vida cotidiana y minaban las energías de quienes eran rápidamente convocados para examinar la “crítica situación”.

Es la repetición de la vieja “fábula del lobo”, cuya llegada se anuncia tanto que al final ya nadie cree en ella, y cuando se produce, toma a todos desprevenidos e indefensos. Los rumores tienden a crear el ambiente de la fábula, pues están dirigidos a puntos previamente elegidos y con muestras de aparente veracidad que difícilmente se puede dudar de ellos. De otra parte, nada fue más ostensible que los preparativos del golpe y nadie podrá negar que el gobierno de la Sra. Gueiler era “un gobierno perseguido”.

La “psicosis de Golpe” desgasta rápidamente a cualquier gobierno, porque le merma autoridad ante propios y extraños, acentúa la desconfianza de sus propios integrantes, posterga la consideración de los problemas fundamentales y le quita el respeto de los gobernados. De otra parte, acelera el transfugio de los grupos oportunistas que siempre aparecen haciendo rosca ante cualquier gobierno y que, ante los rumores, tienden a entrocarse con los nuevos líderes emergentes. Además, hace que mucha gente deje para después operaciones importantes con el gobierno, incluso el pago de impuestos, la amortización de deudas o el cumplimiento de compromisos, lo que acentúa la ineficiencia gubernamental.

Los rumores de golpe, y la psicosis acompañada, sirven como factores de nuclearización de los golpistas, por una parte y de desorganización de los gobiernos y de sus elementos de apoyo, por otra. En un país de gran inestabilidad política, el simple rumor de que un alto jefe militar en posiciones de mando está dispuesto a hacerse cargo del gobierno, desempeña el papel de catalizador que permite identificar con qué fuerzas contaría a su favor, cuáles se pondrían al frente, y, las que aparecen indecisas. Ese simple rumor da lugar a un realineamiento de los grupos que viven de la política o que actúan políticamente. Más aún, cualquier posible liderazgo identificado entre oficiales de menor graduación va creando expectativas de golpe a largo plazo, de modo que los dotados de don de mando aparecen como si estuvieran signados para un porvenir de gloria, por el efecto de nuclearización que crea a su favor la expectativa de golpe.

La función desorganizadora de gobiernos constituidos ya ha sido mencionada anteriormente. Los rumores provocan el drenaje de las fuerzas de apoyo y agravan la desconfianza interna entre los que integran las alianzas, frentes, bloques o acuerdos para gobernar. Cuando los rumores persisten, sin que el gobierno constituido sea capaz de acallarlos o sin que adopte las medidas correspondientes, la descomposición interna se acentúa. La burocracia se ve también afectada, pues todo golpe de Estado desencadena un período de inestabilidad fun-

cionaria que amenaza especialmente, a los que aparecieron más identificados, directa o indirectamente, con el gobierno caído. Un indicador de identificación es la eficiencia mostrada en el desempeño de las funciones burocráticas. Así, los más celosos o eficientes en el desempeño burocrático son los candidatos más próximos a perder el puesto. Ha aquí uno de efectos mediatizadores que tienen los golpes de Estado en países donde constituyen la forma “institucionalizada” para el cambio en el poder, y en los que las previsiones de golpe hacen que los funcionarios más perspicaces abandonen voluntariamente y a tiempo la administración pública, o mediaticen sus aspiraciones y participación para asegurar su permanencia a cualquier costo.

La psicosis de Golpe fue creada artificialmente y constituyó una de las actividades preparatorias mejor realizadas. Al final, los golpistas lograron que se minara al gobierno de la Sra. Gueiler con la doble mirada con que se observa a los condenados a muerte. Evidentemente, lo esencial del golpe no estuvo dirigido contra ese gobierno (que concluiría de todas formas el 6 de agosto) pero en ese momento representaba el proceso y detenía formalmente el poder. Por eso, los paramilitares que en las acciones previas ocultaban tenebrosamente su rostro, cubiertos por medias nylon de mujer, atacaron primero la reunión del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, en el local de la Central Obrera Boliviana, y minutos después, el Palacio de Gobierno

donde sesionaba el Gabinete de la Sra. Gueiler. Los paramilitares que llegaron al Palacio desempeñaron una tarea más formal que efectiva, pues el Palacio y la Presidente eran sólo el símbolo que, por lo demás, ya estaba en custodia de la propia Guardia.

IV LOS PARAMILITARES

La organización de grupos paramilitares no es del todo nueva en Bolivia; pues ya formaron parte de los mecanismos usados antes, durante y después del golpe de agosto de 1971 con que se instauró el fascismo en Bolivia. Significan una evolución de los grupos de choque de la Falange Socialista Boliviana, que se desangraron en los sucesivos intentos de captura armada del poder del Estado, en tiempos del MNR. Los resabios de los grupos “camisas blancas” que en la década de los 50 y principios de los 60 se enfrentaban a las milicias del MNR y a los agentes del Control Político, encontraron su forma de supervivencia y desarrollo durante la instauración del régimen fascista de Bánzer.²² En 1980 lograron ampliarse con la incorporación de ciertas bandas manejadas por los narcotraficantes; aunque el proceso de aproximación entre ambas era ya antiguo debido a que, según informes, muchos “camisas blan-

22 - Los grupos de choque de Falange Socialista Boliviana fueron reclutados entre estudiantes de secundaria universitarios, excadetes del Colegio Multar, exoficiales del Ejército y lumpen.

cas” se convirtieron en adictos a la droga.²³ Se trata, en general, de grupos del hampa organizado.

El gobierno del Gral. Bánzer asimiló esos grupos a la policía política y fueron los encargados de sembrar el terror durante los siete años que duró ese régimen. Ahora se conoce que en su organización y funcionamiento participaron y participan exoficiales de las SS de Hitler y mercenarios europeos latinoamericanos.²⁴ Existe un sentido profesional en sus actividades y no son simplemente grupos de aficionados o simpatizantes de la violencia. Están sometidos a entrenamientos

23 — En las listas de narcotraficantes y adictas a la droga, que aparecen en documentos que se citan en este trabajo, se incluyen los nombres de los principales jefes de los grupos paramilitares. Estos grupos fueron asimilados (SES) cuyas acciones no sólo aterrorizan a la población boliviana, sino que han causado preocupación en sectores militares que conocen los riesgos de mantener grupos armados que actúan por cuenta propia. Frente a los reclamos sobre su conducta, el Gral. García Meza asumió la defensa señalando que “no son gente sin oficio ni beneficio, sino que son importantes factores que contribuyen al desarrollo del país”, agregando sin embargo, que “serán controlados para evitar abusos por parte suya en su labor de control”. A fines de marzo do 1981, efectivos militares estacionados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tuvieron que intervenir al Servicio Especial de Seguridad (SES) para “cortar los abusos que se venían cometiendo”. Según publicaciones de prensa, los paramilitares son, en total, 1600 en servicio activo; lo que significa un aparato de violencia capaz, en ciertas condiciones, de disputar al Ejército los puntos vitales para el control militar y político de las principales ciudades y centros del país.

24 — En el Brasil fue detenido (mayo 1981) un grupo neonazi de varias nacionalidades, autodenominado “Los Novios de la Muerte” que portaba junto a sus armas, tres kilos de cocaína. Se descubrió que miembros de este grupo estaban protegidos por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. bolivianas, Gral. Edén Castillo. Es también conocida la participación de Klaus Altman, el “carnicero de Lyon”.

rigurosos en lo militar, y los más destacados o lúcidos, siguen cursos de inteligencia. En este sentido, evolucionaron de tal manera que ya es difícil reconocer en ellos los resabios de los grupos de choque falangistas de los primeros tiempos, que hacían gala de fanatismo y valentía, pero que no eran todavía los profesionales de la violencia, aptos para matar y maltratar sin remordimientos de conciencia.

Lo nuevo está en la forma en que intervinieron en el golpe de Estado de 1980; es decir en la función que desempeñaron en las acciones desatadas para capturar el gobierno. Una vez que los golpistas lograron el control absoluto de los mandos de las FF.AA. y de la Policía Boliviana, dejaron sin protección armada al gobierno de la Sra. Gueiler. Es decir, ese gobierno quedó totalmente a merced de cualquier grupo armado que saliera a las calles, pues carecía incluso de autoridad sobre los servicios de seguridad del Estado que estaban dirigidos por un ex-general de la Fuerza Aérea; que desempeñaba las funciones de Ministro del Interior.

En estas circunstancias, sólo se requería un detonante del Golpe en una guarnición alejada de la sede del gobierno, para proceder a la captura del gobierno. Esa acción detonante desempeñaría la función de un anzuelo para provocar las reuniones del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia y del Gabinete de la Sra. Gueiler, en sus sedes respectivas. Una vez reunidos,

resultarían presa fácil para la acción relámpago de un grupo adiestrado y fuertemente armado, que actuara coordinadamente, bajo una voz de mando centralizada. Los problemas de logística resultaron elementales frente a un gobierno inerte, pues sólo consistieron en unas cuantas metralletas, un cierto número de ambulancias secuestradas a la Caja de Seguro Social y un galpón en el cuartel general (para lo cual se habilitó una caballeriza, con la consiguiente incomodidad para los equinos que tuvieron que ceder sus aposentos para que allí fueran concentrados los presos políticos). Y así ocurrió en la realidad.²⁵

En la mecánica de este Golpe, los paramilitares tuvieron a su cargo las tareas sucias de asaltar locales, tomar prisioneros, perseguir políticos, allanar domicilios, robar, torturar, asesinar y desencadenar el terror en Bolivia. Al utilizarlos, los golpistas no sólo mostraron a sus camaradas de armas que podrían actuar independientemente del resto de las FF.AA.; es decir, que tenían capacidad para lanzarse a la calle sin necesidad de recurrir a la movilización de regimientos militares cuyos comandantes podrían no estar dispuestos a ensuciarse las manos y el uniforme en tareas gansteriles.

25 - El golpe estalló a las 5 de la madrugada del 17 de julio de 1980, en la Ciudad de Trinidad. A las diez de la mañana, aproximadamente, se reunieron los miembros de CONADE y los del gabinete de la Sra. Gueiler. Entretanto los para militares secuestraron las ambulancias de la CNSS y en ellas se movilizaron para asaltar la sede de la COB y el Palacio de Gobierno. Luego, dirigentes y ministros fueron concentrados en una caballeriza del Gran Cuartel de Miraflores.

Pero, además, les permitía demostrar a los indecisos o reticentes, que también podrían correr la misma suerte que los políticos a manos de los paramilitares. El terror no sólo iba dirigido hacia los que están más allá de los cuarteles, sino también a los que están dentro de ellos.

Durante los días del golpe, las puertas del Gran Cuartel de Miraflores permanecieron totalmente abiertas para los trajines de los paramilitares, quienes después de cada batida regresaban con su carga humana maltrecha y atormentada. Pues, las acciones que tenían a su cargo no se caracterizaban precisamente por los buenos modales. Fueren días de terror y desenfreno, en que las bajas pasiones se desencadenaron sobre Bolivia al amparo de la “carta blanca” librada por los golpistas. Lo cierto que después de cumplidas, las primeras acciones, salieron a la calle las patrullas militares, especialmente después de la hora en que se iniciaba el toque de queda. La presencia de oficiales y soldados constituyó una mayor garantía para la población, pues los primeros son profesionales que actúan por disciplina y los segundos son ciudadanos que están cumpliendo su deber militar; circunstancias que hacen presumir que actúan al margen de cualquier insanía. Sin embargo, es de tener en cuenta que en los allanamientos actuaban juntos, militares y paramilitares, correspondiendo a estos últimos la iniciativa mientras que los primeros representaban el respaldo de la fuerza.

Es digno de anotar, para la historia, lo que ocurría en estas operaciones conjuntas mientras los oficiales y soldados actuaban con el rostro descubierto, los paramilitares se recubrían con medias nylos de mujer, dando a su presencia un aire de tenebrosidad capaz de desencadenar el pánico en los familiares de los perseguidos. Tales precauciones de los paramilitares obedecían a razones de seguridad, pero también a propósitos específicos de amedrentamiento. Seguramente los propios soldados sentían escalofríos cuando escuchaban las voces deformadas de quienes les daban órdenes, desde el fondo de una máscara. La máscara de por sí es siniestra.

Para los jóvenes oficiales que por disciplina tuvieron que ponerse a órdenes de enmascarados, esta experiencia debió tocar muy hondo en su sensibilidad humana y su conciencia profesional. Finalmente, los militares son hombres como todos los demás, saben amar, odiar, sufren, se divierten, tienen esperanzas y frustraciones; y sienten orgullo por su profesión, como cualquier ciudadano que por las circunstancias particulares de la vida tuvo que seguir un camino determinado. Para ellos debió significar una profunda humillación el tener que actuar bajo órdenes o en compañía de enmascarados, cualquiera sea el pretexto que se hubiera utilizado para justificar la máscara. Para un profesional cualquiera, que cree en la dignidad de su profesión, el tener que actuar a la manera gansteril representa un fuerte sacudimiento en sus fibras íntimas. Tales hechos se marcaron de manera

indeleble, para bien o para mal, en la conciencia de los jóvenes miliares que participaron en ellos.

Los efectos traumatizantes son mayores en los integrantes de la tropa que intervino en esos acontecimientos. Como ya se dijo, los soldados son ciudadanos que por llegar a una edad determinada tienen que ingresar a las filas del ejército para cumplir su deber militar, establecido por las leyes de la República. Ellos no estuvieron allí por razones profesionales, sino por motivos totalmente ajenos a su voluntad. Sin duda comprendieron que no estaban sirviendo a la Patria cuando eran obligados a allanar hogares, apresar ciudadanos, presenciar asesinatos o transportar cadáveres. Probablemente después, cuando retornen a la vida civil, sentirán náuseas cada vez que recuerden su paso por el Ejército.

Más aún, cuando con el correr del tiempo, los oficiales y soldados que participaron en estas tareas, se enteraron por la prensa o los comentarios callejeros, de que los dirigentes máximos que durante el Golpe dieron las órdenes supremas, estaban comprometidos en el criminal negocio del narcotráfico, un sordo sentimiento de ira tuvo que apoderarse de ellos. Porque, seguramente no hay mayor ofensa para todo hombre normal que el ser manipulado por delincuentes que usan “el deber a la Patria” como un pretexto para lograr sus ruines propósitos.

Desde el punto de vista de la Institución Militar, nadie

pudo causarle daños mayores que los provocados por los golpistas del 17 de julio de 1980 y que controlaron el gobierno surgido del mismo. No sólo afectaron su prestigio frente a la población boliviana, sino frente a todos los países del mundo, pues las informaciones sobre la participación directa de miembros del gabinete de García Meza en el tráfico de drogas tuvieron resonancia mundial. Además, provocaron un insuperable relajamiento de la moral militar.

Esto que les ha ocurrido a las FF.AA. bolivianas tiene mayor significado que cualquier derrota en guerra internacional. Los militares chilenos deben sentirse muy satisfechos.

Los paramilitares, no sólo desempeñaron tareas militares y represivas, pues formaron parte importante entre las bases de sustentación política y social del régimen. Surgidos de las capas medias y del lumpen, constituyen los sectores más agresivos en el accionar políticos de la derecha boliviana. Incluso llegaron a copar segmentos importantes de la administración pública, especialmente aquellos donde existe la posibilidad de enriquecimiento fácil. Así, lo primero que controlaron fue la Lotería Nacional, la Caja de Seguro Social, las oficinas recaudadores de impuestos a la coca, las oficinas de la Renta Interna y de la Aduana. Demás está decir que coparon todas las reparticiones del Ministerio del Interior.

V

LAS BASES DE SUSTENTACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

Las bases de sustentación social y política del régimen de García Meza son sumamente endebles pese a que la aglutinan las fuerzas más recalcitrantes de la derecha boliviana. Lo que ocurre es que esta última, por mucho esfuerzo que haga, no puede dar de sí más de lo que sus esmirriadas fuerzas le permiten. La debilidad orgánica de la derecha no es un invento de los analistas políticos; es un hecho histórico comprobado. Podría pensarse que la apreciación de tal debilidad no es más que producto del subjetivismo o de una observación un tanto miope de los analistas políticos. Pero es el resultado innegable de un riguroso análisis sociológico.

Indudablemente que sería desastroso menospreciar la capacidad de la derecha, si ésta mostrara una potencia real. Una equivocación en esto podría significar no sólo frustraciones para el movimiento popular, sino un enorme costo social en el proceso revolucionario. La aparente fortaleza de los regímenes fascistas (de Bánzer y García Meza) no es producto de las bases de sustentación social, sino del despliegue armado de las fuerzas militares. Es decir, son los militares los que dan fortaleza y cohesión a la derecha y no al contrario.

Pero, a diferencia del régimen de Bánzer, el de García

Meza se caracteriza por una desesperada orfandad política. Mientras Bánzer pudo organizar el Frente Popular Nacionalista, aglutinando al MNR pazestensorista, FSB, Confederación de Empresarios Privados, FF.AA.; García Meza ni siquiera logra unificar a estas últimas. Bánzer pudo apoyarse, en sus primeros años, en el pacto militar-campesino y, utilizando la corrupción como forma de mediación estatal, logró controlar sectores sindicales adictos a las viejas direcciones del MNR. Asimismo, la Confederación de Empresarios Privados unificaba a todos las fracciones burguesas, bajo la bandera del anticomunismo.

El golpe de García Meza cuenta entre sus bases sociales y políticas a lo más recalcitrante de la derecha ultramontana, representada por el banzerismo. De modo que es necesario comprender lo que significa el banzerismo para apreciar de manera correcta el contenido político y social del régimen de García Meza. Una primera aproximación puede lograrse al analizar los resultados de las dos últimas votaciones, en las que participó el banzerismo, bajo la sigla de Alianza Democrática Nacionalista (ADN). Pero, la comprensión más cabal se alcanza al investigar los componentes sociales de la ADN.

El banzerismo no es un partido político, aunque la Acción Democrática Nacionalista, base de la ADN, muestra algunos elementos de partido. Es más un frente elec-

toral que se aglutina alrededor de un caudillo y sobre la base de planteamientos, también de tipo electoral, que adquieren la forma de un programa de gobierno. Pero lo que realmente unifica a las fuerzas sociales que constituyen el banzerismo son: los intereses de la burguesía y el imperialismo, las perspectivas de acceso y disfrute del poder del Estado, y, sobre todo, el temor del ascenso de las masas populares, especialmente de la clase obrera, al poder. La unificación se da por razones de supervivencia; sigue el curso lógico de una derecha que en el devenir histórico de las luchas sociales bolivianas fue perdiendo progresivamente sus bastiones políticos y que vio el descalabro paulatino de los partidos que debían constituir sus instrumentos normales de acción. Ante la crisis de los partidos, la derecha tuvo que aferrarse al caudillo.

En apariencia, la opción más inteligente de la derecha podría estar representada por el MNR - Histórico, del Dr. Víctor Paz Estenssoro, que desde el punto de vista programático constituye la expresión más lúcida de los intereses trascendentales de la burguesía y el imperialismo, en el estado actual de la coyuntura histórica.

Sin embargo, la perspectiva del MNR pazestensorista se da dentro de un marco democrático de las luchas políticas bolivianas; es decir, el ascenso del Dr. Paz Estenssoro al poder sólo puede darse por las vías democráticas. Y ésta es la mayor limitación; pues, la de-

mocracia no es la forma de desenvolvimiento político más conveniente para la burguesía, porque a muy breve plazo es arrinconada por el movimiento popular y pone en riesgo su propia supervivencia. Así, la burguesía sacrifica lo óptimo, por lo posible. Esto no significa que no haya sectores burgueses apoyando al Dr. Paz Estenssoro, pues fracciones importantes jugaron sus cartas a favor del MNR- H; pero la apabullante derrota electoral sufrida el 29 de junio, provocó el realineamiento alrededor del banzerismo y, a través de éste, del golpismo.

El banzerismo no es del todo homogéneo. Se aglutinan en él resabios de múltiples corrientes políticas, residuos de partidos frustrados por la historia, diferentes fracciones de clase, grupos surgidos de las capas medias y del lumpen, ciertas escorias del movimiento obrero y algunos restos del caciquismo campesino. Pero cuenta también con sectores militares y grupos paramilitares que son los que le dan la perspectiva real para el retorno, al poder. Además cuenta con vigoroso respaldo externo, especialmente de las dictaduras fascistas de los países vecinos (incluido el de su amigo Pinochet, el negador de los derechos marítimos de Bolivia) y ha llegado a constituirse en la opción más adecuada para el imperialismo, luego del ocaso del pazestensorismo.

Detrás de Bánzer están los resabios del falangismo, pirismo, barrientismo, pursismo, liberalismo y ciertos

grupos desgajados del MNR-H, PSD, PRA y otros partidos menos significativos. Aglutina a lo sustantivo de la burguesía agroindustrial (que hoy aparece muy vinculada con el narcotráfico), la burguesía ganadera, la minería mediana, la burguesía financiera, la burguesía importadora, ciertos sectores de la burguesía industrial y del autotransporte, la burguesía de la construcción, y además recibe el respaldo de las transnacionales que operan en Bolivia y de otras empresas extranjeras, que no son precisamente transnacionales.

El banzerismo nucleariza amplios segmentos de la burocracia estatal, de profesionales cuya actividad se vincula al manejo estatal e incluso, muchos profesionales independientes, pequeños comerciantes e industriales, mineros pequeños, grupos de artesanos y otros de las capas medias. Controla, asimismo, algunas direcciones campesinas, como herencia del antiguo y ya superado Pacto militar-campesino. También tiene influencia en lo que se denomina la escoria del movimiento sindical boliviano, a través de los que desempeñaron funciones de coordinadores sindicales, y de otros elementos desclasados.²⁶ Sin duda que el banzerismo tiene una cierta base social que no se puede ignorar y que se expresó muy claramente en las dos últimas elecciones en Bolivia.

26 - Mediante D.S. No. 17545, de 18 de agosto de 1980. el gobierno del Gral. García Meza dispuso que el Ministerio de Trabajo elija un Relacionador Laboral para cada centro laboral, a base de una terna propuesta por el organismo correspondiente.

Pero, ¿acaso este análisis no resultaría incongruente con la proposición inicial de la extrema fragilidad de las bases de sustentación social y política del régimen de García Meza? Para desentrañar esta apariencia debemos referirnos al carácter dual, al doble papel, de la participación del banzerismo en el gobierno de García Meza. En cierto sentido puede decirse que el banzerismo está y no está en el gobierno. Es evidente que está en el gobierno, pues controla segmentos muy importantes del aparato administrativo del Estado, especialmente los mecanismos económicos. Pero, el Gral. Bánzer no está en el gobierno, es decir, no está desempeñando las funciones de Presidente de la República y, por lo tanto, no es el centro principal de las decisiones. Y el banzerismo es, esencialmente, Bánzer.

De hecho sería ingenuo creer que lo banzeristas, desde los colaboradores más inmediatos (sus acompañantes vicepresidenciales en las fórmulas electorales, Jorge Tamayo y Mario Rólon) hasta los más insignificantes, se encaramaron en el gobierno de García Meza, sin contar con la autorización expresa y el compromiso de su jefe político. Evidentemente, se trata de grupos oportunistas que sólo cuidan sus intereses; pero, una incorporación masiva, de todos sus cuadros y en todos los niveles administrativos, no puede ser concebida sin la orden expresa del Gral. Bánzer. El banzerismo está en el gobierno.

Pero, para los banzeristas el gobierno de García Meza no significa más que un puente para la captura del poder total, o por lo menos para intentarlo. El gobierno en el cual participan no es la meta final; su situación actual no es la definitiva; es apenas una situación de tránsito. El propósito central es la captura del poder total y la instauración del Gral. Bánzer como Presidente de Bolivia. Por eso el Gral. Bánzer tiene que permanecer fuera del gobierno, debe demostrar su independencia. El banzerismo es, objetivamente, uno de los soportes del régimen, pero Bánzer mantiene su autonomía, su “capacidad de oposición”. El Gral. Bánzer necesita un radio de maniobra en su empeño para volver a la Presidencia.

Por eso no está en el gobierno; ²⁷ está en la oposición.

27 - La agria polémica pública suscitada entre Bánzer y García Meza confirma esta apreciación. El Gral. Bánzer manifestó en comunicado público que retiró su apoyo al Gral. García Meza “para no comprometerse con la inmoralidad y la ineficacia que campean en todo el país. “García Meza calificó de subversivas estas declaraciones y declaró que “parecen el resultado de un acto de despecho al no haberle dado curso en su demanda de carácter personal, para su designación como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”. Bánzer sostuvo que “se ha roto el principio jerárquico y disciplinario y nadie se esfuerza por dar ejemplo de seriedad, austeridad y temperancia, que son la base de la moralidad”, para añadir que “tampoco se demuestra capacidad, requisito indispensable para comandar o gobernar”. García Meza respondió que “el gobierno sabrá responder a la provocación” que es fruto del resentimiento y de la ambición personal frustrada. Los ministros Rolón Anaya y Tamayo Ramos buscaron el acomodo manifestando que ingresaron al gobierno “a título personal”. Todo esto corrobora plenamente lo que aquí se sostiene: El Gral. Bánzer quiere aparecer como el hombre de reemplazo, para lo cual tiene que mostrar su “cuota de sacrificio”, enfrentando persecuciones, arrestos domiciliarios y, finalmente, el exilio.

De ahí la debilidad de un gobierno que se, desenvuelve sobre bases prestadas. Está a merced de quien las presta. Pero no se debe olvidar que García Meza se respalda finalmente en los grupos militares y se dice que tiene bases de apoyo en la mafia del narcotráfico. Posee también su propia capacidad de maniobra, aunque al parecer se le restringe cada vez más y el poder comienza a irse de las manos. Sin embargo, aún en este propio terreno aparece el banzerismo vinculado a personajes que son mencionados en los informes oficiales y oficiosos sobre el narcotráfico. El campo militar y el campo de la mafia pudieran ser, de esta manera, terreno en disputa.²⁸

Al comenzar este punto se ha señalado que no sólo el régimen de García Meza es débil, sino también que la derecha en su conjunto carece de fortaleza. Ya se dijo mucho, tanto en este trabajo como en otros, sobre la ausencia de una burguesía nacional potente y sobre la incapacidad orgánica de las fracciones burguesas para ejercer el liderazgo sobre las demás, o sea, para desempeñar un rol hegemónico. Asimismo, son incapaces de formar bloques de poder para resolver el problema de la

28 El Tcnrl. Emilio Lanza, comandante del Centro de Instrucción de Tropas Especiales (CITE), el 11 de mayo de 1981, se sublevó contra el gobierno de García Meza, señalando que lo hacía con el propósito de “limpiar la mancha que ha caído sobre las Fuerzas Armadas, especialmente por el narcotráfico y el desgobierno”. (ÉXCELSIOR, 12 de Mayo). Después de sofocar el alzamiento, García Meza señaló que los “grupos nacionales y extranjeros vinculados al narcotráfico fomentan estas acciones” (UNO más UNO, 13 de mayo). Ese mismo día fue expulsado el Gral. Bánzer hacia la República Argentina.

debilidad estructural que demuestra cada una. Ya se dijo también que por ello tienen que buscar desesperadamente el eslabón que es proporcionado por las FF.AA.

El raquistismo de las clases dominantes se expresa tanto en la falta de carácter nacional como en la debilidad de su conciencia de clase. Las clases dominantes no confían en Bolivia, es decir, no están seguras de que su permanencia en el poder esté garantizada. Por eso se extranjerizan, y trasladan al exterior una parte creciente de los excedentes generados en el país. Para el grueso de las fracciones burguesas, Bolivia es un país de tránsito, no es el país definitivo. Su pretensión consiste en que ese tránsito se prolongue indefinidamente, pero el temor al cambio les impide actuar con criterios de largo plazo. De ahí derivan las limitaciones al proceso de acumulación de capital; así se explican las reticencias a realizar inversiones reales de carácter productivo. Y como sabemos, burguesía que no acumula, que no valoriza el valor, no puede desarrollarse, no puede fortalecerse.

En cuanto a las capas medias, debe remarcarse que Bolivia no es precisamente un país de clases medias. Este hecho está también relacionado con las características específicas del desarrollo capitalista, y más propiamente, con las formas concretas en que la economía fue articulada a la economía mundial. La actividad minera extractiva, localizada en áreas geográficas determinadas, y la permanencia de las relaciones precapitalistas

en el campo, impidieron la formación de centros urbanos pujantes. De esta forma se limitó el crecimiento de las actividades que pudieran dar sustento a la expansión de las capas medias. Por su parte, la oligarquía minera desempeñó funciones mediatizadoras del resto de la sociedad, y no abrió oportunidades para una amplia clase media; la rosca minera tenía un carácter absorbente y selectivo. Asimismo, la revolución democrática de 1952, si bien abrió perspectivas notables para el desarrollo de las capas medias, resultó finalmente frustrada. Así, las capas medias son débiles y tienen un comportamiento oportunista.

La conclusión en este punto se refiere a que el golpe de García Meza se sustentó principalmente en la fuerza militar y paramilitar; el respaldo social y político fue accesorio. Además, era un respaldo que de no haberse comprometido previamente, de todas formas tenía que llegar puesto que para las clases dominantes la senda de la democracia burguesa quedó cerrada después de su derrota electoral. Las fracciones de la burguesía que participaron en la gestación del golpe lograron nuclearizar a las demás, pero los nexos de unión no pueden ser duraderos.

Un factor de desunión está constituido por la participación de los narcotraficantes. Afecta no sólo a los militares, sino también a las propias fracciones burguesas y al conjunto del régimen. Los militares que no están en

el negocio de la droga, que seguramente forman la mayoría de las FF.AA., no pueden estar a gusto compartiendo un gobierno con los narcotraficantes, y menos aún pueden estar de acuerdo con que su institución y su profesión aparezcan vinculadas con la mafia. Lo mismo ocurre con las fracciones burguesas que no están manchadas por este negocio, tratarán de desvincularse de las que lo están, no sólo por razones morales, sino por razones de supervivencia. En cuanto a algunas fracciones burguesas resulta ahora totalmente difícil, por no decir imposible, diferenciar que parte de su capital provino de negocios lícitos y qué parte es el aporte de la droga. Hasta recordar que apellidos de hombres de empresa que figuran entre los principales de Bolivia aparecen ahora vinculados con el tráfico de drogas.

Por lo demás, si bien el circuito de los coca-dólares no se circunscribe exclusivamente a la relación entre traficantes, productores directos y campesinos, sino que se difunde por todo el sistema económico, especialmente en la esfera comercial y financiera, no puede constituir un elemento de unión de todas las fracciones burguesas. En realidad es lo contrario: un factor de desunión puesto que favorece el mayor enriquecimiento de unos cuantos, inclinando hacia ellos el balance del poder. No son simplemente los reparos de tipo moral, sino factores económicos y políticos, los que enfrentarán a unas fracciones burguesas con otras de su misma clase.

VI EL PAPEL DEL IMPERIALISMO Y DE LOS PAÍSES VECINOS

Resulta difícil comprender la actitud del imperialismo sin tener en cuenta la crisis general que confronta el sistema capitalista en su conjunto. Además, es preciso considerar, de manera específica, la correlación de fuerzas a nivel mundial y las características concretas que asume la lucha entre los dos sistemas. A partir de estos elementos se puede llegar a comprender también el papel que desempeñaron los países vecinos en relación con el golpe de García Meza y el desenvolvimiento político general de Bolivia.

En 1976 ascendieron los demócratas al poder en los Estados Unidos enarbolando el lema de la defensa de los derechos humanos. El triunfo de Cárter frente al entonces Presidente Ford tuvo mucho que ver con la crisis moral, además de la profunda crisis económica que no encontraba respuesta adecuada en la política económica de los republicanos. Como efecto de esa crisis moral habían sido derribados, sucesivamente, el Vicepresidente Spiro Agnew y el Presidente Richard Nixon, el primero por soborno y el segundo por el escándalo de Watergate. Además, estaba muy fresco el recuerdo del fracaso militar en Vietnam que sacudió los propios cimientos de la sociedad norteamericana.

La defensa de los derechos humanos no era únicamente una expresión del resurgimiento moral de los Estados Unidos, pues tenía igualmente propósitos políticos dentro del gran enfrentamiento con el socialismo, por lo menos con respecto a las formas concretas que asume este sistema en la Unión Soviética y los países de la Europa del Este. La nueva administración demócrata pretendía “poner en jaque a la Unión Soviética en materia de derechos humanos”, pero también perseguía demostrar que el capitalismo es un sistema que se sustenta en el respeto a los derechos elementales del hombre, tales como la vida, la libertad, el derecho de asociación, de elegir los gobernantes y, en fin, los derechos a cuyo respeto el hombre aspira. En este sentido, significaba un cambio en relación con los viejos términos de la guerra fría.

Evidente que no se trataba de una defensa de los intereses vitales del capitalismo; pues, por el contrario, este sistema tiende hacia una negación creciente de los derechos humanos, hacia una subordinación progresiva del hombre y hacia la perpetuación de la explotación del hombre por el hombre. Los intereses vitales del capitalismo poco tienen que ver con los derechos humanos, cuya defensa es más bien una expresión de nostalgia por los tiempos idos, en que la dinámica del sistema se sustentaba en la libre concurrencia de pequeños productores que necesitaban libertad para actuar, en un ambiente que, como el norteamericano, ofrecía amplias posibilidades para el desarrollo individual.

Pero al esgrimir la bandera de los derechos humanos, los Estados Unidos no podían ignorar lo que estaba pasando en el traspatio, en la América Latina. De esta forma tuvieron que utilizar sus mecanismos diplomáticos para presionar a los gobiernos de estos países en procura de un mayor respeto a tales derechos, debido a que la imagen internacional de los regímenes militares, en cuyo establecimiento los norteamericanos cumplieron un papel decisivo, era completamente adversa. Los dirigentes más lúcidos del gobierno Norteamericano comprendían que si bien tales regímenes pueden resultar muy eficientes en el corto plazo para preservar el sistema, a la larga provocan la radicalización de las masas que se orientan a sobrepasar dichos regímenes y al propio sistema que los engendra. Por eso se orientaron a la democratización del continente, impulsando el retorno a formas democráticas de gobierno en aquellos países en los que era demasiado visible el empleo del terror y la represión como base de la sustentación política.

Por el grado de dependencia tan elevado, Bolivia ha sido desde hace tiempo un campo de experimentación de la política norteamericana. Demócratas y republicanos usaron sus influencias para poner en práctica en Bolivia sus esquemas de política internacional. Igualmente, los funcionarios de diferentes dependencias del gobierno norteamericano podían darse este lujo de experimentar con un país. Así, por ejemplo, el Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA, propiciaron gol-

pes de Estado para instaurar gobiernos que resultaran proclives a sus propuestas. De modo que la actitud del gobierno de Cárter sobre los derechos humanos tenía que repercutir necesariamente en Bolivia. En su tiempo, la Embajada Norteamericana presionó sobre Bánzer para encontrar una salida democrática a la crisis política boliviana que estaba agudizándose.

Las tendencias de la socialdemocracia europea apuntaban en el mismo sentido; es decir, la defensa de los derechos humanos. Las cancillerías de aquellos países con regímenes socialdemócratas utilizaron sus influencias para lograr el restablecimiento de las condiciones democráticas en los países latinoamericanos, y por ende, en Bolivia. También ciertas corrientes de la democracia cristiana internacional, aunque con menor entusiasmo y consecuencia, se mostraban favorables a los procesos aperturistas.

En relación con el golpe del 17 de julio, las actitudes norteamericanas, de la socialdemocracia y la democracia cristiana internacional, fueron totalmente contrarias al golpe. Es verdad que el Embajador de Estados Unidos hizo todo lo posible a su alcance para frenar o postergar el golpe. A raíz de esto, dicho Embajador fue amenazado por la derecha y, por primera vez, un representante de Estados Unidos tuvo que salir a la escapada para proteger su vida después del golpe de Estado. Incluso el Presidente Cárter se hizo acreedor de los

mayores insultos, jamás imaginados para un Presidente de Estados Unidos, por parte de la prensa y los intelectuales de la derecha boliviana.²⁹

Debe recalarse que la actitud del gobierno de Estados Unidos, con respecto a los derechos humanos en Bolivia, no constituía la expresión sustantiva de los intereses fundamentales del imperialismo. De modo que es de suponer que, paralelamente, se dieron otras actitudes discrepantes, por ejemplo del Pentágono o de las transnacionales. Incluso ciertos grupos de interés de Estados Unidos y de sectores políticos del republicanism, manifestaron desde un principio simpatías por el régimen de García Meza. Lo que demuestra que la política exterior norteamericana se hace cada vez más compleja y, asimismo, confusa.

Pero, algo que no se ocultó en ningún instante fue la participación directa del gobierno argentino en el golpe; hecho que además está respaldado por declaraciones públicas del Gral. Videla. Presidente de la Argenti-

29 - El articulista de "EL DIARIO", escritor y biógrafo de generales, propuesto para el Premio Nobel de literatura, Fernando Diez de Medina, en su artículo "Bolivia rompe el cerco de los tontos", llama al Presidente Cárter: tonto, mentecato, necio, cernícalo, mamarracho, torpe, borrico, zopenco y payaso.

Dice también: "Movidos por el tonto mayor Jimmy Cárter, los presidentes y cancilleres de algunas naciones americanas, han hecho el juego al comunismo internacional". Con respecto a otros presidentes latinoamericanos. Diez de Medina dice: "El Mandatario ecuatoriano es un imberbe infatuado que no puede gobernar ni su país". "Venezuela tiene un Presidente Jetattore. . . es un mandatario mal de ojo..."

na en ese tiempo. Así aparece ese país actuando con un alto grado de autonomía con respecto al poder imperial. Y es aquí donde resalta o se hace patente la crisis de liderazgo de Estados Unidos, ya no sólo frente a las potencias capitalistas de Europa y Asia, sino también frente a países de su esfera de influencia que, con mucha generosidad, podrían ser denominados potencias menores. Estos países no sólo pretenden (y hasta cierto punto logran) salirse de su control, sino que al actuar con criterios propios, pueden oponerse a los designios imperiales.

La intervención directa e indisimulada de los militares reaccionarios de la Argentina obedece tanto a razones de seguridad, determinadas por su política interna, cuanto a la necesidad de ampliar sus bases de apoyo en su lucha por el liderazgo sud continental que los enfrenta al Brasil, y en su disputa fronteriza con Chile. El Dr. Siles Zuazo, candidato triunfante, había manifestado a la prensa que continuaría los proyectos de venta de gas a Brasil, y esto exasperó a los militares argentinos que ya ven en peligro el abastecimiento futuro de hierro, a base de los yacimientos del Mutún. Los pretextos se refirieron a imaginarios contactos de la candidatura triunfante con la izquierda argentina; en cuyo caso Bolivia podría haberse constituido en un puente para los opositores a la dictadura argentina. Durante la campaña electoral boliviana los militares argentinos jugaron sus cartas a favor de Bánzer, cuya candidatura fue financia-

da según se sabe, en gran parte, con fondos provenientes de ese país.

La actitud brasileña fue distinta, pues ese gobierno censuró el golpe de García Meza en la OEA y en declaraciones de varios de sus personeros. La prensa brasileña fue mucho más explícita en su condena al golpe y destacó, en toda su dimensión, la intervención argentina. La prensa criticó acremente las declaraciones de Videla y otros militares argentinos, poniendo en claro los propósitos finales que estos persiguieron al propiciar, financiar y asesorar en el golpe de García Meza.

La actitud de los militares chilenos fue de plácemes, como lo es frente a todos los desastres que afectan a Bolivia. Si bien no tuvieron intervención directa, dada la contradicción existente a raíz del problema de la salida al mar, le dieron todo el respaldo y cobertura a nivel diplomático en la OEA, organismos de la ONU y demás foros internacionales. García Meza se declaró públicamente admirador del Gral. Pinochet, quien no sólo niega los derechos históricos de Bolivia a una salida al mar, sino que sostiene la tesis de la inviabilidad de Bolivia como nación.³⁰

30 - En declaraciones al diario "LA TERCERA" de Santiago de Chile, el Gral. García Meza dijo: "Soy como el Gral. Pinochet", y que se identifica con sus postulados. Sostuvo que era partidario de la reanudación de las relaciones diplomáticas "sin condiciones" con Chile, olvidándose del viejo anhelo boliviano por recuperar la salida soberana al mar. Después de varios días, la Cancillería pretendió desmentir estas declaraciones indicando que habían sido mal interpretadas.

Los países del Grupo Andino, gobernados todos ellos por regímenes surgidos de consultas electorales, asumieron una actitud de condena al golpe y de defensa del proceso democrático de Bolivia. De hecho, cualquier golpe de Estado triunfante en un país latinoamericano crea una amenaza potencial para los gobiernos surgidos de elecciones. Para los signatarios del Pacto Andino es una necesidad de que los países participantes alcancen el mayor grado de institucionalidad, a fin de que los compromisos que se asumen formen parte del orden jurídico de cada país; es necesario que los compromisos internacionales reflejen la voluntad de los pueblos y sean refrendados por el Parlamento. Además, es de tener en cuenta que, a través de los gobiernos y partidos actuantes en los países andinos, se manifiestan corrientes internacionales como la socialdemocracia, la democracia cristiana y otras que se oponen a las dictaduras fascistas. Este conjunto de factores, junto con otros que forman parte de la tradición histórica, constituye el fundamento de la actitud condenatoria de los países andinos frente al golpe de García Meza, que representó la quiebra de la institucionalidad en Bolivia.

Las relaciones internacionales de los golpistas también fueron afectadas por la participación de conspicuos dirigentes que aparecían en los registros de la Policía internacional como narcotraficantes empedernidos. Es de recalcar que las denuncias sobre la participación de los miembros del gabinete de García Meza en el tráfico

de cocaína, no se originaron dentro del país, ni se trató de denuncias políticas; fueron denuncias policíacas que se lucieron públicas cuando el gobierno de los Estados Unidos suspendió la ayuda para el control de drogas peligrosas, aduciendo que ya no tenía significado, puesto que los narcotraficantes estaban dominando al gobierno boliviano.

¿Para que podía servir una ayuda de este tipo? Así salió a luz el problema que poco a poco se fue convirtiendo en una pesadilla para todos los bolivianos, porque, de una forma u otra, el estigma que marca a un gobierno se extiende sobre lodo el país.³¹

El principal mercado de la droga está constituido por Estados Unidos, donde, según cifras estadísticas publicadas, entre 10 y 12 millones de habitantes son adictos a la misma. La droga está haciendo estragos en la juventud norteamericana. Otro mercado, aunque todavía reducido, está conformándose por las clases dominantes e incluso ciertos estratos de las capas medias en la América Latina, que se van incorporando al consumo de la droga. Es un mercado que crece, tanto por efectos de imitación del modo de vida norteamericano, como por acción de los narcotraficantes que luchan por ampliar sus mercados.

31 - A su regreso de un viaje a Miami, USA, el Gral. David Padilla Arancibia, ex-presidente de Bolivia y artífice de la apertura democrática de 1978, declaró que “el pueblo boliviano no es traficante de cocaína, sino algunos de sus gobernantes”. (EL MUNDO, Santa Cruz de la Sierra, edición del 18 de abril de 1981).

La cuestión de la droga no afecta los intereses vitales del imperialismo y de las clases dominantes de América Latina; pero los gobiernos no pueden ignorar que su acción perniciosa puede contribuir a afectar, en el largo plazo, la estabilidad del sistema. Por eso no pueden extender la mano abierta a un gobierno cuyos dirigentes son precisamente los que aportan para difundir la drogadicción. Un régimen de ese tipo es nocivo para el sistema, desde cualquier punto de vista que se observe; incluso el militar, porque debilita a las Fuerzas Armadas de su propio país. De esta forma, el gobierno de García Meza no encaja dentro de los esquemas de estrategia continental, ni menos aún en los de seguridad nacional. De ahí que para el imperialismo sea de urgencia la necesidad de su reemplazo por otro más acorde a sus intereses. Cuanto más larga resulte la permanencia de García Meza en el gobierno boliviano, mayores serán las repercusiones negativas del mismo.

Éstas son las principales razones del aislamiento internacional del régimen. Surgió aislado y se mantiene aislado. Pero no se trata sólo del aislamiento internacional, también en lo interno sufre una acelerada descomposición que agrava su orfandad política y social; las fracciones de la burguesía están buscando un reacomodo, pues ya obtuvieron de este régimen todo lo que podía proporcionarles. Sin embargo, nada es absoluto en la historia; todo cambia. Si los intereses vitales del imperialismo pudieran resultar favorecidos, segura-

mente se dejarían de lado los principios morales, los derechos humanos y otras “tonterías intelectuales”.³² Los traficantes podrían alcanzar, incluso, la categoría de héroes en la defensa del sistema.

32 - Estas palabras celebres corresponden a Jane Kirkpatrick, embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas. (1981 Cox News Service).

TIPIFICACIÓN DEL GOLPE

I

CARÁCTER FASCISTA

A esta altura del análisis ya se tiene una idea precisa sobre la complejidad del proceso político boliviano y de las sinuosidades históricas que representa el golpe del 17 de julio. Hay en él, elementos de anormalidad que parecerían contradecir el curso lógico de los acontecimientos previsibles en un país capitalista atrasado, cuya burguesía tiene sus intereses, mediatos e inmediatos, extremadamente dependientes del imperialismo. Pero la historia de la sociedad humana, bajo cualquier tipo de formación social, no sigue una línea recta. Tampoco el condicionamiento externo puede ser absoluto, pues cada sociedad, hasta en el caso de las más atrasadas y minúsculas, tiene un cierto grado de autonomía resultante de su propio desenvolvimiento. Para la comprensión de los fenómenos históricos de Bolivia es necesario tener en cuenta estas premisas y, sobre todo, se debe comprender que el desarrollo del capitalismo es anárquico y contradictorio. Aunque finalmente se imponen las tendencias generales del sistema, en el corto plazo pueden darse desviaciones de todo tipo.

Desde determinado punto de vista puede sostenerse que el régimen de García Meza corresponde a la tendencia general que se observa hacia la fascistización

de los gobiernos latinoamericanos, o si se quiere; hacia la negación creciente de la democracia burguesa. El uso de la represión, en sus múltiples formas, es cada vez mayor, hasta el punto de que muchos gobiernos no pueden subsistir sin ella. En general, el Estado burgués es un Estado represivo. Pero, también es el organizador del consentimiento. Es decir cumple funciones represivas y de mediación ideológica. Sin embargo, ocurre que debido a la creciente inestabilidad del sistema capitalista, predomina cada vez más la función represiva hasta adquirir formas muy especiales, distintas del tradicional uso de la violencia estatal en América Latina. Estas formas hicieron su aparición en países de Europa y Asia, en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, y que por sus características específicas recibieron la denominación de fascismo. Desde mediados de la década de los 60, muchos países latinoamericanos sufren un resurgimiento del fascismo.

El ascenso del fascismo es resultado de la profunda crisis del capitalismo tardío, que afecta principalmente a las condiciones de la producción y realización de la plusvalía. Cuando pelagra la estabilidad del sistema capitalista, la burguesía tiene necesidad de establecer una forma de centralización más alta del poder del Estado, aunque esto le signifique renunciar al ejercicio inmediato del poder político. El fascismo surge como una tendencia en contra de la democracia parlamentaria, del movimiento obrero organizado y del marxismo.

De esta manera, el fascismo es una de las formas que asume la contrarrevolución para detener, el avance revolucionario frenar el ascenso de masas y suprimir la democracia política.

Hasta ahora, el surgimiento y triunfo del fascismo se dieron en las condiciones históricas referidas al rezago con que surgieron determinados países en el contexto del desarrollo imperialista del capitalismo; es decir, en aquellos países, que aparecieron tardíamente el concierto del capitalismo. En esos países, el fascismo sólo pudo triunfar cuando las organizaciones políticas representativas de la clase obrera y del movimiento popular en general, fueron reducidas a la impotencia, y, paralelamente, se realizó la ofensiva económica, social y política de los sectores más agresivos de la burguesía. Sin embargo, la transformación del Estado burgués democrático en Estado fascista puede darse en cualquier país en que la estructura social capitalista esté amenazada, y no solamente en los de desarrollo tardío.

El fascismo es una dictadura reaccionaria y terrorista al servicio del capital. Lo tipifica su acción para aplastar el movimiento obrero, y para liquidar cualquier perspectiva de cambio del sistema. En esencia, los regímenes fascistas son represivos de la mano de obra; es decir se orientan al aplastamiento violento de la clase obrera con el objeto de hacerla presa fácil para la expoliación capitalista. De esta forma, el conjunto del

aparato del Estado es colocado al servicio de los burgueses para el sojuzgamiento y la explotación de los trabajadores. Pero el surgimiento de estos regímenes exige un cuadro de intensa agudización de la lucha de clases, que adquiere un carácter cada vez más político y se traduce en un relativo equilibrio de las fuerzas que se enfrentan. En esas condiciones, para agotar, desmoralizar y desmovilizar a los sectores más conscientes del proletariado, usan el terror sistemático de masas y la lucha callejera.

La base política principal de los regímenes fascistas proviene de las capas medias y de ciertos sectores de la clase obrera, de los campesinos y del lumpen. En el caso de los países europeos, los mayores contingentes fueron reclutados en los sectores sociales más afectados por la crisis, especialmente en las capas medias depauperizadas. De ahí que muchos estudiosos de este fenómeno destacan el carácter de “movimiento de las clases medias” o de “movimientos pequeños burgueses típicos”, para dar relieve a la participación de los grupos de las capas medias en estos regímenes que, sin embargo, están al servicio entero de la burguesía.

Los fascistas exaltan el nacionalismo, llegando a posiciones extremas de chauvinismo. En el caso alemán se particularizó el odio racial a las llamadas “razas inferiores”, a la par que presumían de una imaginaria superioridad genética de los teutones. Pero el racismo

no es un rasgo común de todos los regímenes fascistas, aunque es un elemento que no está del todo ausente en la mentalidad fascista. En América Latina, caracterizada por el mestizaje, este elemento no podía aparecer en primera línea; sin embargo, pudo percibirse en las actitudes del fascismo chileno y argentino, disfrazado principalmente en la xenofobia. Incluso en Bolivia los fascistas más recalcitrantes hablan de una pretendida superioridad blanca frente a los aymaras, quechuas, guaraníes y mestizos; llegando al absurdo de proponer la inmigración de racistas rodhesianos y de África del Sur para colonizar las zonas menos pobladas del norte y el oriente.³³

Una diferencia importante entre el fascismo europeo y el neofascismo latinoamericano consiste en la ausencia del partido fascista y la carencia de un movimiento de masas favorable a ese tipo de régimen. Lo que ocurre es que los partidos fascistas latinoamericanos que surgieron antes de la Segunda Guerra Mundial, como engendro de los partidos europeos, tuvieron que metamorfosearse después de la derrota de las potencias del Eje. Surgieron como fenómenos extemporáneos y pronto se convirtieron en vías muertas, lo que obligó a sus dirigentes a contemporizar con la nueva situación,

33 Durante el gobierno del Gral. Banzer, el Ministerio del Interior, por medio del Subsecretario de Migración, Guido Strauss (de ascendencia alemana), inició gestiones para promover una corriente migratoria de blancos procedentes de Rhodesia.

ingresando todos ellos en un irreversible proceso de frustración y descomposición. Cuando advinieron los regímenes fascistas, tales partidos eran sólo escombros acumulados en el basurero de la historia. Por ello, las Fuerzas Armadas tuvieron que asumir el rol de partido, subordinando a los políticos y llenando el vacío creado por la ausencia del movimiento de masas favorables. El resto fue cubierto por paramilitares.

La negación progresiva de la democracia significa que el Estado burgués es cada vez menos organizador del consenso y cada vez más represivo. Y tiene que ser así, debido a que el capitalismo de los países dependientes es cada vez menos apto para dar solución a los problemas resultantes de una población creciente, con aspiraciones de vida más amplias y con mayor conciencia de sus propios derechos. La incapacidad del sistema se refleja en que no puede permitir un desarrollo de las fuerzas productivas al mismo ritmo en que crecen las necesidades individuales es decir, se refiere a la extrema debilidad del proceso de acumulación capitalista que no permite acrecentar el potencial productivo en las dimensiones requeridas. El rezago de la capacidad de producción con respecto a las necesidades consumo (alimentos, vestidos, vivienda, servicios públicos, etc.) da lugar a cuantiosos déficit, que al no poder ser satisfechos, tienen que ser reprimidos. Como los déficit encuentran expresión política en las luchas populares, su represión no puede quedar a cargo de las empresas,

sino del Estado (cuya naturaleza misma es represiva ya que su función consiste en asegurar la supervivencia de una sociedad dividida en dominantes y dominados, en explotadores y explotados).

La función represiva del Estado fascista no consiste solamente en el empleo de la fuerza bruta. Consiste en la estructuración de todo un sistema represivo que abarca al conjunto de la sociedad, y a todas las manifestaciones de la vida social. La represión persigue objetivos concretos. No se la usa como simple respuesta a las mayores demandas populares, sino con una intencionalidad que es el elemento distintivo con respecto a los viejos esquemas que se aplicaron en América Latina. La represión es utilizada para favorecer el proceso de acumulación de capital, además de asegurar la supervivencia y reproducción del sistema. Así la represión es un instrumento de la política económica del Estado fascista. Es cierto que no siempre las clases dominantes responden efectivamente al propósito de acelerar la acumulación de capital, pero esto no niega el propósito con que se la usa. En Bolivia, por ejemplo, el régimen de Bánzer no logró acrecentar el proceso de acumulación capitalista porque la burguesía fue incapaz de transformar en inversión productiva los enormes recursos que llegaban a sus manos.

Es perfectamente lícito hablar de una acumulación primaria de tipo fascista, que se realiza fundamental-

mente por medios políticos. En el caso de los países latinoamericanos dicha acumulación se realiza a costa de los sectores precapitalistas, de la economía estatal y de la economía popular. El amplio desarrollo del Sector Público, como resultado de un largo proceso histórico, hace que éste controle un alto porcentaje de las actividades económicas, en las que se forma un excedente que luego es transferido por diversos mecanismos a la empresa privada. De igual forma la deuda pública externa es un canal para la traslación de recursos a la empresa privada, ya que el Estado es un simple intermediario entre los prestamistas extranjeros y las empresas privadas que tienen a su cargo la ejecución de obras, pero el lisiado es el que tiene que amortizar luego esos préstamos. También la inflación es una forma para canalizar recursos a la empresa privada, pues la expansión de los medios de pago se efectúa, principalmente, a través de la creación de crédito que beneficia al sector privado, y del financiamiento del déficit fiscal que, en gran parte, es ocasionado por las funciones que desempeña el Estado en favor de las empresas privadas.

Pero, podría refutarse este argumento señalando que dicho papel es normal en todo Estado capitalista y, por tanto, no tendría que llamarse necesariamente fascistas a los que son más celosos o eficientes en este desempeño. Al respecto, corresponde destacar que las características fascistas no se refieren sólo al rol del Estado en la acumulación primaria, ni a cualquier aspecto parti-

cularmente considerado, sino al conjunto de elementos que determinan la esencia y la acción del Estado. De igual manera, el simple uso de la represión, aún de la más brutal, no es suficiente para calificar a un régimen como fascista.

A partir del conjunto de elementos que lo caracterizan, el régimen de García Meza debe ser tipificado como fascista; es decir como un régimen que se inscribe dentro de la tendencia general de fascistización en la América Latina. Su ascenso al poder está signado por esta tendencia. Forma parte de los gobiernos de “Reconstrucción Nacional” que surgieron en el Cono Sur para aplastar el movimiento popular y colocar al Estado en servicio exclusivo del capital. No es casual que utilice la misma denominación de Pinochet y Videla, quienes llamaron a sus gobiernos “de reconstrucción nacional”. Sin embargo, en el caso boliviano no fueron los gobiernos democráticos los que desencadenaron la crisis, sino que ella fue resultado de los siete años de gobierno fascista del Gral. Bánzer.

Pese a ello, el régimen de García Meza pretendió convertirse en una segunda parte o en una reedición del régimen fascista del Gral. Bánzer.³⁴ Para lo cual tomó

34 - En declaraciones a la prensa, en rueda especialmente convocada, el día 23 de abril de 1981, el Gral. García Meza dijo: “creo que este gobierno es la continuidad del gobierno. nacionalista del Gral. Bánzer, en cuanto se refiere a su política”. (EL DIA Internacional, edición del viernes 24 de abril). Pero al día siguiente manifestó en Santa Cruz, que su gobierno “no era más que un puente entre dos generaciones”. Nadie dudo entender lo que quiso decir.

prestada su “filosofía”, su base social y su fraseología. Incluso llevó al máximo la represión policíaca, con la ley marcial, el toque de queda y el control absoluto de los medios de difusión. Pero no logró concretarse en un régimen fascista que reuniera los elementos que tipificaron al banzerismo en función de gobierno. En realidad podría calificársele como un intento fascista en vías de frustración, a partir de la forma como va degenerando en una dictadura corriente, aunque más brutal y cavernaria. Hasta el calificativo de fascista le va resultando demasiado grande, pues es visible su degradación progresiva.³⁵

La frustración del intento de García Meza para constituir un régimen fascista que fuera un remedo del que estuvo en vigencia entre 1971 y 1978, plantea una serie de interrogantes que se relacionan con la dinámica misma del sistema capitalista en Bolivia para reproducir un régimen como el de Banzer, hubiese tenido que ser capaz de unificar a las diferentes fracciones burguesas a base de un esquema que ofreciera ventajas al conjunto y a cada una de ellas; además tenía que ofrecer garantías de estabilidad para un cierto período que les permita estructurar nuevos esquemas que amplíen sus horizontes

(EL DIA Internacional , edición del domingo 26 de abril).

35 - Hasta la Confederación de Choferes, que contribuyó al ascenso de García Meza y que en la actualidad es el único sindicato reconocido oficialmente, declara: “Con gran desaliento vemos que el Gobierno está pasando vertiginosamente de un periodo de consolidación a otro de descomposición”. (EL DIA Internacional, edición del 24 de abril de 1981).

de supervivencia. Dadas las condiciones coyunturales, apenas puede ofrecer a medias las ventajas inmediatas, pero carece de toda perspectiva para mostrar estabilidad. Más aun, en términos de los intereses fundamentales de la burguesía, el régimen resulta negativo porque socaba una de las bases fundamentales del sistema, al agravar la crisis de las Fuerzas Armadas.

Empero, no son sólo factores coyunturales los responsables de la frustración de este segundo intento fascista. Hay razones de mayor peso, que se vinculan con las características esenciales del capitalismo en Bolivia. La inviabilidad para construir a plenitud una formación social capitalista, es la causa final de la frustración, ya declarada, de la democracia burguesa y de la frustración, previsible del fascismo. En este sentido, no es sólo el Gral. García Meza el que ve estrellarse sus intentos contra un muro, sino que esto le ocurrirá a cualquiera que se aventure a recorrer, el mismo camino. Claro que entre todos los regímenes del Gral. García Meza parece reunir los mayores atributos para el fracaso estrepitoso. Pero antes de ir más lejos en este campo, veamos otros aspectos para la tipificación del golpe.

II

REPRESIÓN DE LA CLASE OBRERA

La verdadera amenaza para la estabilidad a largo plazo del capitalismo radica en el avance y fortalecimiento

del movimiento obrero. La clase obrera es la única que tiene un proyecto histórico capaz de reemplazar con éxito la forma de organización capitalista. Más aún, a la clase obrera le corresponde la enorme misión de transformar, la sociedad y establecer un nuevo orden que elimine para siempre la división en clases y la explotación del hombre por el hombre. Por eso, el ascenso del movimiento obrero, tanto en lo organizativo como en lo ideológico, amenaza vitalmente los intereses de la burguesía, ya que el triunfo de aquél significará la liquidación histórica de esta última y la desaparición de todas las instituciones creadas por ella, especialmente de su Estado. Al mismo tiempo la clase obrera es capaz de establecer un nuevo ordenamiento social que signifique un formidable avance con respecto a todas las formaciones sociales conocidas hasta ahora. La clase obrera es la históricamente llamada a sepultar el régimen burgués.

Esta premisa de carácter general, válida para el desarrollo de la sociedad humana en su conjunto, ha comenzado hace 20 años a tener vigencia real en América Latina. Entre los países de la América del Sur, Bolivia es quizá el que muestra las condiciones internas más maduras para la gran transformación social. La clase obrera boliviana ha trascendido hace mucho tiempo la condición de clase en sí, para transformarse en clase para sí; es decir, ha llegado a un alto nivel de conciencia de clase que le permite identificar plenamente sus intereses fun-

damentales y al mismo tiempo, tienen un claro concepto de su responsabilidad histórica con respecto al conjunto de la sociedad boliviana. La experiencia de largas décadas de lucha le ha permitido aquilatar de manera precisa la importancia de su papel y sus acciones en el desenvolvimiento económico, político y social del país. Tiene conciencia de que es la columna vertebral en el movimiento popular boliviano, y ha logrado que todas las clases y capas reconozcan esa realidad. De esta forma, el movimiento obrero boliviano aglutina y lideriza a las demás clases populares, y es la pieza fundamental en el enfrentamiento a la burguesía y al imperialismo. En este sentido, a partir de las tareas democráticas inconclusas, la clase obrera es el baluarte de la nación contra la dominación extranjera (habida cuenta de que las clases dominantes son claramente antinacionales).

En su largo y duro accionar, la clase obrera boliviana ha logrado vencer paulatinamente el cerco impuesto por la burguesía y el imperialismo estableciendo nexos cada vez más sólidos y trascendentes con los campesinos, intelectuales y sectores más amplios de las capas medias. Ha logrado atraer a su lado a segmentos muy importantes de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante instituciones tradicionalmente caracterizadas como sostén de las clases dominantes. Con prudencia, pero con firmeza, va consolidando su liderazgo social que ya es reconocido por propios y extraños. Así, la clase obrera boliviana está en capacidad de disputarle

el poder a la burguesía, arrebatárselo, transformar la sociedad y abrir nuevos caminos para el desarrollo económico, social, político y cultural del pueblo boliviano, con una pujanza hasta ahora no conocida y dentro de un marco de dignidad y respeto por la persona humana. Si la situación boliviana dependería exclusivamente de su dinámica interna, hace tiempo que la burguesía y su régimen habrían sido sepultados. Las cosas ya estarían resueltas si el poder burgués se asentara sólo en los bastiones internos.

Por el nivel de generalidad con que se escriben estos párrafos pueden aparecer muy mecánicos o muy optimistas. Pero los que conocen la historia de las luchas sociales y están al tanto de las características actuales de la formación social boliviana, observan a través de ellas el cuadro de de la realidad. Más aún, la burguesía y el imperialismo observan de esta manera la evolución del proceso boliviano y tienden a reforzar los condicionantes internacionales como única forma para mantener el equilibrio precario en que se desenvuelve el poder burgués. El reforzamiento militar al amparo de la doctrina de la seguridad nacional, es el reconocimiento más explícito de que el dominio imperialista y burgués sobre el pueblo boliviano sólo puede sostenerse a base de la utilización directa de las Fuerzas Armadas como instrumento de represión. Pero también en eso corren el riesgo de que los militares adquieran la claridad mental suficiente para identificar el verdadero papel que des-

empeñan como sostenedores de la dominación Imperial y de los privilegios de minorías antinacionales.

El avance de la clase obrera logró arrebatar incluso las banderas democráticas a la burguesía. Durante mucho tiempo las clases dominantes pudieron moverse por un camino recurrente entre los golpes de Estado y las elecciones a base del fraude electoral. En los momentos de tensión echaban mano al golpe de Estado, pero mientras su dominio aparecía relativamente asegurado daba curso a las farsas electorales. Empero, las elecciones de los años 1978, 1979 Y 1980 determinaron el cierre de las vías democráticas para la burguesía, pues ya no puede asegurar el triunfo de sus candidatos, aún recurriendo a millonarias campañas electorales y al fraude escandaloso. Las clases dominantes están conscientes de que ya no pueden “cometer descuidos” permitiendo la apertura de amplios espacios democráticos, pues son rápidamente cubiertos por el movimiento popular que tiende a rebasar los límites de seguridad, más allá de los cuales la supervivencia de aquellas está en riesgo.

Esta realidad es reconocida por los actuales gobernantes republicanos de los Estados Unidos, cuyos portavoces señalan que “el gobierno de EE.UU. debe prestar todo su apoyo a los regímenes autoritarios amigos, para evitar que se instauren regímenes totalitarios enemigos”; lo cual demuestra que ese país ya no puede actuar como el campeón de la democracia. En otros

tiempos los EE.UU. aparecían como el baluarte y los defensores de la democracia; enfrentaban al socialismo esgrimiendo las ventajas de la democracia; pero ahora tienen que dejar de lado esa máscara para actuar abiertamente como protectores de sus intereses. De esta forma, ya no defienden el derecho de los pueblos a ejercer la democracia; pero ahora tienen que olvidarse de ello para proteger a sus amigos; es decir, a sus intereses. Hay además otro concepto que los norteamericanos están abandonando explícitamente: es el concepto de libertad. La ya citada Jane Kirkpatrick, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, expresó que “Estados Unidos procura construir una política latinoamericana que proteja sus intereses y su seguridad, y hacer que las vidas de las personas que viven en América Latina sean un poco mejores y un poco más libres”.³⁶ Éste es el verdadero sentido del apoyo, a los “regímenes autoritarios amigos”.

Tales regímenes autoritarios no son otra cosa que los regímenes fascistas, que surgieron no sólo con la aprobación de los Estados Unidos, sino también con su promoción. La calificación como “regímenes autoritarios” es uno de los eufemismos que se usan en las reuniones internacionales y en organismos de carácter multilateral, donde no se puede calificar directamente, por lo que son, a los regímenes fascistas. Lo que no se aclara

36 - 1981 Cox News Service. EXCELSIOR, edición del domingo 22 de febrero de 1981.

es que son autoritarios frente a la clase obrera y el movimiento popular, y que a la par, son instrumentos de las minorías que tienen las manos libres para explotar la fuerza de trabajo y los recursos naturales. Es muy clara la función que los norteamericanos asignan a tales regímenes autoritarios para evitar que la clase obrera llegue al poder.

Efectivamente, como ya se dijo, la amenaza esencial para el capitalismo está en la clase obrera, la que, paradójicamente, es su producto. En el caso boliviano, el análisis sociológico permite comprobar que la única clase verdaderamente en condiciones para resolver los problemas estructurales que impiden el desarrollo de las fuerzas productivas, es la clase obrera. Ella es la única clase que reúne las condiciones de vigor y madurez necesarias y que ya está capacitada para el ejercicio del poder, dentro de un nuevo proyecto histórico. Por lo demás, hace varias décadas que se ha planteado la necesidad de derribar a la burguesía e instaurar el socialismo.

¿Cómo se explica que un país carente de una burguesía vigorosa haya podido desarrollar un proletariado capaz de tomar para sí no sólo las tareas democráticas y nacionales, sino también las de la transformación socialista? La explicación de este fenómeno exige remontarse hasta el surgimiento del capitalismo en Bolivia y su incorporación a la economía mundial. Ya se mencionó en este trabajo que el nivel más alto de desarrollo burgués

fue alcanzado sobre la base de la economía del estaño, con la Gran Minería capitaneada por Patiño; Hoschild y Aramayo; pero, dadas las exigencias, de la acumulación capitalista, esta fracción burguesa se extranjerizo, siguiendo los hilos de la industria mundial del estaño. Así, no pudo generalizar las relaciones capitalistas de producción al conjunto de la economía, no se interesó por el mercado interno y, por tanto, no culminó el proceso de formación y consolidación nacional. La Revolución Nacional, antiimperialistas y antifeudal, iniciada en abril de 1952, liquidó esa fracción de clase y eliminó a los terratenientes, pero no fue capaz de provocar al surgimiento de otra fracción burguesa, con carácter nacional, que pudiera llenar el vacío dejado por las viejas clases dominantes desplazadas del poder y aplastadas.

De esta forma se explica la existencia de un proletariado minero vigoroso, que fue el artífice del proceso revolucionario del 52. Es decir, el proletariado minero constituyó la principal fuerza impulsora de la revolución antiimperialista y antifeudal que dio lugar a la más profunda transformación que vivió el país durante el presente siglo y, no es exagerado, desde la fundación de la República, en 1825. Sobre el espinazo del proletariado minero se estructuró todo el movimiento popular boliviano que escribió una de las más hermosas páginas en la historia de la revolución latinoamericana. A su lado, y bajo su influjo, marcharon los campesinos, los trabajadores fabriles, petroleros, ferroviarios y de otros

gremios, los sectores, progresistas de las capas medias y los intelectuales de avanzada. Sin la presencia combativa del proletariado minero, no hubiera sido posible la Revolución Nacional. La clase obrera boliviana ya tuvo la prueba de fuego de una revolución y logró derribar un poder constituido, pasando por encima de sus aparatos armados.

La frustración del proceso revolucionario del 52 significó una severa lección para el proletariado boliviano. Los primeros en identificar las claudicaciones de la dirigencia pequeño-burguesa del MNR fueron los trabajadores mineros en los centros más politizados de Catavi y Siglo XX. La clase obrera supo identificar con claridad las vacilaciones y limitaciones pequeño-burguesas y detectó la influencia imperialista que, entre bambalinas, entorpecía y deformaba el proceso revolucionario, frustrando el cumplimiento del programa nacional-liberador. Un capítulo por escribir en la historia de la Revolución Nacional se refiere al papel del imperialismo en la claudicación y entrega de un proceso revolucionario que pudo crear las bases para el desarrollo nacional pleno y vigoroso. Tal fenómeno no puede explicarse únicamente a partir de las limitaciones pequeño-burguesas de los que asumieron la dirección del proceso; pues, la consolidación y desarrollo de la nación hubiese abierto posibilidades inmensas para una pequeña burguesía que había logrado liberarse de los trabas limitantes impuestas por la oligarquía minera.

Encumbrada en el poder sin amenazas inmediatas de ser sobrepasada por el movimiento obrero, y sin el riesgo de su desplazamiento por las fracciones burguesas, la pequeña burguesía tenía un ancho camino por delante. La mano del imperialismo estuvo presente desde que las masas movimientistas fueron obligadas a gritar Viva el compañero Holland. (5)

El aprendizaje de la clase obrera ha sido largo, pero después de estos treinta años ya tiene su rol indiscutido en la conducción del proceso revolucionario de Bolivia. Las masas trabajadoras están conscientes de que la solución de sus problemas no podrá ser lograda dentro del capitalismo por eso, desde hace bastante tiempo se plantean como objetivo estratégico, la transformación socialista a intuición de las masas trabajadoras para superar el estado burgués no es de hoy. Saben que la solución de sus problemas no vendrá de fuera, que será fruto de su propio esfuerzo de su lucha por conquistarla. La enorme capacidad intuitiva de las masas trabajadoras surge de las duras condiciones de vida y de las largas y costosas luchas que tienen que llevar adelante para enfrentarse a la opresión burguesa. Saben que deben confiar en sus propias fuerzas. Por eso la clase obrera muestra una desconfianza natural frente a los grupos medios radicalizados que quieren pasar de pronto a formas superiores de lucha sin tener en cuenta las condiciones de la realidad concreta. Esto no niega que la clase obrera necesita ganar aliados, pero no ne-

cesita dirigentes venidos de fuera. Los revolucionarios que no surgieron de su seno, sólo llegaron a tales poniéndose al servicio de la clase obrera y consubstanciándose plenamente con sus intereses y objetivos; es decir, proletarizándose. La proletarización no se da de un día para otro, es un compromiso y un proceso de toda la vida.

El instinto de la masa obedece a su alto sentido práctico de la vida; no está afectado por el subjetivismo que hace presa fácil de los pequeños-burgueses. El instinto de las masas bolivianas es producto de su larga participación en el movimiento social boliviano, de sus avances y retrocesos, de sus victorias y derrotas; en resumen; del largo camino que recorrieron desde las primeras rebeliones indígenas contra los españoles hasta nuestros días en que se aprestan para el enfrentamiento final con la burguesía y el imperialismo. El instinto les permite identificar al enemigo y detectar los peligros. Las masas no son jamás aventureras,

El papel de vanguardia de la clase obrera dentro del movimiento popular boliviano es un hecho histórico reconocido por todas las demás fuerzas que participan en él. Es un lugar común que ya nadie discute. Por este hecho está bajo la observación no sólo de sus amigos, sino también, está en la mira de sus enemigos. Por eso los golpes del fascismo se dirigen a descalabrar el movimiento obrero, destruir sus organizaciones, aplastar a

sus dirigentes y aislarlo del resto del movimiento popular. El odio del fascismo se concreta contra el sepulturero del capitalismo.

El golpe del 17 de julio no fue tanto contra el gobierno de la Sra. Gueiler y el futuro gobierno de la UDP, sino contra el Movimiento Popular, y específicamente, contra la clase obrera. Por su origen y naturaleza, el gobierno de la UDP hubiese tenido que permitir y promover el fortalecimiento del Movimiento Popular, lo que significaba un mayor avance político y organizativo de la clase obrera, cuyo papel de vanguardia hubiese significado una mayor consolidación de los vínculos con los campesinos, artesanos, capas medias e intelectuales revolucionarios. Una mayor toma de conciencia por todos los sectores explotados y oprimidos por el orden burgués, hubiese agrandado la amenaza que está quitando sueño a las clases dominantes. De ahí que se apresuraran a cortar ese sendero tan peligroso.

Esto no significa que el país hubiese estado, en julio de 1980, en una situación revolucionaria; es decir, en una situación en que el Movimiento Popular tenga en sus manos los elementos mínimos para llevar a cabo el asalto al poder. Aunque es imposible establecer un arquetipo de situación revolucionaria, para todos los países y para todos los momentos históricos, hay ciertas condiciones mínimas sin las cuales el triunfo revolucionario no es posible. La posibilidad del triunfo no sólo

depende del avance del Movimiento Popular, sino del resquebrajamiento del poder burgués. El sostén final del poder burgués consiste en su aparato armado, cuya fractura es indispensable para el triunfo revolucionario.

De otra parte el movimiento popular se encontraba en un proceso de rápida reestructuración después de los largos siete años del régimen fascista, que hizo todo lo posible por desarticularlo y destruirlo. La acumulación de fuerzas se daba a ritmo acelerado, la suma de los aliados crecía con rapidez, y ascendía el nivel de conciencia de sectores cada vez más amplios de la clase obrera. Pero los planteamientos, concretos no sobrepasaban todavía el plano de las reivindicaciones económicas, pues era necesario recuperar el terreno perdido por el ingreso real de los trabajadores como consecuencia de siete años de depresión salarial e inflación. La clase obrera no llegó a plantearse como tarea específica, fundamental e inmediata el rebasamiento del Estado burgués, aunque ése es su objetivo estratégico.

Por lo demás la coyuntura internacional era mucho menos propicia que a principios de la década de los 70, por no decir francamente desfavorable.

La presencia de regímenes fascistas en los países del Cono Sur significa un ariete dispuesto a asfixiar cualquier intento progresista en Bolivia, país que soporta como una maldición adicional la falta de una salida

propia y soberana al mar. La ofensiva fascista estaba en su apogeo en los países cuyo desenvolvimiento repercute intensamente en Bolivia. El único país limítrofe en camino hacia la democracia era el Perú; lo hacía dentro de un marco de inestabilidad, y el triunfo electoral apuntó finalmente a favor de las fuerzas reaccionarias. A su vez, era previsible que la campaña del gobierno de los Estados Unidos en pro de los derechos humanos sólo podría mantenerse mientras sus intereses fundamentales no estén en riesgo. Frente a este cuadro, el movimiento obrero tenía un sentido exacto de la fragilidad de la coyuntura y actuó en correspondencia, pues sabe que su lucha no es aislada, que forma parte de la lucha de la clase obrera latinoamericana y mundial.

A partir de todos estos antecedentes se califica al Golpe del 17 de julio de 1980 como un golpe preventivo destinado a frenar el movimiento obrero y a permitir el reaglutinamiento burgués. Es un golpe preventivo con todos los ingredientes de anormalidad introducidos por la mezcla de fascismo y narcotráfico. La bandera del anticomunismo la enarbolan todos los regímenes antiobreros, y en particular, los fascistas. Para lograr el cambio de actitud del gobierno norteamericano del Presidente Carter, el Gral. García Meza apareció como el más grande campeón del anticomunismo en Bolivia.

Las acciones centrales del golpe se concentraron en la

toma de la Central Obrera Boliviana. Ésta fue una lección aprendida en noviembre de 1979, a partir de la cual se dieron cuenta de que los mayores obstáculos para el triunfo gopista estaba representado por la COB. De esta forma se propusieron descabezar el movimiento obrero para desarticular la resistencia y facilitar la ofensiva contra el pueblo boliviano. Las acciones de guerra más importantes se llevaron a cabo contra el proletariado minero. La mina Caracoles fue escenario del más furioso ataque militar que utilizó fuerzas de tierra y aire para doblegar la resistencia popular. La historia de Bolivia recogerá el sacrificio de los mineros de Caracoles, inscribiéndolo para siempre como uno de los paradigmas del valor de la clase obrera.

La represión de la clase obrera por sí sola no tipifica a un régimen fascista. Al respecto experiencia boliviana ha sido pródiga en masacres obreras, pues la burguesía no dubitó jamás en emplear al Ejército contra los obreros hasta el punto de que las matanzas de trabajadores campesinos, fabriles y mineros aparecen en la historia como ejercicios rutinarios en el “manejo” de las armas. En el fascismo, la represión de la clase obrera está inserta dentro de un esquema que va más allá de la utilización simple y llana de los aparatos de fuerza; es parte de un conjunto de medidas que persiguen objetivos concretos al servicio del capital.

III CONTENIDO ECONÓMICO

Es en el análisis económico de la política del régimen donde aparece lo sustantivo de sus acciones a favor de las diferentes fracciones burguesas y al mismo tiempo es allí donde puede verse lo principal de su frustración. Pero este análisis tiene que trascender necesariamente el plano de las manifestaciones verbales o de los enunciados generales de política, para poner en evidencia las diferentes contradicciones y discrepancias entre las palabras y los hechos. Aquí debe levantarse el manto de las apariencias para descubrir lo que está detrás de él, o sea para comprobar su naturaleza, su esencia. Como se sabe en el estudio de toda política económica es necesario distinguir los objetivos explícitos y los objetivos implícitos; es decir, las intenciones que se expresan públicamente y las que se ocultan o se mantienen en reserva. Los primeros se extraen en los discursos, declaraciones públicas y documentos escritos; las segundas se infieren de los hechos, se deducen de la práctica o de los resultados de las acciones. (En los regímenes burgueses es común que unas sean las cosas que se digan y otras diferentes las que se hagan)

Ésta es una tarea difícil porque los militares que hoy están en función de gobierno no se caracterizan precisamente por el rigor, la seriedad y la sobriedad que constituyen virtudes mínimas de los hombres de Es-

tado. Hay de hecho, deficiencias iniciales que surgen de la propia formación profesional, pues ellos se capacitan para manejar las armas y definir estrategias militares, pero no para diseñar políticas macroeconómicas. No se formaron como políticos, pero tienen que actuar como políticos; ignoran lo que es la política económica pero tienen que dirigirla. En estas circunstancias están a merced de los “asesores” y redactores de discursos quienes no siempre comparten criterios comunes ni tienen una misma interpretación sobre lo que la realidad es y lo que debería ser. Así se explica que hoy pongan en labios de los gobernantes proposiciones que apuntan en un sentido, pero que, al rato, pueden ser negadas por otras que se orientan en sentido opuesto. Las cosas se complican más cuando los gobernantes tienen que abandonar el discurso escrito y recurren al arsenal de sus propias ideas.

Las dificultades para desentrañar el “programa económico”, a partir de los discursos escritos y manifestaciones improvisadas, son mayores porque en los mismos apenas se encuentra referencias generales y lugares comunes que pueden decir todo o no decir nada. Es evidente que, en América Latina, estos gobiernos no tienen necesidad de surgir con un programa económico propio, pues toman el de la burguesía y lo convierten en el marco de referencia para la aprobación de sus medidas. Pero, incluso hablar de un “programa económico” de la burguesía boliviana resulta una pretensión que

está lejos de la realidad, pues constituye una verdad reconocida la ausencia de un proyecto nacional diseñado de acuerdo a los intereses trascendentes de la burguesía. Una clase que sólo está preocupada por su supervivencia a corto plazo, no puede formular lineamientos de envergadura que abarquen el amplio horizonte del futuro nacional. La burguesía boliviana tiene que vivir cada instante como si fuera el último, y dentro de ese que hacer, la formulación de programas a largo plazo es sólo una tarea distraccionista.

Es también cierto que los regímenes fascistas y las burguesías nativas de los países dependientes, no tienen que preocuparse vitalmente por el largo plazo, puesto que a esta altura del desarrollo de la humanidad hay quien se preocupa por la supervivencia del capitalismo en su conjunto, tanto de los centros como de la periferia. Hay un vigilante universal, un gendarme, que tiene a su cargo no sólo la custodia inmediata del sistema sino también su perpetuación. De esta forma, el centro imperial tiene la función de velar y proteger tanto su propia reproducción como la de las áreas dependientes. El imperialismo diseña las estrategias a largo plazo para asegurar su continuidad y la de sus dominios. En este sentido los regímenes fascistas pueden resolver el problema de la ausencia de proyectos nacionales estructurados por las burguesías nativas, echando mano a esquemas formulados en los centros imperiales. Pueden recurrir, por ejemplo, a los esquemas del Fondo

Monetario Internacional o del Banco Mundial, o a los esquemas de Friedman y la Escuela de Chicago, que están de gran moda entre los regímenes fascistas. Pero aún en esto, el régimen de García Meza tuvo que chocar con obstáculos insalvables.

La burguesía boliviana es inmediatista y está condenada a serlo de por vida. Es ventajista, en el sentido de que está sólo preocupada por lograr la prebenda inmediata, aunque ese logro agrave la situación del sistema en su conjunto. Cada fracción burguesa actúa dentro del estrecho marco de sus intereses de hoy, y se preocupa por dar un zarpazo antes de que otra fracción se le adelante. En un país pobre, la angurria hace presa de las clases dominantes y cada una trata de roer los tuétanos del magro excedente generado por la clase trabajadora.³⁷ Cada una actúa bajo el lema: “después de mí, aunque sea el diluvio”. Así se comprende que su estrategia no sea otra cosa que una “estrategia de asalto”.

Con estos antecedentes, no puede resultar extraño que un régimen fascista se instaure no sólo sin un programa económico sino también demostrando incompatibilidades profundas en sus planteamientos. Está sujeto a la influencia de las contradicciones interburguesas resulta condicionado por el imperialismo, sufre las limitaciones de la institución armada, y está también afectado

37 - La calificación que le da Carlos Toranzo Roca, como “burguesía ratonil expresa de manera objetiva y certera la característica “roedora” de las fracciones burguesas en Bolivia.

por grupos pequeñoburgueses con aspiraciones políticas. De ahí que los enunciados generales carezcan de significado concreto.

Por ejemplo, en su discurso de toma de posesión como Presidente, García Meza señaló que la reconstrucción nacional no sustenta un antiimperialismo ideológico, porque será resultante del ejercicio de la libre determinación y de una lucha contra toda influencia imperial, puesto que nuestro antiimperialismo es militante y efectivo. En ese mismo discurso señaló que habrá un proceso de subordinación de los intereses particulares o de grupo al supremo interés nacional, haciendo abstracción de los privilegios para que el derecho al goce de los beneficios se adecúe al aporte o esfuerzo realizado por cada uno, con la mayor cuota de sacrificio de quienes detentan una mayor responsabilidad social. No se discute aquí las incongruencias internas o confusiones mentales que se manifiestan en los párrafos anteriores, sólo se pretende destacar que esas palabras fueron puestas en boca de quien ascendía al poder tras un golpe de Estado realizado bajo la bandera del anti-comunismo, masacrando obreros, asesinando dirigentes populares, aterrorizando a la población y conculcando la soberanía popular.

Muchos sostendrán que al citar los discursos de García Meza se disminuye el rigor de este trabajo, y otros dirán que es un verdadero abuso intelectual el que se

comete al citarlos. Pero no hay otra forma para destacar los aspectos salientes de los enunciados políticos y económicos de este golpe de Estado, si no es a partir de lo que manifestó públicamente su máximo portavoz; no hay otras fuentes de donde se pueda extraer los materiales para el análisis.

En su discurso del 22 de julio de 1980, el Gral. García Meza destacó que la acción revolucionaria de su gobierno “emerge de la tradición doctrinaria del socialismo militar, se entronca con la ‘doctrina nacionalista y antioligárquica y con la Revolución Nacional; es decir, arranca del pensamiento y la práctica nacionalista, democrática, antiimperialista y profundamente popular”. Sostuvo que la forma de combatir la dependencia emerge de la claridad con que se descubra la contradicción principal que en el caso de nuestro país radica entre los poderes imperiales y la nación atrasada y dependiente. Señaló también que el gobierno de Reconstrucción Nacional no podría tener ejecutoria política y social coherente, si es que no se abren todos los mecanismos de participación popular en el poder. Enfatizó que “debe concretarse la cogestión obrera en las principales empresas del Estado, por el conducto de un gradualismo revolucionario que responda a esta función y a esta responsabilidad en hechos nacionales y tangibles”. Finalmente destacó que la primera y más amplia prioridad, junto con el saneamiento de las empresas del estado radica en la revolución agraria. Este

discurso fue pronunciado en la noche del 22 de julio, poco después de iniciada la hora del toque de queda, mientras las patrullas militares disparaban al aire para amedrentar a la ciudadanía, en la hora en que los paramilitares allanaban domicilios y seguramente, en los momentos en que se daban las voces de mando a las fuerzas militares, que avanzaban sobre la Mina Caracoles. Mientras el Gral. García Meza hablaba, estaban ocurriendo muchas cosas que contradecían totalmente ese discurso.

A los pocos días de ascenso del fascismo, la Minería Mediana obtuvo la rebaja de regalías mineras y la eliminación total del impuesto de exportación, lo que significó una merma cuantiosa en los ingresos del Estado aumentando el déficit fiscal y la necesidad de financiarlo con emisiones inorgánicas. Se abrieron las válvulas del crédito bancario para las empresas privadas; se redujeron los aranceles para la importación de automóviles y la demanda pública por bienes y servicios se amplió para las empresas ligadas al régimen. La “burguesía” en su conjunto se benefició con la congelación forzosa de los salarios y no tuvo que pagar las compensaciones salariales que se venían negociando durante el gobierno de la Sra. Gueiler. También el Gobierno Argentino resultó beneficiado en la fijación del nuevo precio para el gas, pues éste se estableció muy por debajo del que exigía el gobierno anterior de Bolivia y por debajo de los precios que otros países cobran por el gas que ex-

portan. Finalmente las medidas de reajuste económico, aplicadas en enero de 1981, hacen recaer plenamente el peso de la crisis económica sobre los hombros de la clase obrera y el pueblo en general, mientras se amplían los negocios para las empresas privadas.

Pese a todo, es magro el servicio que este régimen puede ofrecer a las fracciones burguesas, debiendo anotarse que, lo fundamental de ese servicio ya fue prestado. Pero es enorme el costo que tiene que soportar la economía popular y es un costo que crece. Los resultados objetivos de la política económica de este régimen se traducen en un agravamiento de la crisis hasta el punto de que las medidas que se aplicarían para enfrentarla lo único que hacen es agravarla. Así por ejemplo, la renegociación de la deuda externa (hasta hoy inconclusa) se realiza sobre la 'base de una tasa de interés que se fija en un 2 por ciento por encima de la tasa interbancaria (Libor) de Londres, y la deuda del Sector Público será consolidada a nombre del Banco Central de Bolivia. Una tasa de interés tan alta agrava de manera escandalosa la crisis de la deuda externa.

A partir de los elementos del análisis económico, el régimen del Gral. García Meza se encuentra en un callejón sin salida, ya que pese a todas sus esperanzas de ayuda internacional no logró el reconocimiento diplomático del régimen, de Ronald Reagan. El estancamiento de las negociaciones para la refinanciación de la

deuda externa significa un duro revés para su política económica; pero más que el estancamiento de las negociaciones en sí son las causas las que más lo perjudican. El Wall Street Journal, periódico norteamericano, señala que la inestabilidad del régimen y su participación en el comercio de estupefacientes aparentemente han conducido al estancamiento de tales negociaciones; señala que lo informado por la prensa en el sentido de que el gobierno boliviano está pagando los salarios del Sector Público y proyecta comprar once aviones de caza franceses, con fondos obtenidos del mercado ilícito de cocaína no ha mejorado las posibilidades del régimen de renegociar las deudas”.

Se trata, pues de un régimen cuyos caminos se le cierran. Ya ni siquiera puede plantearse un modelo imitativo del régimen de Pinochet, en cuanto a la liberalización de precios y la apertura económica al exterior. La aplicación de un modelo neoliberal que se apoye en las ventajas comparativas no tiene viabilidad en Bolivia puesto que el punto central se refiere a la ausencia de tales ventajas comparativas, excepto en la explotación de ciertos recursos naturales. Las ventajas comparativas, aparentes, del bajo costo de la mano de obra se eliminan al considerar los altos costos del transporte, en ausencia de una salida propia al mar. De modo que sería una grave irresponsabilidad confiar en una industrialización a partir de tales ventajas comparativas. Por otro lado, una política de este tipo significaría liquidar

la escasa industria nacional, y no sólo eso, sino que inundaría el mercado con productos extranjeros, dando lugar a un desequilibrio mayor en la Balanza de Pagos y/a un endeudamiento externo descomunal. El primer frente de oposición estaría constituido por los industriales y obreros fabriles; aunque contaría con el apoyo total de los importadores, los mineros medianos, la burguesía bancaria y, sobre todo, los narcotraficantes.

Al respecto, corresponde señalar que la liberalización de las importaciones constituye un mecanismo para blanquear los dólares provenientes del tráfico de drogas. Hasta ahora la cuestión de los coca-dólares ha recibido solo tratamientos marginales en los trabajos sobre la economía boliviana; pues generalmente se aducían razones morales o de desconocimiento de las dimensiones reales del fenómeno. Pero, ahora ya no es posible ignorar que un alto porcentaje de las divisas que circulan en Bolivia se obtiene a cambio de clorhidrato de cocaína. Estimaciones que circulan como rumores, señalan que la producción anual de cocaína estaría entre 40 y 60 toneladas, las que vendidas en un precio de productor que fluctúan entre 10 y 12 mil dólares el kilogramo, darían un ingreso probable que oscila entre 400 y 700 millones de dólares. Una diferencia tan amplia entre ambos márgenes es explicable debido a las características específicas del negocio ilícito, que tiene que llevarse a cabo en estrictas condiciones de clandestinidad. En todo caso, puede decirse que representan un

ingreso de divisas por un monto aproximado al de las exportaciones legales de bienes y servicios.

Un ingreso de divisas tan cuantioso no puede dejar de tener impacto en la economía nacional, sin duda que el mayor efecto se traduce en la situación cambiaria, pues la afluencia de coca-dólares permite incrementar la oferta de moneda extranjera y mantener estable el tipo de cambio. Es corriente que en los lugares de gran tráfico de drogas, el dólar se cotice por debajo del tipo de cambio oficial lo que permite grandes negocios en operaciones de canje de monedas. Los coca-dólares llegan en forma de remesas en efectivo que van a parar a manos de los productores de pasta y clorhidrato y de éstos a los comerciantes de la hoja de coca (sigue el circuito de los transportistas y llega hasta el agricultor que cultiva la planta de coca.) Una parte de la divisa ingresa al mercado cambiario por medio de las casas de cambio y otras agencias que operan en canje de monedas. El resto ingresa al circuito a través de compras de bienes durables (refrigeradores, radios, máquinas de coser, etc.) que los campesinos adquieren pagando con dólares en billete.

Así los coca- dólares financian una parte importante de las salidas de divisas al exterior (ganancias, remesadas, pagos en moneda extranjera, incremento de cuentas corrientes en el exterior, etc.) y también una parte de las importaciones legales de bienes y servicios; el contra-

bando y los viajes al exterior.

Un efecto indirecto se relaciona con la creación de dinero por el Banco Central. Usualmente se crea dinero cuando los exportadores entregan sus divisas al Banco Central, pues éste emite nueva moneda a cambio de los dólares que recibe. Los coca-dólares no llegan directamente al Banco Central, o sea que no tienen efecto monetario directo, pero sí tienen efectos indirectos. El Banco Central puede hacer la operación inversa; es decir si tales dólares no llegan directamente a él, puede “recogerlos” emitiendo moneda nacional. Los tenedores de dólares necesitan pesos bolivianos para, sus transacciones corrientes (pagos, compras, etc.) de modo que a través del mercado cambiario obtienen la moneda nacional que emitió el Banco Central, el vínculo no es directo, sino a través del mercado cambiario. La expansión del medio circulante puede ser realizada a base del crédito bancario al sector privado o del financiamiento del déficit fiscal. Así, el gobierno puede incurrir en un mayor déficit que será financiado por el Banco Central con emisiones inorgánicas que indirectamente se “respaldan” en los coca-dólares. En Bolivia debido a la gran apertura al exterior, toda emisión de dinero sin respaldo se traduce, en mayores importaciones y agrava los problemas de Balanza de Pagos; pero actualmente esos efectos negativos se atenúan debido a la gran oferta de divisas procedentes del narcotráfico, que fungen como respaldo indirecto.

Los coca-dólares se “blanquean” a través del mercado cambiario, de las cuentas corrientes, personales o, de empresas; en el exterior (bancos de Estados Unidos, Panamá, las Bahamas, Suiza, etc.), de las importaciones, de mercancías pagadas en dólares por los importadores al Banco intermediario, de los viajes al exterior y del contrabando. El “blanqueo” es importante para borrar las huellas del narcotráfico. En un mercado libre de divisas el problema no es tan agudo pero siempre existe. De ahí que los narcotraficantes busquen vincularse con negocios legales establecidos y con personas adineradas para lograr la cobertura necesaria. Esto provoca un ensamblamiento de intereses, difícil de desdoblarse, entre los negocios lícitos y los ilícitos. Además cuando las clases dominantes se vuelven cínicas, ya no les interesa la opinión ajena; con mayor razón si los narcotraficantes están en posiciones de mando del Estado. En estas circunstancias el “blanqueo” va dejando de ser importante. Con una política de libre-cambio y de liberalización de las importaciones, los coca-dólares se limpian solos; es decir se transforman en automóviles, aparatos electrodomésticos y otros bienes durables que elevan el prestigio y la posición social de sus poseedores. Ésta es una de las razones para la reducción de los aranceles aduaneros en la importación de automóviles; medida que podría aparecer como una insensatez en un país que vive en una grave crisis en cuanto a reservas monetarias internacionales.

Esto nos lleva a destacar otra perspectiva en el análisis de clase de la política económica del régimen. No es casual que los principales traficantes de estupefacientes estén vinculados con personeros de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y con otros que desempeñaron altas funciones en la Cámara Nacional de Industrias. Monique Leclere y Francois Fallareau, en su artículo (Narcotráfico: origen y base de la Dictadura Boliviana), citan las declaraciones del presidente de una de las compañías mineras más grandes de Bolivia, quien dijo: “Éste es el primer golpe militar decidido por la mafia de las drogas. Este golpe militar fue financiado por tres sectores de la sociedad boliviana; los banqueros, los sindicatos derechistas del transporte público y la mafia de las drogas de Santa Cruz, que es también la burguesía terrateniente y ganadera de la zona”. Esto significa que los propios burgueses tratan de deslindar sus responsabilidades, procurando diferenciarse, y distanciarse todo lo posible de los golpistas. Claro que esto ocurre después de haber obtenido su cuota-parte en los beneficios de distribuidos por el régimen.

En resumen, la política económica del régimen fascista tuvo propósitos definidos en servicio de la burguesía, especialmente de las fracciones que actúan con mayor descaro. La ausencia de un “programa de gobierno”, de un esquema o un modelo económico se explica a partir de los antecedentes que se han referido y que se sintetizan en las características especiales de las fuerzas que

intervinieron en el golpe, la debilidad congénita de la burguesía boliviana y las diversas contradicciones interburguesas, especialmente las que derivan del ensamblamiento del comercio, la banca, la agro-industria y el narcotráfico. Además contribuye la falta de respaldo imperialista que impide al régimen insertarse en esquemas internacionales de proyecciones más amplias.

Una referencia especial amerita la anunciada posibilidad de transferir algunas empresas importantes del Estado a los empresarios privados, en vista de la “necesidad de modificar la estructura económica del país, tornándola más liberal y otorgándole mayor participación al sector privado”, según declaraciones de García Meza. Para justificar su planteamiento, García Meza describió la economía nacional como “socializada” con un excesivo centralismo y proclive a una orientación estatizante. Estas proposiciones contradicen una vez más sus discursos iniciales, cuyos párrafos más importantes ya se citaron en este capítulo.

En esto aparecen muy claras las marcas y patentes de la Escuela de Chicago y de la experiencia pinochetista. Pero es aquí donde García Meza muestra un desconocimiento mayúsculo sobre la realidad nacional. La privatización de COMIBOL, YPFB, ENAF, BAMIN, CBF, COFADENA y otras empresas no podrá hacerse al sector privado nacional, porque éste carece de capacidad económica y de gestión para hacerse cargo de ellas. De

modo que, de llevarse a la práctica, esta medida significará una apertura a la desnacionalización; es decir, para el ingreso de las corporaciones transnacionales. Es previsible, por tanto, que tales intentos antinacionales enfrentarán la resistencia del pueblo boliviano cuya lucha encontrará firme apoyo en sectores militares patriotas dispuesto a impedir que se sacrifique el patrimonio nacional, representado por las empresas del Estado. No se excluye, sin embargo, la posibilidad de que, en acciones de franco abuso del poder, García Meza logre transferir algunas de las actividades más rentables o de las reservas fiscales, a manos privadas, especialmente hacia aquellos empresarios, nuevos o tradicionales, que se encuentran en la necesidad de “blanquear” dólares. Pero, a su tiempo, el pueblo boliviano sabrá recuperar con rapidez el patrimonio pignorado e incluso ampliarlo.

Se puede observar que, directa o indirectamente, la política económica aplicada lleva el signo indeleble con que está marcado el régimen: el signo de la cocaína. Está visto que pasará a la historia como lo calificaron en Estados Unidos, en el programa de televisión “60 MINUTOS” dirigido por Mike Wallace: “Golpe de Estado de la Cocaína”, cuya batuta estuvo a cargo del llamado “Ministro de la Cocaína”.³⁸ Triste y trágico

38 - El Crnl. Luis Arce Gómez fue destituido del Ministerio del Interior a fines de febrero de 1981, pero fue designado Comandante del Colegio Militar “Gualberto Villarroel”. Los cédetes, encabezados por sus brigadieres, se sublevaron como justa reacción contra lo que consideraron una gran ofensa a la juventud boliviana. Al respecto, es de recordar que Ariel Coca Aguirre

co episodio de la historia de Bolivia, país que merece mayor respeto. Como herencia³⁹ queda una detestable tarea para los bolivianos: desenredar y cortar los hilos del narcotráfico que se extendieron sobre el país como una gigantesca tela de araña.

IV

LOS INTENTOS DE INSTITUCIONALIDAD Y SUS PERSPECTIVAS

Desde que el Gral. Bánzer ascendió al poder en 1971, el fascismo buscó la forma de institucionalizarse; es decir, de crear los mecanismos que le permitan ase-

fungía como Ministro de Educación y Cultura, y como tal era responsable del proceso formativo de la juventud. Varios cadetes tuvieron que seguir el camino del exilio, junto a miles de universitarios, estudiantes, obreros y campesinos.

39 Pero ésta no es la mayor de las herencias que deja el gobierno del General García Meza. La principal consiste en la profundización de la crisis económica, que ha sido llevada a magnitudes muy próximas a lo que podría calificarse como desastre nacional. Durante el tiempo que está en el poder, no se anota ninguna medida positiva para enfrentarla, pero si se han dado varias que la aceleran. El país ha perdido mucho terreno en todos los campos (económico, político, social, cultural, moral, institucional, diplomático y también militar) y cualquier gobierno en el futuro tendrá que concentrar sus actividades en el enfrentamiento de la crisis, para evitar que siga agravándose, pues ya su solución total es imposible dentro del marco del sistema capitalista.

Simplemente para mencionar un dato se indica que, según el Presidente de CONAL, Gral. (r) Lechín Suárez, se tramita un préstamo de 500 millones de dólares para rehabilitar la minería, frente a sólo 50 millones que se requirieron en el Plan Triangular durante la década de los 60. En todo caso, el mayor endeudamiento externo no significa una solución, sino una hipoteca del futuro. Tal es la herencia.

gurar el recambio en la cúspide, sin que el esquema se desarticule y pierda estabilidad. En Bolivia, como en cualquier país, es importante que los gobiernos de turno tengan a la vista la salida institucional, para dar paso a un nuevo equipo gubernamental que continúe, sin interrupciones ni quiebras fundamentales, la política del régimen: Para ello es indispensable establecer un aparato institucional basado en el consenso de las principales fracciones dominantes y que proporcione las apariencias de legalidad para el traspaso del poder de un general a otro o a un civil. Asegurar la continuidad en los esquemas generales de política es un requisito para la reproducción de todo el régimen.

La inestabilidad política en Bolivia se traduce en el brusco abandono de los lineamientos y pautas de acción del aparato administrativo del Estado, para dar cabida a nuevos esquemas que por lo común recién comienzan a definirse después de que el nuevo gobierno se ha consolidado en el mando de la nación. Debido a tales alteraciones en la vida institucional, la administración pública se caracteriza por un permanente recomenzar, que siempre se interrumpe, dejando proyectos inconclusos y programas frustrados. Es corriente que después de la caída de un gobierno, mucha información desaparezca y se pierdan los antecedentes sobre acciones en curso, de modo que las nuevas autoridades se ven en la necesidad de iniciar, a partir de cero, las actividades correspondientes. Esta falta de continuidad

se debe asimismo, a que cada gobierno trae su propia gente para reemplazar a los anteriores funcionarios que se llevan la información y el conocimiento de las tareas que estaban realizando. De ahí la crónica “falta de memoria” que se observa en el accionar administrativo y la ausencia de líneas maestras en el cumplimiento de las funciones del Estado. Lo que queda como herencia de un régimen, son los problemas que no pudo resolver junto con la rutina administrativa que es la que al final sostiene y da vigencia al propio aparato estatal.

De esta forma el “saber burocrático” es sumamente escaso, y la organización estatal, endeble; lo que determina que esa capa social específica formada por la burocracia, carezca de poder para dar mayor coherencia al accionar del Estado, al margen o a pesar de los cambios en los máximos niveles de decisión política. En Bolivia la caída de un gobierno no sólo afecta a los funcionarios de mayor responsabilidad política o administrativa, sino que pone en riesgo la permanencia de todos los funcionarios, cualquiera sea el nivel en que operen; hasta los mensajeros, auxiliares y porteros tiemblan por la incertidumbre que les trae cualquier cambio de gobierno, y con mayor razón los responsables de mandos intermedios.

La inestabilidad administrativa presenta ventajas y desventajas para las fracciones burguesas. Las ventajas predominantes son de corto plazo, puesto que les per-

mite evadir impuestos, ocultar operaciones fraudulentas, posponer pagos, etc.; pero, las desventajas a largo plazo atentan contra sus intereses fundamentales, ya que un Estado débil, ineficiente y costoso, limita las posibilidades de reproducción ampliada del sistema. Sin embargo, como ya se reiteró, la burguesía boliviana sólo piensa en el corto plazo y hace todo lo posible por entorpecer el funcionamiento de su propio Estado. Esto que aparentemente es un contrasentido, forma parte del desenvolvimiento cotidiano de la realidad boliviana; el Estado tiene que defenderse de la burguesía que a toda costa pretende mantenerlo semiasfixiado. La explicación se remonta, como en muchos aspectos ya mencionados, al proceso revolucionario inconcluso iniciado el 1952, que destrozó el viejo Estado oligárquico, pero que no llegó a crear un verdadero Estado nacional. Las fracciones burguesas menos lúcidas, que son las predominantes, ven todavía en el Estado actual la imagen borrosa de aquel que les quitó el sueño, cuando las milicias obreras patrullaban las calles de La Paz.

El régimen fascista de Bánzer trajo mayor tranquilidad a la fracciones burguesas y les permitió abrigar la esperanza de una vida más larga. Significó algo así como una tabla de salvación en medio del remolino. Tales esperanzas se agrandaron cuando en los demás países del área surgieron regímenes fascistas aún más agresivos que el de Bánzer. Los más entusiastas llegaron a pensar que por fin se abrieron las puertas para un largo imperio

del capital; que no encontrarían trabas ni reparo alguno para llevar al máximo sus designios; que la mano de hierro del Estado fascista aplastaría con facilidad cualquier intento para alterar el orden establecido que los trabajadores tendrían que someterse silenciosamente a las reglas del juego impuestas por las empresas y en fin, que se presentaban todas las condiciones necesarias para la obtención del máximo plusvalor en la explotación de la fuerza de trabajo.

Pero muy pronto surgió el problema de cómo institucionalizar un régimen de ese tipo; es decir, de asegurar su permanencia indefinida al margen de cualquier hecho circunstancial y, especialmente, al margen de las personas que eventualmente controlen el poder. El Gral. Bánzer era muy útil, pero no podía ser eterno; con mayor razón en Bolivia, país en el que las estructuras de poder se caracterizan por una básica fragilidad. De nuevo las pesadillas comenzaron a alterar ese sueño que jamás pudo ser totalmente plácido. Los golpes de la realidad llegaron, poco a poco, a romper el ensueño. Así surgieron los planteamientos para establecer vías de institucionalización que hagan mínimo el riesgo de alteración o quiebra del esquema fascista al cambiar las personas que tienen en sus manos el timón del Estado y la sociedad.

En los países vecinos se observaban experiencias que con mayor o menor éxito enfrentaban este problema.

En el Brasil, los generales designaban al sucesor presidencial por acuerdo interno. En Uruguay el fascismo estableció un Consejo de Estado integrado por civiles y militares que seleccionaban y designaban al hombre de reemplazo en el sillón presidencial. En Argentina, el voto calificado para designar presidentes se circunscribía al ámbito de los generales los que se atribuían el poder supremo sobre el conjunto de la Nación. En Chile, el Gral. Pinochet estructuró también un “Consejo de Estado” integrado por ex-presidentes y personeros civiles y militares que recibieron el encargo de estudiar las reformas legales para que el Gral. Pinochet permanezca en el poder hasta finalizar el actual milenio. En fin, existían experiencias que no tomaban para nada en cuenta la soberanía popular, pero que expresaban el consentimiento de las clases dominantes y permitían la selección y designación del candidato aceptado por ellas.

El problema de organizar el consenso de las fracciones burguesas en Bolivia es mucho más grave, debido a la inmadurez de las mismas que es la causa de su comportamiento inestable, que impide el establecimiento de reglas del juego duraderas. Además, cada General es un Presidente en potencia que está no sólo a la espera, sino moviendo los hilos para su designación. En tales circunstancias, la institucionalización aparece como una tarea cíclopea, pero el régimen tenía que proponérsela.

Varios fueron los intentos del fascismo durante el go-

bierno del Gral. Banzer, para lograr vías de institucionalización similares a las de los países vecinos. El primero se dio con la Conferencia del Mar realizada en Cochabamba a mediados de 1974, que con un pretexto específico reunió a connotados ciudadanos a partir de los cuales debía consolidarse un Consejo o Comité que adquiriría proyecciones mayores. La conferencia fracasó porque varios de sus participantes mostraron una actitud discrepante no sólo en la cuestión específica del mar, sino con la política general del régimen.

Imposibilitado de ir por el camino de la formación de un consejo con la participación de militares y civiles connotados, decidió dar un “golpe dentro del golpe”, para eliminar a los partidos políticos que participaban en el gobierno y lograr la concentración del poder en los mandos de las FF.AA. Así lo hizo en noviembre de 1974, pero tampoco este nuevo sendero mostraba posibilidades de asegurar la institucionalización, pues la formación de un consejo de generales hubiese llevado a un mayor aislamiento de las EF.AA. Además, era previsible el surgimiento de situaciones explosivas que podrían enfrentar de manera irreconciliable a los generales que aspiran a la Presidencia de la República.

Entonces se dio paso a la Comisión Nacional de Reformas Estructurales (CONARE) que también devino en un intento frustrado. Así, no pudo resolver el problema de la creación de un mecanismo institucional que, sin

consulta popular, permitiera el traspaso de la Presidencia desde el Gral. Bánzer a otro general o a un civil. Más tarde, por la presión popular tuvo que abrir paso a un proceso democrático y al llamamiento a elecciones, con un candidato oficial (el Gral. Pereda Asbún) que no pudo ganarlas, aún recurriendo a uno de los fraudes electorales más escandalosos de la historia de Bolivia. Finalmente, el recambio siguió la vieja norma del golpe de Estado.

El Gral. García Meza sintió desde un principio el vacío que lo rodeaba, pese al apoyo entusiasta y bullicioso de los banzeristas, las fracciones burguesas y los paramilitares. Por eso, después de declarar irreflexivamente que permanecería 20 años en el poder,⁴⁰ tuvo que preocuparse por el problema de la institucionalización, ya que muchos militares cuestionaban la “falta de esquema”. Así surgió la Comisión Nacional de Asesoramiento y Legislación (CONAL), con la pretensión no sólo de reemplazar al Poder Legislativo en la elaboración de los cuerpos legales, sino para servir de puente a un meca-

40 - A pocos días del golpe del 17 de julio, el Gral. García Meza manifestó al diario “LA TERCERA” de Santiago de Chile, que “permanecerá 20 años en el poder”. Declaraciones de tal estilo han sido escuchadas con frecuencia en Bolivia durante las dos últimas décadas. Así, frente a preguntas relacionadas con los proyectos que se ejecutarán desde el gobierno, muchos militares triunfantes en golpes de Estado, no dudan en manifestar que “reconstruirán Bolivia”, “construirán una nueva Bolivia”, “implantarán una democracia inédita o establecerán una segunda República”. Pero jamás llegan a explicar el contenido de tales expresiones. Al final queda en claro que no significan nada de lo que en apariencia quieren decir, pues el país queda en peores condiciones después de esas experiencias.

nismo institucional que pudiera facilitar el recambio. CONAL está integrado por personalidades reclutadas en el banzerismo por militares retirados, políticos sin partido y simpatizantes del régimen. Este organismo se caracterizó desde un principio por su mediocridad y falta de visión, llegando a convertirse en una especie de super-ministerio que en lugar de facilitar el desenvolvimiento administrativo, lo entorpece. A principios del mes de abril de 1981 recibió el encargo de redactar un nuevo proyecto de Constitución Política del Estado; tarea a todas luces distraccionista que, por lo demás, está totalmente fuera del alcance de CONAL. Además, este organismo ha comenzado a disgregarse con la salida de seis de sus miembros, de filiación banzerista. Los máximos resultados de su tarea legislativa consistieron en algunos informes burocráticos sin mayor trascendencia, y a esta altura CONAL es incapaz de institucionalizar nada.

De esta, forma el régimen del Gral. García Meza carece de posibilidades para lograr una solución de continuidad, o sea, de proyectarse en el gobierno que le suceda haciendo que éste derive directamente de él. Está condenado a luchar por su supervivencia, bajo la amenaza de que los mismos que lo cooperaron en su ascenso al poder le entreguen su pasaporte al exilio. Además, cualquier intento por institucionalizarse es inútil porque el mismo no tiene nada que ofrecer; carece de programa, utiliza una fraseología prestada y se sustenta so-

bre bases ajenas. Subsiste gracias a la represión sobre propios y extraños, y ya no puede asumir la iniciativa en ningún frente. Sus esperanzas por permanecer 20 años en el poder deben haberse reducido a 20 meses, pero le queda 10 más largo y fatigoso del trayecto.

En el presente hay una coincidencia generalizada sobre la necesidad de la caída de la dictadura de Gracia Meza. Por un lado, la derecha y el imperialismo tienen interés en su reemplazo por un gobierno “más potable”, es decir, más favorable a sus intereses mediatos e inmediatos. Por otro, la clase obrera y el movimiento popular procuran su caída para desarticular los mecanismos de represión que actualmente oprimen a los trabajadores y facilitan su explotación por una burguesía rapaz y extranjerizada.

Sin duda que García Meza caerá por el mismo método que los instauró en el poder: el golpe de Estado.⁴¹ Pero, mientras la burguesía y el imperialismo buscan su caída hacia una derecha más proclive a sus intereses, por ejemplo hacia el banzerismo y corrientes afines el movimiento popular pretende que ese hecho permita la

41 - En la Escuela de aplicación de Armas de Cochabamba el Gral. García Meza aseguró que el proceso inicio en julio de 1980 culminará con una apertura constitucional democrática (EL DIA, 10 de mayo de 1981), Sin embargo, como resultado del segundo intento de golpe del Terml. Emilio Lanza a fines de mayo, García Meza manifestó que entregaría el poder en agosto de 1981, a la persona que las FF.AA. designaran. Al hacer esta proposición, dejó en manos de las FF.AA. uno de los problemas más candentes de la política boliviana.

apertura de un espacio democrático en el que sea posible llevar adelante una lucha por el desarrollo hacia formas superiores de organización social.

Es previsible que el desplazamiento de García Meza se realice más de acuerdo con los intereses de la burguesía y el imperialismo que con las aspiraciones del movimiento popular. Esto se deduce a partir de la situación concreta por la que atraviesa el país, especialmente en vista de la correlación de fuerzas en el seno de las FFAA. Los militares más próximos al poder, para un nuevo régimen, son los que cuentan con el visto bueno imperial y el respaldo de las fracciones principales de la burguesía.

Pero ya llegará el tiempo en que sectores militares cada vez más amplios tomen conciencia del verdadero, papel que desempeñan en la formación social capitalista y cuestionen su función como sostenedores del dominio imperialista y de las minorías apátridas que hoy controlan el poder.⁴² También los militares se cansarán de los patrones y muchos de ellos comprenderán que la única alianza sólida y duradera, puede y debe darse con

42 - En la Escuela de aplicación de Armas de Cochabamba el Gral. García Meza aseguró que el proceso inicio en Julio de 1980 culminará con una apertura constitucional democrática” (EL DIA, 10 de mayo de 1981), Sin embargo, como resultado del segundo intento de golpe del Tcrnl. Emilio Lanza a fines de mayo, García Meza manifestó que entregarla el poder en agosto de 1981, a la persona que las FF.AA. designaran. Al hacer esta proposición, dejó en manos de las FF.AA. uno de los problemas más candentes de la política boliviana.

la clase obrera, a partir del programa de esta última.⁴³

Entre tanto, la correlación no está a favor del pueblo boliviano, que deberá seguir a la defensiva, soportando en su propia casa la opresión y explotación por los extraños. Seguirá soportando... pero no hay camino que no tenga fin.

Los resultados obtenidos de este segundo intento fascista, se traducen en un mayor debilitamiento del poder burgués. Como ya se anotó, la crisis ha sido agudizada hasta el punto en que su solución total resulta imposible dentro del sistema capitalista. Cualquier gobierno bajo cualquiera forma del Estado burgués, tendrá que esterilizar su gestión en el enfrentamiento de la crisis mediante acciones que sólo significarán paliativos para

43 Tradicionalmente los militares observaron ciertos puntos de referencia en su accionar político. Con anterioridad a 1952, el punto de referencia principal consistía en las actitudes de la Gran Minería (Patiño, Hoschild y Aramayo). Después de 1952, ese papel correspondió al gobierno de los Estados Unidos (Departamento de Estado, Pentágono y CIA) y también a la Iglesia Católica (el alto clero). En las últimas décadas los puntos de referencia se ampliaron con ciertos partidos y personalidades representativas (p.e., Pez Estenssoro, gobiernos de países vecinos (p.e. el fascismo argentino y el brasileño), grupos de empresarios (p.e., la colonia alemana), etc. En años recientes, fue tomando cuerpo un nuevo enfoque en determinados círculos militares. Consiste en el reconocimiento de que en Bolivia existen dos “factores reales de poder”: clase obrera y militares. No se menciona a las fracciones burguesas, seguramente debido a que ellas marchan detrás de los militares, desempeñando la función de agente financiero.

La relación actual de estos dos “factores de poder” es de enfrentamiento; sin embargo, es notorio que tanto entre los militares como en la clase obrera existen sectores que plantean la necesidad de una aproximación. En gran medida, el futuro político de Bolivia estará signado por esta relación.

evitar que se profundice hasta hacer insostenible el equilibrio interno de la formación social capitalista. No se niega que el capitalismo podrá sobrevivir durante un tiempo, pero su acontecer se desenvolverá de la misma manera en que evolucionan los enfermos incurables: recurriendo cada vez más a métodos que significan insuflar artificialmente vida.

Así, el capitalismo no saldrá más firme, sino más débil de esta segunda experiencia. Pero, con seguridad, no será el último intento de las fracciones burguesas (y el imperialismo) para instaurar regímenes fascistas en nuestro país; ya que tienen que replegarse, cada vez más al “espacio de emergencia” constituido por las Fuerzas Armadas, más no para crecer y desarrollarse, sino simple y llanamente para sobrevivir. El avance del movimiento popular los obliga a ello, debido a que les arrebató el campo de las luchas democráticas y comienza a penetrar, incluso, en el “espacio de emergencia”. Mientras el arsenal de métodos de lucha de la derecha se restringe, el del movimiento popular se multiplica y abarca progresivamente todos los planos y niveles.

Es inevitable que el pueblo boliviano logre conquistar de nuevo una apertura democrática. Pues, si bien la caída del régimen de García Meza seguirá la vieja rutina del golpe de Estado, cualquier gobierno que lo sustituya tendrá que buscar una solución política, como salida temporal. Y, en la realidad de nuestros tiempos,

es imposible pensar en una solución política en Bolivia al margen del Movimiento Popular y de sus fuerzas organizadas. Si ese nuevo gobierno no se encamina hacia tal solución, no podrá rehuir el camino de García Meza, personaje a quien puede atribuírsele, con justicia, un papel destacado en la desorganización intenta de las Fuerzas Armadas y de las fracciones burguesas.

Pero la nueva apertura democrática se dará en un contexto diferente al de 1978, y tendrá un contenido distinto. Las banderas y acciones del movimiento popular ya no podrán ser las mismas, en vista de que las condiciones objetivas exigirán un mayor avance. Esto parece innegable aun partiendo del propio carácter defensivo que tipifica esta etapa de la lucha popular. La defensa exige avanzar hacia nuevas posiciones, porque sólo de esa manera se puede consolidar lo que se ha logrado en tan larga y sacrificada lucha, y abrir nuevas perspectivas. No avanzar significaría ceder terreno a un enemigo desorganizado y desmoralizado.

Como se dijo al comenzar este trabajo, sus límites se circunscriben al análisis del Golpe de Estado del 17 de julio de 1980. Por eso se da fin de manera un tanto brusca a la presentación de las perspectivas. Aunque los personajes sociales que más se destacan en estas páginas son los protagonistas del golpe de Estado, hicimos todo el esfuerzo para que la sombra de ese inmenso personaje, ese personaje principal, que es el

movimiento popular, aparezca como el telón de fondo. En un tema tan estrecho, lo hemos conseguido a medias. Con mayor razón, el análisis de las perspectivas del movimiento popular rebasa el marco de los temas coyunturales, pues exige penetrar en las raíces más profundas de la historia.

V

PALABRAS FINALES

En este trabajo se ha tratado de relacionar de manera dialéctica la apariencia de los fenómenos, es decir, la forma en que se hacen visibles, con lo que, a nuestro juicio, es su esencia. A través del análisis de causas y consecuencias, se procuró establecer el vínculo estrecho entre la apariencia y la esencia. En el estudio de los fenómenos sociales esto es elemental, porque tales fenómenos no siempre son como aparecen, pues no hay un compromiso de correspondencia obligatoria entre la apariencia y la esencia. Más aún, en las sociedades de clases es imprescindible bucear más allá de las formas aparentes.

Pero hemos utilizado un lenguaje directo y, hasta donde fue posible, claro. Estamos conscientes de que las cuestiones más difíciles pueden ser presentadas con palabras simples; y además, estamos convencidos de que la verdad no está siempre escondida en el fondo de un pozo o a profundidades insondables para el intelecto común. Si esto último fuera así la verdad resul-

taría un patrimonio exclusivo de los hombres de altos estudios, de los doctores; lo que negaría a las masas la posibilidad del acceso al conocimiento verdadero de los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. El conocimiento sería monopolizado por las élites. Nuestra posición es contraria a interpretaciones de ese tipo.

El juicio sobre éste, como sobre cualquier trabajo, corresponde al lector.

México, D.F., mayo de 1981

SEGUNDA PARTE

Otra vez la Democracia en Peligro

LO QUE PASÓ DESPUÉS

I

LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL RÉGIMEN

Como estaba previsto, García Meza cayó por el mismo procedimiento que lo llevó al Gobierno: el golpe militar. Así, el segundo intento por instaurar un régimen fascista en Bolivia, con la pretensión de permanecer veinte años en el poder, terminó como una simple y descabellada aventura. Pero, no fue sólo eso. Tampoco fue un capítulo más, uno cualquiera, en la historia boliviana. El verdadero significado consiste en que llevó al país hasta el borde del desastre; es decir, condujo a la economía boliviana hasta una situación de verdadera calamidad. La crisis que había sido agudizada por el régimen de Banzer fue llevada por García Meza (y sus continuadores) hasta una virtual paralización de las actividades nacionales y una grave reducción en el poder adquisitivo de las grandes mayorías nacionales.

El régimen de García Meza no podía dejar el gobierno de otra manera. Después de negar la democracia, tenía cerrado el camino para el encauzamiento del país hacia una nueva apertura democrática. Al conculcar la soberanía popular, carecía de autoridad moral para restablecer los mecanismos electorales y entregar el poder a un ré-

gimen surgido de las urnas. Como había avasallado los propios reglamentos militares, no podía proceder a un recambio normal a base de una consulta orgánica entre los propios miembros de su institución. Era un régimen sin vías de retirada; estaba condenado a ser derrocado por la fuerza de las mismas armas que utilizó para alcanzar un poder ilegítimo. Como todo usurpador, tenía que ser sometido a los rigores de sus propias reglas.

Las explicaciones finales sobre las causas de la instauración de este régimen, como ya se apuntó en capítulos anteriores, si bien pueden ser encontradas en la acción de las grandes leyes que rigen el desenvolvimiento histórico del capitalismo dependiente, en lo inmediato tienen que ser localizadas en factores calificables como anormales o accidentales, en el curso de nuestra historia. El desarrollo capitalista es anárquico, contradictorio y aunque a la larga predominan las grandes tendencias, en el acontecer coyuntural influyen elementos capaces de alterarlas e incluso contradecirlas.

En julio de 1980, se podía prever que el proceso político inmediato sería el de la institucionalización del país, luego de tres actos electorales, en tres años consecutivos. Estas previsiones se fundamentaban tanto en indicadores internos como en otros referidos al contexto internacional. En lo interno era indudable que los militares nada podían ofrecer ya para enfrentar la crisis socio-económica que desde 1977 adquirió

caracteres alarmantes. Asimismo, las tres elecciones mostraron una progresiva inclinación del pueblo hacia posiciones de cambio; o sea las cifras electorales estaban evidenciando una localización hacia la izquierda. En estas circunstancias era lógico suponer que un nuevo golpe de Estado aceleraría ese proceso de toma de posiciones por las grandes mayorías, hasta el punto en que podría hacer peligrar la estabilidad del sistema. A esto se añade que la crisis había alcanzado dimensiones tales que era capaz, por sí sola, de desgastar y de esterilizar con suma rapidez a cualquier gobierno que se instaure.

Por otro lado, las condiciones internacionales eran las menos propicias para un golpe de Estado. Era evidente que, pese al más rabioso anticomunismo que pudieran proclamar los golpistas, no podían lograr el cambio de actitudes del gobierno norteamericano, de los social-demócratas europeos y de los países andinos. La opinión internacional favorecía firmemente la institucionalización en Bolivia.

De modo que si las clases dominantes en ese momento demostraban una elemental perspicacia, hubiesen comprendido que lo más conveniente a sus intereses fundamentales consistía en facilitar el ascenso de los triunfadores en las elecciones generales. Por lo demás, la UDP no representaba una amenaza total para sus intereses y su llegada al gobierno se hubiese dado dentro

de un cuadro de fuertes restricciones parlamentarias y con Fuerzas Armadas aleccionadas en su contra. La intensidad de la crisis restaba capacidad de maniobra para aplicar programas económicos de gran proyección y hubiese contribuido una poderosa valla adicional para frenar la aplicación de programas estructurales por la vía de la democracia representativa. Es decir, si las clases dominantes demostraban capacidad para percibir las grandes líneas del cuadro socio-político, sin duda no hubiesen alentado y promovido la quiebra de la institucionalidad.

Éstos son ya hechos ventilados por la historia. Los testigos y actores principales dijeron su palabra. La intervención directa de la Empresa Privada, la Banca y otros sectores económicos ha sido demostrada con testimonios públicos. No se trata de simples deducciones o de referencias a hechos implícitos. Así, el Gral. García Meza dejó claramente establecido los factores que lo indujeron a dar el golpe del 17 de julio. Ésta es una declaración de carácter histórico, porque el principal personaje de estos acontecimientos señala taxativamente que la Empresa Privada, la Banca y los transportistas participaron directamente, alentando y promoviendo el alzamiento militar.

Esto es importante de destacar, porque en nuestro país los verdaderos responsables de los golpes de Estado generalmente permanecen en la penumbra y mantienen

oculta la mano que mueve los hilos fundamentales. Rara vez muestran la cara, incluso ante los propios militares; pues utilizan intermediarios y negociadores que hablan a nombre de ellos. Pero, en este caso, la franqueza con que se expresó el Gral. García Meza hace ver que hubo contacto directo, además de los infaltables encargados de llevar y traer los mensajes y proposiciones. Cuando el mencionado general identifica a la Empresa Privada, la Banca y los transportistas, es de suponer que hace referencia a sus organizaciones institucionales como la Confederación de Empresarios Privados, la Asociación de Bancos (ASOBAN) y las confederaciones, federaciones y sindicatos de transportistas. La declaración mencionada pone de manifiesto, asimismo, que los empresarios dejaron de lado las sutilezas que generalmente se estilaban en estos casos. Sin embargo, es indudable que estos compromisos no involucraron a todos los empresarios privados, pues en 1980 se conocía la participación de muchos ellos en el esquema de institucionalización que llevaría al poder a la UDP. Como se sabe, después del golpe, esos sectores empresariales fueron amenazados en discursos públicos de los principales responsables del gobierno, por sus “sospechosas aproximaciones a los comunistas”.

Los sectores más agresivos de la empresa privada estuvieron actuando, ostensiblemente, con propósitos conspirativos, antes del 17 de julio. Los más destacados intelectuales orgánicos de la burguesía no solo jus-

tificaron el golpe, sino que lo apoyaron con vehemencia. Las ediciones de EL DIARIO, de esas fechas, son el testimonio más contundente de las actitudes de los empresarios e intelectuales orgánicos en relación con los acontecimientos políticos de la época.

Así, pues, los hilos que desde las sombras movieron el golpe del 17 de julio de 1980, han quedado en claro. A pesar de los desmentidos publicados por los empresarios, las declaraciones del Gral. García Meza son testimonios para la historia. Veamos ahora, cómo transcurrieron los últimos meses del régimen.

Los meses de junio y julio de 1981 se caracterizaron por la agudización de la inestabilidad política. El punto focal de la crisis se trasladó al interior de los cuarteles. Con esto se hizo visible que el régimen no contaba con el apoyo unánime de las Fuerzas Armadas y que el golpe del 17 de julio había sido promovido por un sector que arbitrariamente utilizó el nombre de la institución y que hizo uso indebido del poder conferido por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Pero, la causa directa más importante se refirió al desprestigio acelerado, tanto en el plano interno como en el internacional, debido a las acusaciones cada vez más frecuentes y fundamentadas sobre la participación de personeros del régimen en actividades ilícitas.

Sectores muy importantes de las Fuerzas Armadas to-

maron conciencia del papel en el que estaban comprometidos sólo por razones de disciplina y obediencia. El cuestionamiento de los mandos se hizo cada vez más frecuente y aumentaba en la medida en que trascendía informaciones sobre negociados y atentados contra el patrimonio público. Los planteamientos de defensa de la institución se afianzaron alrededor de la necesidad de precautelar la moral y el honor militar. Pero también evolucionaron hacia posiciones políticas relacionadas especialmente con el restablecimiento de la democracia y las libertades públicas.

El análisis de lo que ocurrió en estos meses en el seno de las Fuerzas Armadas es muy importante para comprender la realidad boliviana actual. Se vio claramente que dentro de ellas existen sectores que nada tienen que ver con los excesos cometidos durante las dictaduras y que literalmente no están de acuerdo con la utilización de las armas bolivianas contra el propio pueblo boliviano. Son sectores que buscan la profesionalización e institucionalización de las Fuerzas Armadas. Su preocupación central consiste en que las Fuerzas Armadas cumplan las funciones específicas que establecen la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Están conscientes de que la relación ejército-pueblo se ha convertido en una relación de enfrentamiento porque el ejercicio del gobierno, durante la mayor parte de los últimos 18 años, no se hizo a favor del pueblo sino en contra de él.

La politización de las Fuerzas Armadas, en el sentido de toma de conciencia de los problemas trascendentales del país, se ha acelerado en estos meses en que el punto focal de la crisis se trasladó al interior de los cuarteles. El control del gobierno en un período de crisis tan aguda, tenía que plantear muchos interrogantes sobre las funciones específicas de las Fuerzas Armadas y sobre su responsabilidad frente a la sociedad en su conjunto. Aún más, la falta de programas coherentes para enfrentar la crisis tenía que provocar el cuestionamiento del porqué y el para qué de la presencia militar en el gobierno. Ya no bastaba para justificarla el simple y manido eslogan de “salvar al país del caos y la anarquía”. La realidad era otra, pues la agudización de la crisis con toda su secuela de desorganización y desquiciamiento del país, se relacionaba inobjetablemente con la incapacidad para gobernar.⁴⁴

Pero lo más grave consistía en el desprestigio del país frente a la opinión mundial, y de los militares frente al pueblo boliviano. La imagen internacional de Bolivia era la de un país gobernado por delincuentes. También es de anotar que el pueblo pudo enterarse de la magnitud del problema del narcotráfico y de los nexos entre la mafia y quienes controlaban el gobierno. Los pro-

44 - A posar de este hecho objetivo, el Gral. García Meza sostuvo un discurso pronunciado en Camiri el 12 de julio de 1981, lo siguiente: “El proceso de Reconstrucción Nacional, iniciado el 17 de Julio de 1980, Surgió ante el fracaso de un civilismo inepto” (Agencias AP y AFP, EL DIA Internacional, 14 de Julio de 1981).

pios militares tomaron conciencia de este hecho. Así el exComandante del Ejército Nacional, Gral. Humberto Cayoja Riart, en declaraciones a la prensa, al retornar del exilio desde Buenos Aires, el 7 de agosto de 1981 dijo lo siguiente: “Éste no es un problema político, ni de pensamiento o de doctrina. Lo que sucede en mi país es un fenómeno distinto. Hay una mafia que maneja el narcotráfico y controla todos los hilos del poder, y el Gral. Luis García Meza y algunos jefes militares que lo acompañan están involucrados en ella”.⁴⁵

Había pues, conciencia entre los militares sobre los móviles que justificaban el emporio que ponían ciertos grupos para mantenerse en el poder. Los militares honestos no podían permitir que tan funesto baldón recayera impunemente sobre su institución y sobre ellos mismos, en la medida en que cohonestaban la presencia de personajes que por intervenir en actividades ilícitas se habían colocado no solo al margen, sino también en contra de su propia institución. Como en cualquier agrupación humana, quienes le hacen daño actúan objetivamente como enemigos. Resultaba, entonces, que las Fuerzas Armadas estaban comandadas por quienes les infligían un enorme daño.

Es de apuntar que en los últimos meses, el régimen de García Meza intentó cambiar su imagen internacional, pero sin ningún éxito. El retiro inmediato a una modi-
45 - Cable do la Agencia DPA, publicado en el DIA Internacional, México, D.F., 8 de agosto da 1981.

ficación sustancial al esquema de gobierno, aunque al parecer ése fue uno de los puntos del acuerdo. Lo cierto es que una vez desmovilizadas las tropas insurrectas y restablecidos los mandos naturales en las diferentes unidades, el poder quedó en manos de un triunvirato conformado por militares que habían estado comprometido con el Presidente depuesto. Durante varios días el poder efectivo siguió en manos de García Meza, quien daba órdenes en la Casa Presidencial de San Jorge. Después de varias semanas abandonó la residencia presidencial desde la que atendía asuntos oficiales, mientras la Junta cumplía la formalidad de ocupar el Palacio. Durante el mes y días que la Junta de Gobierno ejerció el “poder” la administración del Estado quedó prácticamente paralizada.

La caída de García Meza sin haber llegado a cumplir trece meses en el gobierno, da lugar a un conjunto de reflexiones sobre el cuadro sociopolítico de Bolivia y más específicamente, sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Es posible que luego de leer estas apretadas líneas, pudiera quedar la impresión de que el único factor que determinó el derrumbe del segundo intento fascista fue la acción de los militares que se oponían a García Meza. Ésta, sin embargo, es una conclusión solo a medias verdadera. Los militares desempeñaron un papel de gran influencia, sin duda alguna pero su accionar no hubiera culminado por sí solo en resultados exitosos si no existían otras condiciones fundamentales.

Aquí hay que destacar la pertinaz y sistemática resistencia popular que fue debilitando las bases de sustentación del régimen y haciendo cada vez más estéril su acción de gobierno. Los partidos populares realizaron una tarea de desgaste, interna e internacional, que no sólo condujo al aislamiento del régimen, sino que despertó una conciencia internacional de repulsa que lo sometió a una virtual cuarentena. Pese a todos sus empeños, movilizando a personajes y personajillos siempre dispuestos a cualquier menester por figuración o por paga, no pudo contrarrestar la vigorosa campaña de denuncia y desenmascaramiento que los partidos llevaron a cabo en todos los niveles de la sociedad boliviana y en el ámbito internacional.

La presencia de la mafia en cargos militares de elevado rango y en altos puestos ejecutivos no podía ser ignorada por los organismos internacionales de represión del narcotráfico. Esos personajes podían aparecer inocentes frente al pueblo boliviano, que desconoce los detalles con que opera el narcotráfico, pero no podían hacer lo mismo frente a los organismos especializados, que tienen por función descubrir a quienes mueven los hilos del negocio. Por otra parte, lo fundamental de esta actividad no se realiza en Bolivia sino en Estados Unidos y en los países de tránsito. De modo que es allí donde mejor se conoce a los cabecillas directos y a los encubridores, protectores y cómplices, desde el propio país de origen hasta el de destino final. Al respecto, no

hay duda de que la OEA es un organismo eficiente.

Sin embargo, el derrocamiento de García Meza no significó el fin inmediato de esta pesadilla jamás imaginada por los bolivianos. Pasaron varios largos meses antes de la recuperación de la democracia.

II

LOS GOBIERNOS TRANSITORIOS

El extraordinario empeño por conservar el poder aún a riesgo de un enfrentamiento armado con los propios miembros de su institución, sólo puede explicarse a partir de dos razones principales: 1) la influencia directa o indirecta de la mafia a que hizo referencia el Gral. Cayoja y 2) la necesidad de cubrir la retirada para ocultar los hechos de sangre y las acciones fraudulentas contra la economía nacional. También incidieron otros factores, como por ejemplo las ambiciones personales y de grupo y la influencia de ciertos sectores obsecados de la derecha interna e internacional.

La afirmación del anterior párrafo se sustenta en la circunstancia de que tampoco los regímenes transitorios pudieron contar con el apoyo norteamericano, habida cuenta de que éstos serán los principales afectados por el narcotráfico. Pese a los más recónditos deseos de Jane Kirkpatrick y de los representantes de la extrema dere-

cha, el gobierno norteamericano no podía ignorar sus propias denuncias. Por otro lado, los empresarios privados bolivianos que empujaron el Golpe de García Meza ya no podían mantener el mismo apoyo, sino a riesgo de su identificación total y definitiva con los sectores delincuenciales. Lo que ellos necesitaban ahora era el más pronto olvido de la aventura y si bien una fase prolongada de transición les era favorable, no podían mantener un compromiso abierto con regímenes que apenas se diferenciaban del impuesto en julio de 1980.

Un hecho que no se puede dejar de lado en este análisis es el papel de los intelectuales orgánicos de la derecha ultramontana. En fiel servicio de su función, promovieron el golpe de García Meza y trataron de justificarlo ante la sociedad y ante la historia. La prensa de la época, especialmente EL DIARIO, muestra cómo las mejores plumas pretendieron legitimizar no sólo el Golpe, sino las acciones violentas y el terror. En esa prueba de inteligencia, tales intelectuales dieron todo lo que podían dar en beneficio de sus mandantes. Pero, además cabe anotar que en las listas que destacó la prensa internacional pudo comprobarse que muchos “intelectuales” no eran ajenos al negocio que defendían. En esas listas, muchos aparecieron como prestadores de nombre (y de cuenta bancaria) para el “blanqueo” de dólares de dudosa procedencia. En fin, fueron años definitivos para aquellos intelectuales orgánicos que, de esa forma, dejaron en claro lo que podían hacer.

Pero también esos intelectuales, en el momento del descalabro, abandonaron el barco. Por eso, los regímenes transitorios tuvieron que apelar a personajes de penúltima fila para el asesoramiento y el manejo de las cuestiones de Estado. En esas manos, todo se podía esperar de la conducción económica estatal. Si García Meza en sus momentos de mayor empuje no pudo contar, como capital propio o en préstamo con un programa económico con mínima solvencia, menos podían lograr los gobiernos transitorios en la fase del declive final. En tales circunstancias, el curso previsible e inevitable era el de la agudización de la crisis nacional.

Entre agosto de 1981 y octubre de 1982 tres gobiernos militares ocuparon la Presidencia de la República, En primer término, el Triunvirato que en cierto modo coexistió con García Meza, compartiendo el poder entre la Casa Presidencial y el Palacio de Gobierno, empujó al país en una crisis de autoridad que impedía el manejo más elemental de la cosa pública. Para superar esta situación los militares concentraron el poder en el Gral. Torrelio. Comandante del Ejército, quien dirigió el país durante un período anodino en que se hizo patente la brecha entre el discurso político del gobierno y la realidad nacional, lista fue una etapa en la que el Gobierno decía estar haciendo una cosa pero la realidad era totalmente distinta. Por último, el fugaz paso del Gral. Vildoso quien no tuvo otra salida que entregar el poder y decidir la retirada de las Fuerzas Armadas

que en julio de 1980 habían recibido la orden de tomar el gobierno para “reconstruir la patria”. La orden de retirada no fue voluntaria, pero fue una muestra de sensatez.

El Triunvirato establecido después de agosto no dejó nada para la historia. En realidad podría decirse que no gobernó, sino que a lo sumo, custodió el gobierno hasta que lo tomara alguien que fuera capaz de romper el precario equilibrio en que se sustentaba. Como era producto de una negociación poco clara entre el Gral. Natusch y los altos mandos, sus propias facultades no estaban correctamente definidas. De otro lado, parece ser que tampoco expresaba fielmente el espíritu del compromiso entre Natusch que representaba a los militares insurrectos y los altos mandos que habían sido designados por García Meza. El propio Natusch reiteró en varias ocasiones que no había sido ésta la solución acordada. Pero, de todas formas, el Gral. García Meza demostró, aún fuera del Gobierno, que tenía hombres bajo su mando. Así, pues, el período del Triunvirato solo tiene el significado de uno de esos paréntesis, tan reiterados como costosos, en los que el país se detiene a la espera de algo que vendrá pero que todavía no llega.

Una vez que el balance de fuerzas se inclinó a favor del Gral. Torrelio, el Triunvirato se deshizo. El nuevo gobierno se esforzó por mejorar la imagen en el exterior y se propuso ejecutar algunas medidas que dieran

la apariencia de una lucha frontal con el narcotráfico. Pero pronto se evidenció que las víctimas exclusivas fueron los campesinos, más no los poderosos narcotraficantes. Los cultivos de coca de los campesinos fueron destruidos con herbicidas y elementos químicos que ocasionan profundo daño ecológico. Bajo influencia directa de los norteamericanos el gobierno concentró su acción en la destrucción de cocales y en la persecución de campesinos y pequeños productores de cocaína. Sin embargo, el gran negocio no fue tocado, pues su aparato continuaba operando, aunque, seguramente, en condiciones un tanto distintas de la época anterior. Los norteamericanos, que en este campo saben lo que hacen, desahucieron muy pronto la campaña de apariencias y dejaron al gobierno más huérfano que antes.

El gobierno del Gral. Torrelio, a través de los organismos pertinentes, preparó un plan al que denominó "Plan Trienal". Este Plan, según declaraciones públicas, debía preparar el terreno para que en 1984 el país retornara a la democracia. Es decir, las tareas previstas en el campo económico, social y político debían crear las condiciones indispensables para un retorno ordenado al camino democrático. Ya se reconocía con mucha claridad que fue un error muy grave el haber provocado que el país abandonara ese camino y al que por las circunstancias especiales, no se podía retomar de inmediato. Lo que el régimen procuraba era ganar tiempo. En Bolivia cada gobernante de facto busca aferrarse al

gobierno hasta que “lo echen”; de modo que trata de alargar al máximo los días, las horas y hasta los minutos de su permanencia. La estrechez de miras es un mal palaciego de todos los gobernantes de facto que piensan que la salvación del país depende de que ellos permanezcan en el poder lo más que puedan, al margen o independientemente de lo que desde el gobierno pudieran hacer. La única contabilidad exacta que llevan, es la de los días de su permanencia en el poder. Al final de cada día cuentan uno más de su permanencia en el mando y su gran preocupación consiste en que al día siguiente puedan seguir haciendo lo mismo. De ahí que el objetivo implícito del Plan Trienal era ganar lo máximo en tiempo para que el Gral. Torrelio se mantuviera gobernando el país.

Así, pues, el Plan Trienal resume lo que, de no conocer como discurren las cosas en Bolivia, podría entenderse como ingenuidad tecnocrática y militar. Como se sabe, lo elemental en el análisis de la política económica y la planificación consiste en determinar la viabilidad socio-política de las proposiciones y planes que se ofrecen al país. En este sentido, el régimen de Torrelio que no era más que una obsecada prolongación del de García Meza, carecía de toda solvencia para lograr el mínimo consenso en torno a cualquier programa de mediano o largo plazo, incluso en el interior de los propios cuarteles. Las mismas acciones del gobierno hicieron ver que ni sus miembros confiaban en el Plan, ni lo tomaban en

serio. De ahí que sea correcto concluir que su propósito principal consistía en proporcionar los pretextos para alargar la presencia militar en el gobierno.

La situación del país fue haciéndose más difícil a la par que el gobierno se quedaba sin margen de maniobra. Como siempre, lo más sensible de la economía boliviana se expresa en el tipo de cambio y en la esfera financiera. Los desarreglos en este campo, se agravaron debido a que resultaba cada vez más difícil conseguir una posposición de pagos de la deuda externa. De otro lado, nada hacía el gobierno por resolver las causas de fondo que desencadenaron la crisis y era obvio que aún en el mejor de los casos, muy poco podía hacer. De esta forma el Plan Trienal quedó como simple papel escrito, pues su fracaso ni siquiera merece ser considerado como una frustración.

Mas este gobierno provocó heridas muy profundas en la economía nacional. Sus paquetes económicos aplicados en febrero y marzo de 1982 agravaron la crisis, pues desencadenaron un proceso inflacionista incontrolado. Ya desde mediados de 1981 se hizo evidente la formación de dos mercados cambiarios, uno oficial y otro paralelo, con una enorme discrepancia en los tipos vigentes en cada uno de ellos. Pero las medidas de febrero y marzo significaron un golpe fatal a la economía boliviana porque implicaron el establecimiento de un sistema de flotación cambiaria incompatible con la realidad nacional.

La flotación cambiaría no corresponde a una economía con las características de la nuestra. Sobre este tema, hasta los propios técnicos del FMI que analizan con seriedad y responsabilidad profesional las opciones para el establecimiento de sistemas cambiarios, reconocen que la flotación no es recomendable para economías en las que el tipo de cambio constituye una variable estratégica. Aún más, sostienen que podría resultar altamente perjudicial en economías muy sensibles a las variaciones en el tipo de cambio. En efecto en economías pequeñas muy dependientes del comercio exterior, poco integradas y escasamente diversificadas, que exportan una o pocas materias primas, cuyas monedas no son convertibles internacionalmente y que, en fin, tienen escasa o ninguna influencia en el sistema financiero internacional, no deben implantar la flotación. Como en estos países el tipo de cambio es una variable dominante, llega a condicionar no sólo el desenvolvimiento financiero sino también las actividades productivas.

Al disponer la flotación, el Gobierno demostró que no sólo estaba en manos inexpertas, sino también irresponsables. La discrepancia abismal entre el tipo de cambio oficial y el del mercado paralelo provocó distorsiones en el sistema de precios, que condujeron a su alteración total. El gobierno perdió el control de la economía, lo que facilitó que los factores especulativos, siempre latentes, provocaran una profunda desarticulación de la actividad económica. Como siempre ocurre en estos

casos, los verdaderamente perjudicados fueron los sectores populares, ya que las clases dominantes no solo tienen mecanismos de defensa sino que determinan a su favor las reglas del juego en el desenvolvimiento económico.

Posiblemente el Gral. Torrelio y los militares que lo acompañaban, no tuvieron jamás una idea del daño que ocasionaron al país en tan poco tiempo de su paso por el poder. Incluso pudiera ser que muchos sigan pensando que lo hicieron bien. Por su parte los tecnócratas que fungieron como asesores deben seguir buscando los justificativos teóricos en los textos mal estudiados y mal aprendidos en sus años universitarios. Pero la conducción del gobierno no debería ser jamás obra de aprendices que no saben a ciencia cierta lo que están haciendo. Sólo la fuerza de las armas puede dar lugar a que esto ocurra en un país. En tal caso, sin embargo, las armas se colocan inobjetablemente en contra de ese país. Esto ocurrió en Bolivia.

La descomposición económica tenía que reflejarse en una profundización de la crisis social y de la crisis política. La desarticulación del sistema de precios dio lugar a gigantescas traslaciones de ingresos en favor de los grupos sociales que viven de la especulación o se benefician con ella. Grandes fortunas fueron acumuladas a base de simples órdenes de venta de divisas oficiales o del manipuleo de la influencia política. Paralelamente

el pueblo trabajador vio reducido el poder adquisitivo de los sueldos y salarios, con golpes adicionales a los que ya soporta desde el régimen de Bánzer y que se acentuaron con García Meza. Las causas del descontento social no podían ser ignoradas por nadie y ellas se iban acumulando con cada medida económica que adoptaba el gobierno. De esta forma el régimen del Gral. Torrelio tenía forzosamente que concluir.

El Gral. Vildoso asumió el poder luego de confusos pronunciamientos militares en que más de un aspirante a la Presidencia se quedó con los “crespos hechos”. El enorme número de candidatos a sustituir al Gral. Torrelio en una situación tan difícil que por sí misma reducía casi a cero las posibilidades de ejecutar un programa mínimo de sobrevivencia, demuestra que el juego de ambiciones e intereses egoístas está por encima del país y de sus instituciones. Bolivia vivió amargos momentos de tragicomedia cuando, con distintas voces, diferentes militares, pregonaban su “derecho a la Presidencia por decisión de sus comandantes”. Pero también muchos civiles estaban atentos, por si acaso los generales no se pusieran de acuerdo con llevar un uniformado a la Presidencia y optaran por un civil. Éste fue un espectáculo cruel que no concluyó con la designación del Gral. Vildoso, pues se mantuvo hasta el mismo 10 de octubre en que el país recuperó la democracia.

El gobierno del Gral. Vildoso no puede ser calificado

sino como la continuación de la continuación, pero con menor fuerza y entusiasmo. Era claro que el período de los regímenes militares llegaba inexorablemente a su fin. Después de casi dieciocho años, el ciclo militar llegaba a su ocaso, sin posibilidades de revitalización. Cualquier prolongación artificial implicaba ir en contra de la historia, hecho que conlleva enormes riesgos. Si bien los actores directos, pueden no estar al tanto de las leyes sociológicas que rigen los procesos sociales y políticos, hay sin embargo quienes tienen la función de pensar por ellos. Así los intelectuales orgánicos de las clases dominantes tienen la responsabilidad de cuidar el sistema y preocuparse por la elaboración teórica de las posibles soluciones.

Las clases dominantes no podían observar impasibles el deterioro final de un régimen en cuyo establecimiento contribuyeron de manera decisiva. Por eso los intelectuales que ayer pretendían justificar la necesidad de la “Reconstrucción Nacional” a cargo de los militares, tenían que buscar ahora las alternativas políticas que impidieron que el curso de los acontecimientos llevara a un cambio irreparable. De persistir el deterioro en todas las dimensiones del acontecer social, llegaría el momento en que la legitimidad del poder de las clases dominantes quedaría totalmente cuestionada y se abrirían las puertas para su total negación dialéctica. La situación ya había llegado al punto en que no se trataba simplemente de un repudio generalizado al régimen

militar, sino que todo el orden capitalista mostraba signos inequívocos de desquiciamiento.

El significado histórico del período gubernamental del Gral. Vildoso es el de un interregno necesario para la búsqueda de una solución que hiciera posible la retirada ordenada de las Fuerzas Armadas; es decir, su salida del gobierno con las menores grietas dentro de su aparato interno y conservando en su seno a todos los grupos, aún aquellos que públicamente eran cuestionados por sus vínculos con actividades ilícitas. El gobierno de Vildoso fue otro resultado de soluciones de compromiso, que anteponen la unidad de la institución aún a costa de su prestigio. De ahí que no se retiró a ninguno de los responsables de los malos manejos en el gobierno, ni del desprestigio internacional de la institución. No fueron retirados a pesar de que ya era de conocimiento público los negociados de la Gaiba, los vidrios Ray-Ban, los carros Hanna y los aviones de la FAB y muchos otros que ocasionaron graves daños a la economía nacional.

En el campo económico Vildoso no hizo prácticamente nada. Dejó que la economía siguiera por la pendiente. Preparó un paquete de política económica y lo discutió con el FMI. Más tarde lo propuso ante los organismos sindicales y la opinión pública. Se trataba de un paquete de contenido tradicional, cuya aplicación hubiese exigido el uso de la violencia intensificada por parte del

gobierno. Los organismos laborales y centros de investigación rechazaron el paquete por constituir un simple paliativo sin perspectivas de solución de la crisis. El rechazo popular no fue sólo al intento de aplicar el paquete, sino al propio régimen militar. Con esto se redujo a cero la viabilidad socio-política de cualquier política económica que internaran los regímenes castrenses.

Técnicamente, el gobierno sólo tenía ante sí dos opciones: la retirada o la represión. Para optar por el segundo camino requería la unidad total y disciplinada de las Fuerzas Armadas; requisito imposible de alcanzar a esa altura de los hechos. El uso de la represión hubiese conducido al enfrentamiento armado entre amplios sectores internos de las Fuerzas Armadas, enfrentamiento en el que uno de los bandos recibiría el apoyo total de las fuerzas populares. La experiencia de 1952 podía repetirse dentro de un cuadro de nuevas proyecciones. Por eso la retirada se hizo inevitable. Lo demás fue cuestión de procedimiento.

III LA UDP EN EL GOBIERNO

En agosto de 1982, Bolivia se encontraba con un gobierno sin iniciativas para gobernar. Su reemplazo era inevitable. Pero no podía ser sustituido por otro gobierno militar. No había pues la posibilidad de la transmisión del poder de un general a otro para que este go-

bierno sino a lo sumo para que, a su vez, entregue el poder. Esto quiere decir que tampoco había posibilidades de un Golpe de Estado que permita a los militares seguir gobernando. Tal ciclo político había concluido.

Las clases dominantes estaban arrinconadas. Lo que había sido su principal sostén, ya no lo era. Tenían que buscar un recambio favorable a sus intereses, pues el riesgo de perderlo todo estaba a la vista. Por su lado, los representantes del imperialismo tampoco podían permitir que el manejo político quedara fuera de control. La búsqueda de una salida democrática era el secreto para evitar la explosión social y la quiebra final de las instituciones burguesas.

El camino de las elecciones era el que lógicamente se debía recorrer para el retorno a la democracia. Sin embargo, entre 1980 y 1982 se había modificado notablemente la correlación de fuerzas, inclinándose a favor del movimiento obrero y popular, que durante este período de descalabro dio muestras de extraordinaria solidez y capacidad. Era de presumir, por tanto, que en caso de elecciones, habría un seguro ganador mayoritario. Los partidos de la derecha, desde los que se autocalifican como centristas hasta los ultramontanos, estaban sin ninguna posibilidad de éxito electoral, aunque participaran todos coaligados. El camino electoral, en tales circunstancias, era totalmente adverso para la derecha y el imperialismo.

Quedaba, empero, la posibilidad de retrotraer al país hasta el cuadro que se perfilaba en agosto de 1980. Es decir, hacer de cuenta que en el país no pasó nada desde entonces o que todo ocurrió por error o por una acción insensata (que era preciso borrar de la memoria), Eso significaba algo así como negar que hubieran existido los gobiernos de García Meza, el triunvirato, Torrelio y hasta el mismo Gral. Vildoso. Negarlo, todo y aquí no pasó nada. En otras palabras, convocar al Congreso elegido el 29 de junio de 1980 y entregar el gobierno a quien defina el Congreso, tal era la única posibilidad para que la derecha no sea sobrepasada. La convocatoria al Congreso de 1980 era, pues, la solución de la derecha.

Pero tal solución requería inexcusablemente el consentimiento del frente ganador en las elecciones del 80. Es decir, si la UDP se negaba a seguir ese camino y exigía como era correcto nuevas elecciones, no podía prosperar aquella convocatoria. La UDP tenía todo el respaldo popular para imponer las reglas del juego en la conformación del próximo gobierno. Si, a pesar de la negativa de la UDP se convocaba al Congreso y éste elegía a Paz Estenssoro o a Bánzer, cualquiera de ellos hubiera corrido la misma suerte de los salientes regímenes militares. En estos momentos cruciales la UDP estaba en condiciones de decidir.

Los pronunciamientos iniciales de algunos de los componentes de la UDP y, en especial, del Dr. Hernán Siles

hacían ver que sus proposiciones se encaminaban a lograr una convocatoria a elecciones para fines de 1982 o comienzos de 1983. En cualquier análisis, por elemental que sea, podía comprobarse que de ocurrir esto el país podría contar con un gobierno con amplia mayoría parlamentaria a su favor. En otras palabras, la UDP hubiese logrado una ventaja abrumadora sobre cualquier fuerza derechista y sobre la coalición de todos sus partidos y grupos.

De otra parte, sólo un proceso eleccionario podía reflejar adecuadamente la nueva salida política. Sin duda que la situación era muy diferente de la de 1980, pues el golpe de Estado de García Meza y toda la represión posterior, hicieron que el pueblo se convenciera de la necesidad de un gobierno democrático fuerte, con amplio apoyo parlamentario para ejecutar medidas de trascendencia. Asimismo, el pueblo se dio cuenta de que la mano del banzerismo había propiciado el Golpe del 17 de julio y que los miembros de esta fuerza política (ADN) constituían el verdadero respaldo civil del régimen. La vinculación del banzerismo con García Meza arrastraba a toda la derecha. Así, por ejemplo, aunque el MNR pazestensorista hubiera participado sólo marginalmente en el golpe, quedó signado con el estigma, debido a su viejo parentesco político con el banzerismo. La derecha en su conjunto estaba, pues, identificada de manera precisa con el golpismo, la represión y las medidas antipopulares. En caso de elecciones, difi-

cilmente la derecha hubiera logrado algunos puestos en el parlamento.

Empero, lo que parecía una solución lógicamente necesaria para el proceso político boliviano y un planteamiento correcto para la UDP, no pudo sostenerse porque algunas de las fuerzas componentes de esta última conciliaron con las posiciones de la derecha. Era evidente que la UDP sólo hubiera podido lograr una solución favorable a las masas si mantenía una férrea unidad interna, especialmente entre las fuerzas representadas por el binomio presidencial. En otras palabras, esto sólo hubiera sido posible si el MNRI y el MIR coincidían en mantener con firmeza la proposición; de convocar a elecciones. Las debilidades mostradas por uno de estos partidos, hizo ver que el frente de la UDP no era sólido, lo que posibilitaba a la derecha imponer el planteamiento de la convocatoria al Congreso de 1980. Las grietas en la UDP dieron capacidad a la derecha para imponer su solución.

En efecto, la convocatoria al Congreso de 1980 significaba la instauración de un gobierno con minoría parlamentaria, especialmente en la Cámara Alta. De esta forma, un gobierno que contaba con una abrumadora mayoría actual quedaba prisionero de un Parlamento surgido en una época pasada. Esa contradicción tendría enorme importancia en la futura gestión gubernamental, pues un Poder Ejecutivo sin capacidad de acción

estaba irremediabilmente condenado a la frustración. Esto se debe a que el nuevo Gobierno se instalaría dentro de un cuadro de crisis generalizada cuya solución exigiría una gran capacidad de decisión y ejecución de medidas fundamentales. No era, pues, una situación normal, sino una de las más difíciles de toda la Historia de Bolivia.

Las debilidades mostradas por uno de los partidos de la UDP dieron lugar a que se impusiera la solución derechista. En ese mismo momento en que se definió por la convocatoria al Congreso de 1980, como salida de la crisis se asestó una grave derrota al movimiento popular; la más grave, quizás desde 1971. A partir de ese instante las clases dominantes podrían recomponer los hilos del cuadro político a su antojo. El ascenso de la UDP al gobierno representaba algo así como un paso al matadero. ¿Qué programa fundamental para resolver la crisis podía ofrecer un gobierno que sabe de antemano que su batalla en el parlamento está perdida? ¿Qué medidas de transformación estructural podía planificar un gobierno al que desde el Parlamento pueden controlar y frenar las clases dominantes?

En gobiernos de facto, el Poder Ejecutivo funciona sin Parlamento y tiene toda la capacidad de acción que él mismo pueda darse. El Parlamento no sólo es ignorado sino suprimido. El Ejecutivo no tiene trabas por este lado. Lo mismo ocurre con la Contraloría General de la

República. En los gobiernos de facto ésta es convertida en una simple agencia gubernamental que fiscaliza lo que se le permite y apoya lo que se le ordena. La Contraloría está tan distante de su función que es casi como si no existiera.

En un régimen democrático la situación, es distinta. El Parlamento y la Contraloría pueden colocarse prácticamente por encima del Ejecutivo, no solo en las tareas de fiscalización, sino determinando lo que éste puede y no puede hacer. Ceder el Parlamento y la Contraloría es ceder más de la mitad del poder. Y en una época de crisis generalizada difícilmente se puede hablar de que el Ejecutivo pueda controlar la otra mitad del poder.

En síntesis, el hecho de que la UDP no hubiera logrado una actitud firme para mantener la convocatoria a elecciones como única salida adecuada para la crisis política, le restó capacidad de maniobra. La iniciativa política pasó automáticamente a manos de la derecha, la que dejó de estar acorralada por el movimiento popular. De ahí en adelante los grados de libertad para el manejo gubernamental serán definidos por la derecha, a través de parámetros cada vez más rígidos y cada vez más estrechos. Todo se reducirá a una cuestión de tiempo. La UDP se derrotó a sí misma antes de su llegada al gobierno.

Es de destacar que la respuesta política no dependía

del movimiento popular, sino de los partidos que lo representan. Por eso la COB y los organismos laborales no tuvieron opción para plantear la solución política, aunque ellos construyeron el escenario en el cual los partidos de la UDP tendrían que actuar. Durante todo el período anterior la COB y las organizaciones laborales condujeron el movimiento popular poniendo en jaque a las clases dominantes. Pero los límites de su acción aparecieron muy claros en el momento en que la iniciativa final dejó de corresponderles. Aquí se pudo ver que el sindicato no puede reemplazar al partido, ni puede decidir por él.

Quedó también planteada la cuestión de hasta qué punto en Bolivia existe correspondencia entre el nivel de desarrollo del movimiento obrero y popular y el de la vanguardia política. Analizando la cuestión concreta de la convocatoria al Congreso de 1980, en el cuadro coyuntural de los meses de agosto y septiembre de 1982, parece muy claro que el desarrollo de las organizaciones partidarias representativas de la clase obrera y del movimiento popular en general muestran un rezago en relación con el movimiento-sindical. Mientras el sindicato aparece como un tipo de organización de gran madurez y capacidad para plantear y defender los intereses (no sólo los intereses inmediatos) de la clase obrera, el partido no se muestra con idéntica capacidad de respuesta en los momentos en que se deben tomar decisiones de gran envergadura.

Esta reflexión no debe ser interpretada como sugerencia de que en 1982 la clase obrera se hubiera planteado la transformación total de la sociedad, superando el sistema capitalista. Esto evidentemente no ocurría. Pero era claro que sí buscaba una solución diferente de las tradicionales respuestas que las clases dominantes ensayan para la crisis. La clase obrera tenía interés en un gobierno que se propusiera un programa económico que incluyera medidas transformadoras de hondo contenido. Tenía interés en un gobierno que se preocupara por dar protección a los recursos naturales y humanos del país, evitando medidas que hicieran recaer el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores o que intentaran resolverla a costa del despilfarro de los recursos naturales no renovables. La clase obrera pretendía un gobierno que defendiera con intransigencia sus intereses. Sin embargo, las vanguardias políticas no pudieron llegar a la solución ansiada por la clase obrera y permitieron que la iniciativa fundamental quedara en manos de la derecha, a cambio de una ocupación temporal del Palacio de Gobierno y de los Ministerios.

El futuro político boliviano quedó definido en sus rasgos fundamentales, en el momento en que se aceptó la Convocatoria al Congreso de 1980, como salida para la crisis política. Gracias a ella los viejos personajes de la política criolla que se batían en retirada, reaparecieron en el Parlamento y detrás de él como los árbitros del acontecer político. Incluso muchos de ellos habían des-

empeñado cargos ministeriales⁴⁶ y otros altos puestos durante el gobierno de García Meza, y ahora aparecían como demócratas, representantes de la soberanía popular. Los que no sólo habían negado la democracia, sino que la habían pisoteado, emergían ahora como usufructuarios del proceso democrático.

Al inaugurarse el Parlamento dos asientos estaban vacíos: los de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Gualberto Vega, salvajemente asesinados en la sede de la COB, el 17 de julio de 1980. La ausencia de Quiroga Santa Cruz representaba por sí sola un cambio trascendental que determinaba que el Parlamento instalado en 1982 no fuera el mismo que se había elegido en 1980, hecho suficiente para invalidar moralmente su convocatoria. Después de contemplar este penoso cuadro parecería que el Golpe de Estado de 1980 y toda la furiosa represión que desencadenó, tuvo un solo propósito: eliminar del escenario político la figura de Quiroga Santa Cruz.

IV

OTRA VEZ LA DEMOCRACIA EN PELIGRO

Uno de los grandes compromisos de la UDP al asumir el gobierno fue el de enfrentar la crisis y conservar la

46 - Por ejemplo, Mario Rolón Anaya fue Canciller de García Meza y apareció luego en el Parlamento como Senador de la República. El ahora poderoso hacendado Rolón Anaya tuvo a su cargo en su función de Canciller, la espeluznante misión de entregar a los familiares de Marcelo Quiroga Santa Cruz, un paquete con huesos semicalcinados que según él correspondían a los despojos mortales del dirigente popular asesinado el 17 de julio de 1980.

democracia. Ambas tareas exigen condiciones muy especiales en el manejo del gobierno. La posibilidad de cumplirlas no depende solamente de la capacidad de los gobernantes, sino de factores internos y externos que definen en gran medida los grados de libertad para la acción gubernamental. Debido a esto es que el problema más importante en Bolivia no es el de llegar al poder sino el de en qué condiciones.

Para comprender la importancia del compromiso es útil referir brevemente las características fundamentales de la crisis. No se trata simplemente de desajustes en la esfera de la circulación de las mercancías, sino que se debe esencialmente a lo que ocurre en la producción, Es una crisis de producción. Pero no sólo eso, su característica dominante consiste en que es una crisis en el modelo o patrón de acumulación de capital. Es, pues, un fenómeno que abarca al conjunto de la sociedad y no solamente a algunas variables económicas.

La fuente tradicional de los excedentes económicos que sirven de base al proceso de acumulación de capital en Bolivia es la minería. Pero, esta actividad está viviendo una crisis muy antigua. En realidad, desde la década de los años treinta —o sea desde los mejores años de la Rosca— no se realizaron inversiones significativas en prospección y desarrollo de nuevos yacimientos. Durante el período posterior a la Revolución de abril de 1952, la minería tampoco recibió corrientes impor-

tantes de inversiones, con excepción del Plan Triangular que era, antes que nada, de rehabilitación. De esta forma, los yacimientos conocidos se fueron agotando, sin que se abrieran nuevas minas o se descubrieran y probaran reseñas de importancia. El agotamiento de los yacimientos provoca la disminución acelerada de la ley de cabeza de los minerales que se extraen.

La minería, es por tanto, una actividad en crisis.

Después de 1952, una de las líneas dominantes de la política económica consistió en promover la explotación de los hidrocarburos. Se trasladaron cuantiosos recursos desde la minería hacia el petróleo y el gas. Aunque se descubrió reservas importantes de gas, las de petróleo no respondieron a las expectativas. Durante el régimen de Bánzer se sobreexplotaron las reservas petrolíferas con fines de exportación, debido a lo cual se produjo un rápido agotamiento de las mismas, hasta el punto de que Bolivia corre el riesgo de convertirse en importador de gasolina.

Esto demuestra que también el sector hidrocarburos enfrenta una crisis.

La situación de la agricultura no es bonancible. La agricultura tradicional del altiplano y los valles está aprisionada por el minifundio que le impide elevar los índices de productividad. La no tradicional, del Oriente, ha sufrido una reducción muy acelerada en los ren-

dimientos actuales de los principales cultivos (p.e. caña de azúcar, arroz, algodón, etc.) debido al empobrecimiento de los suelos. En los últimos años la agricultura creció a una tasa inferior al aumento poblacional. La crisis de la agricultura es un hecho innegable.

La industria que transforma materias primas nacionales está afectada por dos factores: la crisis de la agricultura nacional y la enorme importación de materias primas extranjeras. La industria local no ha sido hasta ahora una actividad que impulse la producción interna de materias primas debido a que, por las ventajas cambiarias, resultó siempre más lucrativo traerlas desde otros países. De ahí que sean muy escasos los efectos de la industrialización sobre las actividades primarias abastecedoras. Más aún, las ramas industriales que se abastecen con insumos locales son muy débiles y carecen de importancia en el conjunto.

Esta rápida reseña de la situación de los sectores productores de bienes materiales muestra que, debido a la crisis que atraviesan, los excedentes acumulables se han reducido y siguen una tendencia hacia una mayor reducción. Éste es, pues, el aspecto central de la crisis económica. Pero tiene que ver, además, con el mal uso que se hace del excedente.

Por un lado, la fuga de excedentes es uno de los problemas más graves de Bolivia. Según datos oficiales,

en los últimos tres años han fugado del país capitales por más de mil millones de dólares.⁴⁷ Estas salidas de capital se dan bajo la forma de cuentas bancarias en Estados Unidos, Panamá, las Bahamas, Suiza y otros países; de inversiones en el exterior; de compra de viviendas y otros bienes durables en el extranjero; etc. La fuga de capitales se facilita porque la parte sustancial de estos excedentes (minerales, gas, productos agropecuarios de exportación, etc.) tiene que ser transformada en divisas que luego pueden ser convertidas en importaciones de bienes de capital.

Hacer fugar divisas es una operación poco complicada cuando existe un sistema financiero proclive a hacerlo.

Una forma menos abierta de fuga de excedentes se da bajo la forma de importaciones superfluas. Desde la instauración del régimen de Bánzer Suárez en 1971, las importaciones han crecido excesivamente, hasta alcanzar niveles que el país no puede soportar a base de su capacidad corriente de importaciones. Y lo que es peor, la mayor parte de estas importaciones viene a satisfacer un consumo deformado y a cubrir las necesidades de materias primas de una, industria que produce bienes para grupos elitarios de la sociedad boliviana. Las de-

47 — En el libro *Siete años de economía boliviana* se presentan los datos estadísticos sobre el crecimiento de las cuentas bancarias de ciudadanos bolivianos en bancos de Estados Unidos, durante el régimen de Banzer. (Ramos, Pablo: *Siete años de economía boliviana*, Edit. PUERTA DEL SOL, Tercera Edición, 1982, p. 226).

formaciones del consumo y de la estructura industrial presionan para elevar los niveles de importación, reduciendo a su mínima expresión los saldos acumulables.

Pero esto no es todo. Con el fenómeno de la dolarización introducido por Bánzer Suárez, se ha agravado el problema del mal uso de los excedentes. La dolarización implicó la sustitución del peso boliviano por el dólar norteamericano en la función de depósito de valor o instrumento de acumulación de riqueza, es decir, la dolarización dio lugar a la utilización de esta moneda extranjera como unidad de cuenta y medio de conservación de valor, en reemplazo de nuestra propia moneda. Esto condujo a la esterilización de una parte significativa de los excedentes, bajo la forma de atesoramiento en dólares. Lo más grave de la dolarización consiste en que institucionaliza la desconfianza y el escepticismo con respecto al cumplimiento de las funciones esenciales de la moneda nacional. Por tal desconfianza, los poseedores de pesos bolivianos prefieren convertirlos en dólares para protegerse frente a las posibles pérdidas de poder adquisitivo. El atesoramiento en dólares significa una sustracción del excedente reduciendo aún más los saldos acumulables.

De otra parte, el tipo de crecimiento económico que el país experimentó en los años del régimen de Bánzer condujo a una esterilización de los recursos en inversiones no reproductivas y en el sector terciario. Las

actividades mejor estimuladas fueron las de servicios, tales como las finanzas, comercio, administración y otras; como se sabe, los servicios no crean excedentes, pero los consumen. De manera que, por una parte, los sectores productores de excedentes (agricultura, minería, hidrocarburos, etc.) confrontan un crónico deterioro en las condiciones de producción y, por otra, los servicios, que típicamente consumen excedentes, han sido vigorosamente incentivados, hasta el punto de provocar un profundo desequilibrio con respecto a la producción material.

Debe destacarse también que el modelo banzerista utilizó dos elementos que tuvieron y tiene enorme peso en la profundización de la crisis. Ellos se refieren, por un lado, al uso de los mecanismos inflacionistas y, por otro, al gigantesco endeudamiento externo. Ambos elementos ejercen una influencia acumulativa en el proceso de la crisis. La inflación obedeció básicamente a la exagerada expansión del crédito bancario al sector privado vinculado con el régimen. El exceso de liquidez no podrá ser absorbido en muchos años debido al deterioro, ya apuntado, de los sectores de la producción material. Más aún, la inflación exige más inflación, es decir, cantidades cada vez mayores de medio de pago en circulación.

El endeudamiento externo se ha constituido en el factor de estrangulamiento de mayor incidencia. El servicio de

la deuda externa, por intereses y amortizaciones, provoca el desequilibrio fiscal y el de la balanza de pagos, y esteriliza cerca del 80 por ciento de la capacidad para importar procedente de las exportaciones. Manejada con absoluta irresponsabilidad y, al parecer, con enorme deshonestidad, la deuda externa condujo a una virtual hipoteca no sólo de las posibilidades de crecimiento, sino hasta de los medios indispensables para mantener los niveles actuales de vida. En otras palabras, el servicio de la deuda no sólo deja al país sin saldos para acumular, sino también sin los recursos para adquirir los bienes que vitalmente necesita el pueblo para subsistir. Casi la totalidad de las divisas que el país recibe están comprometidas para pagar la deuda externa.

Es indudable que la crisis no sólo se debe a factores internos. La profunda depresión por la que está atravesando la economía mundial capitalista afecta de manera directa a la economía boliviana. Cuatro son las vías principales por las que se descarga la crisis mundial sobre nuestro país: 1) la caída de los precios de los principales productos de exportación; 2) el alza de los tipos de interés en el mercado de capitales; 3) la reducción de los fondos públicos de financiamiento (privatización de la deuda) y 4) la inflación mundial que encarece los bienes importados (de consumo, materias primas y maquinarias). Si bien estos factores están fuera del control de las autoridades nacionales, es mucho lo que se puede y debe hacer para defenderse de ellos.

Éstas son pues las causas principales de la crisis. Resumiéndolas se nota: 1) reducción de los excedentes acumulados, por la caída en la producción material; 2) mal uso de los excedentes (fuga de capitales, importaciones superfluas, distorsiones en el consumo y la estructura industrial, atesoramiento en dólares, etc.); 3) la inflación y el endeudamiento externo provocados por la política económica del régimen de Bánzer Suárez y 4) los factores externos.

La crisis se manifiesta en esferas tales como el déficit de la balanza de pagos, el déficit fiscal, los desarreglos monetarios, el alza de precios, los problemas cambiarios, la desocupación, desabastecimiento y, principalmente, en la reducción del poder adquisitivo de los sueldos y salarios. Éstos son efectos de la crisis. Pero en la medida en que no son controlados se convierten en factores que retroalimentan la crisis. Es decir, ellos mismos generan nuevos desajustes que van a reforzar las causas originales del fenómeno. Por ejemplo, los problemas cambiarios pueden (y lo están haciendo) acentuar los problemas de la producción y conducir a una mayor reducción de la misma. Pero, como ya se dijo, no se trata sólo de una crisis económica. Es también una crisis social y política. El aspecto saliente de la crisis social se refiere a la ausencia de un actor social interesado en superar la crisis. Aquí se reitera que la burguesía boliviana no tiene sus intereses fundamentales vinculados con el país. Bolivia le sirve como fuente

de excedentes para trasladarlos y disfrutarlos en el extranjero. No es una clase social que “se la juegue” por el país. En gran medida vive a expensas del Estado. Más aún, el comportamiento de esta clase es un factor decisivo en todo el proceso de la crisis. No es solamente su debilidad como clase, sino su falta de sentido nacional. Es obvio que la clase empresarial boliviana está orgánicamente incapacitada para plantear soluciones verdaderas a la crisis. Ella no podría herir sus propios intereses con medidas de transformación para remover las causas de la crisis.

La crisis política es, en esencia, la crisis del Estado burgués. Tiene que ver con la cuestión central de la hegemonía que las clases dominantes pueden ejercer en el conjunto de la sociedad boliviana. La ausencia de bloques hegemónicos duraderos se traduce en la crónica inestabilidad política boliviana. Éste es un fenómeno que tiene que ver con el nivel y la potencialidad del desarrollo de las clases y fracciones dominantes.

Dichas clases y fracciones están incapacitadas para colocarse a la altura de las exigencias históricas actuales y no pueden producir un Estado fuerte, coherente y dinámico. Esto se observa en el hecho de que es el propio Estado el que tiene que cohesionar a las clases y fracciones dominantes. En síntesis, la crisis política se refiere a la fragilidad de las estructuras del poder.

Esta apretada síntesis de la crisis permite comprobar que sólo una profunda transformación puede eliminar sus causas básicas y colocar las premisas para un proceso de auténtico desarrollo de la sociedad boliviana. Se requiere para ello un gobierno fuerte, capaz de decidir y ejecutar sus decisiones. Se requiere un gobierno de amplia base popular y que controle no solo el Ejecutivo sino todos los mecanismos del poder estatal. De lo contrario no puede enfrentar la crisis y corre el riesgo no sólo de esterilizarse sino de perecer ahogado por los problemas que no alcanza a resolver.

Esta realidad se verá muy nítida en agosto - septiembre de 1982. Los componentes más esclarecidos de la UDP sabían que con una política económica corriente no se iba a superar la crisis, se requería una política económica estructural. En una política de este tipo no puede haber claudicaciones frente a los enemigos del país y de pueblo. Pero no faltó un partido que mostrara sus debilidades por llegar al gobierno, a cualquier costa. Esa ambición irreflexiva impidió que la UDP definiera una posición táctica firme y coherente para lograr una solución que expresara la realidad política posterior al agotamiento del ciclo militar.

Una vez asumido el gobierno, dentro del “chaleco de fuerza” impuesto por los condicionamientos de la derecha y el imperialismo, la UDP comenzó a desgastarse desde el primer día en que tomó a su cargo el manejo

del gobierno. No podía ser otro el precio de asumir el Poder Ejecutivo con tantas restricciones. Además, el gobierno fue cayendo en su propia trampa de los plazos fijados por el mismo, con uno u otro pretexto. Así tenemos el plazo para las “primeras medidas”, el plazo de los “cien días”, el plazo del “retorno del MIR”, el plazo de la “recomposición de la UDP”, el plazo del “co-gobierno” y el que ahora está pendiente, el del “gobierno de gran consenso” (fijado para diciembre de 1983). Pero, mientras los plazos vencen, la crisis se agrava, el gobierno se debilita y se agrandan los peligros que amenazan a la democracia.

El primer equipo de gobierno de la UDP estuvo dominado por el MIR, partido que tomó a su cargo todos los ministerios económicos más importantes. De manera que las primeras medidas de política económica fueron de responsabilidad total de ese partido, pues los demás —según se sabe— simplemente aprobaron lo que propuso el gabinete económico. El primer programa que se aplicó, el de 5 de noviembre de 1982, fue considerado como el punto de partida de una nueva política económica. Incluyó algunas medidas importantes para controlar la crisis, pero todas tuvieron un carácter coyuntural. No incluyó muchas que deberían haberse tomado de entrada por el gobierno democrático. Sin embargo, el discurso político hacía suponer que las medidas de fondo (estructurales) vendrían después, dentro del plazo de los 100 días.

Aquí hubo un error de enfoque, muy grave. En una situación que exige medidas trascendentales, éstas deben ser tomadas con rapidez. Tal es el secreto del éxito de la política económica. Así, medidas como la estatización de la banca, el monopolio estatal del comercio exterior, el control de las divisas, la organización estatal de los abastecimientos, la co-gestión obrera en las empresas del Estado, la escala móvil de salarios, el estudio de la deuda externa por el Parlamento, la municipalización del transporte y la energía eléctrica, la movilización popular, el reajuste de precio de los carburantes, la reorganización de las empresas públicas, etc., debían ser aplicadas en los primeros días de gobierno. Existían circunstancias muy favorables para hacerlo. Entre ellas puede anotarse que las Fuerzas Armadas estaban en la retirada y no podían retroceder en sus decisiones, posibilidades de Golpe de Estado no existían, la derecha estaba arrinconada, el pueblo apoyaba con entusiasmo al proceso democrático y esperaba medidas importantes, la UDP estaba relativamente unida y hablaba todavía un lenguaje de cambios estructurales. Si adoptaba estas medidas al comienzo de su gestión, la UDP hubiese mostrado al pueblo que era su gobierno y el pueblo hubiese aceptado los sacrificios para vencer la crisis, porque eran sacrificios con esperanzas, sacrificios que valían la pena.

Para agravar los problemas, hasta la naturaleza jugó una mala pasada al pueblo boliviano. La sequía que

está afectando al Altiplano es el peor azote a la magra economía de millones de campesinos que han perdido sus cosechas y su ganado. Como nunca, el hambre recorre con su horrible espectro las desoladas tierras altiplánicas donde está muriendo la escasa flora y fauna que hasta ahora habían sobrevivido pese a las inclemencias del tiempo. Un el otro extremo, las inundaciones destruyeron gran parte del capital invertido en la agricultura no tradicional del Oriente y echó a perder las cosechas. A raíz de estas catástrofes naturales se agravó el desbalance alimenticio, en un país donde el hambre no es de días sino de siglos. El pueblo boliviano está sufriendo otra de sus tragedias más dolorosas. De ahí la imperiosa necesidad de que todos actúen con la mayor responsabilidad y con la mayor conciencia de que la hora no sólo es difícil sino trágica.

Pero, en Bolivia exigir responsabilidad a las clases y fracciones dominantes es como predicar en el desierto. Un estos períodos de mayor hambruna las clases dominantes acentúan la especulación y hacen fugar cuantiosos capitales. El comercio, la banca y los servicios financieros en general siguen concentrando la riqueza a costa de la sangre y la vida de miles de bolivianos. Mientras los niños, hijos de campesinos y obreros, crecen desnutridos o mueren de hambre, las clases dominantes están dilapidando las divisas con las que de alguna manera se podía paliar la situación angustiosa. Evidentemente, es ingenuo exigir responsabilidad a las

clases dominantes, en un sistema en el que impera la ley de la selva.

La UDP, sin embargo, subió al gobierno sin el apoyo de las clases dominantes. Más aún, subió a pesar de su oposición (llevada al máximo con el golpe de García Meza). Al gobierno de la UDP sí se le puede exigir responsabilidad en la función a la que llegó gracias al voto mayoritario y a la presión popular. Aquí surgen las preguntas: ¿Actuaron responsablemente las fuerzas que integran la UDP en el manejo del Gobierno? ¿Respondió su accionar a las exigencias del compromiso histórico?

Sin duda que los partidos de la UDP muestran una composición social muy heterogénea. Algunos tienen una importante militancia obrera y campesina en sus filas. En otros, predominan los grupos pequeños-burgueses. En unos hay conciencia del compromiso; en otros predomina el oportunismo y el afán del poder por el poder. Por ello, la respuesta a las preguntas anteriores no puede ser la misma para todos los partidos que integran la UDP.

Por ejemplo, la crisis política de diciembre - enero de 1983 no fue resultado de causas históricas o de exigencias sustantivas en la conducción del proceso. Si se analiza tal crisis con riguroso criterio científico, se llega a la conclusión de que fue más producto de actitudes inmaduras e irresponsables —típicas del comportamiento pequeño-burgués— que de factores históricos

insoslayables. Los que provocaron esa crisis, que fue el comienzo de la descomposición de la UDP, tienen una enorme deuda con el pueblo boliviano, deuda que la historia sabrá ajustar con todo rigor, a su debido tiempo.

Asimismo, los aprestos publicitados para componer y recomponer, para entrar y para salir del gobierno, crean expectativas artificiales sobre cambios de línea en la política general y en la política económica en particular. En la política gubernamental, cuando se vive una situación de crisis tan profunda, no se puede jugar como un niño caprichoso. Una situación así exige la máxima seriedad y responsabilidad, porque de los actos de los hombres de gobierno depende la suerte de un país. En este sentido, no se puede pretender entrar y salir del gobierno, a la voz de los caprichos, como “Pedro por su casa”.

La tardanza en resolver la crisis política ha causado graves daños a la economía nacional. En una economía tan sensible, y con traumas tan profundos, como la nuestra, la incertidumbre tiene consecuencias funestas. Es sabido que en cada crisis política, se paralizan muchas actividades, a la par que los factores especulativos encuentran ancho camino para manifestarse. Un país no puede permitirse el lujo de tener “ministros renunciados” por varias semanas; es decir no debe tener ministros que no puedan decidir o asumir compromisos, en momentos que esas decisiones se esperan con ur-

gencia. Un elemental sentido de responsabilidad exige poner fin con rapidez a las crisis políticas que se presentan en el seno del gobierno.

Iguales razonamientos tienen que aplicarse al anuncio innecesario, hasta imprudente e irrespetuoso, de futuras crisis de gabinete. Durante este período democrático se ha visto que no solamente el señor Presidente, sino también los ministros y hasta dirigentes políticos que no forman parte del Gabinete, hacen con frecuencia anuncios sobre futuros o inmediatos cambios ministeriales. ¿Qué autoridad puede tener un Ministro de Estado cuya sustitución el cargo ya ha sido anunciada? ¿Qué política coherente se puede estudiar, proponer y aplicar si ya se sabe que pronto otro ministro ocupará el puesto? Estos anuncios implican una falta de consideración con personas que están desempeñando funciones de dignatarios de Estado. Todo esto se traduce en una falta de continuidad en los esquemas de la política económica. Al respecto, debe apuntarse que uno de los requisitos fundamentales de un programa económico es la coherencia, en el tiempo, de las medidas que incorpora. Las medidas no pueden ser dadas de una vez y para siempre; tienen que ser complementadas, evaluadas, corregidas y, a veces, suspendidas, de acuerdo con las reacciones, repercusiones y demás efectos sobre la realidad socio-económica. A través del tiempo es como se demuestra la consistencia de los programas. La continuidad es, por tanto, un requisito elemental. No se

puede hacer obra efectiva con ministros que apenas duran cinco meses en el gobierno y, lo que es peor, cuya sustitución ya está anunciada.

Es así como, a casi de un año de su presencia en el Gobierno, los partidos de la UDP no han logrado discutir y proponer un programa meditado de política económica. Por ejemplo, el conjunto de medidas dictadas el 5 de noviembre de 1982 constituyó una respuesta inmediata a las circunstancias que se vivían. Las proposiciones que hizo el gabinete económico, a cargo del MIR, fueron aprobadas, por la urgencia, sin mayores discusiones. Las medidas de marzo-abril tampoco tuvieron un tiempo de maduración y discusión a fin de que los partidos comprometidos ganaran conciencia de lo que están haciendo.

En este segundo caso, el gabinete económico trabajó bajo la batuta de los “ministros independientes”. Es de esperar que los próximos programas sinteticen el acuerdo de los partidos que están en función de gobierno, pues la tarea de gobernar implica una responsabilidad compartida que conlleva un costo político.

Al cerrar el balance del primer año del período democrático, se comprueba que se ha dilapidado gran parte del caudal político que el movimiento popular acumuló en los largos y difíciles años de resistencia a las dictaduras. La UDP hizo un gran derroche político, hasta

reducir peligrosamente sus márgenes de maniobra. Sin duda que no se puede imputar a todos sus componentes la misma cuota de culpabilidad en el despilfarro. Lo que se ha perdido no se podrá recuperar con lamentaciones o recriminaciones recíprocas. El juicio definitivo corresponde a la historia; el veredicto pertenece al pueblo. Algo que no debe perderse de vista es que cada frustración cuesta demasiada sangre al pueblo boliviano. Por eso, se exige a los gobernantes un comportamiento reflexivo, maduro, responsable. Cuando se ha llegado al gobierno, con el sacrificio del pueblo, se debe actuar con grandeza de espíritu.

La democracia boliviana está en peligro. Nuevamente se cierne la amenaza de una frustración para las masas populares. Las exigencias contenidas durante largo tiempo han aflorado con toda su fuerza en este período democrático. La profundidad de la crisis impone limitaciones objetivas e insalvables que impiden su atención plena. Ningún gobierno, en las actuales circunstancias, podría dar solución inmediata a los problemas que surgen en todos los campos. Menos aún puede hacerlo un gobierno como el actual que estuvo sometido, desde antes del 10 de octubre de 1982, a tantos condicionamientos. Por eso, las actitudes serias, maduras y responsables no sólo deben corresponder al gobierno, sino también a los demás partidos populares y organismos sindicales que no están en el gobierno.

Ésta es una hora trágica para el pueblo boliviano. Nadie debe pretender aumentar su caudal político a costa de más hambre, miseria y sufrimientos para el propio pueblo. Las actitudes irreflexivas dentro del movimiento popular pueden hacer tanto daño a la democracia como al gobierno.

Los brotes de anarquía tienen que ser necesariamente controlados, porque disminuyen la fortaleza del movimiento popular. La clase trabajadora ha demostrado en todos estos años que es el único sostén en que puede afianzarse la nación boliviana. La clase obrera ha sido siempre la víctima de las dictaduras militares que se instauraron para servir los intereses de las clases dominantes y el imperialismo. La derrota de la democracia significará, en estas circunstancias, una nueva derrota de la clase trabajadora. Por eso mismo, el movimiento popular no puede debilitarse con los brotes de anarquía que generalmente surgen bajo la influencia de grupos pequeños-burgueses radicalizados.

Las clases dominantes están en la ofensiva abierta. Han acorralado al gobierno de la UDP y van estrechando el cerco. Las agencias del imperialismo, como el FMI, están a la espera del momento oportuno, que ya lo ven próximo. Si logran sus propósitos de frenar el proceso democrático, no se detendrán ahí, sino que procurarán completar su obra, desarticulando y destruyendo el movimiento popular.

La unidad y el fortalecimiento de la clase obrera es, ahora y siempre, la primera responsabilidad de sus dirigentes.

La Paz, septiembre de 1983

Prohibida su venta

"Para las nuevas generaciones: en dictadura no se respetan los derechos humanos, políticos, sociales, civiles... (...) en dictadura sólo se persiguen a los movimientos sociales y obreros con exilio, confinamiento, desapariciones, opresión y genocidio"

**Evo Morales
21-08-2016**



**Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social**

Prohibida su venta